

Causa Rol N° 45.355.-

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio Mesa Latorre.

Temuco, veintinueve de abril de dos mil veintitrés. -

VISTOS:

ÍNDICE

I.	Relación de la Sentencia.....	2 - 4
II.	Resumen ejecutivo.....	4 - 5
III.	Actuarios de tramitación y dato técnico.....	5
IV.	En cuanto a la Acción Penal:	
	A. Declaraciones	6 - 54
	B. Documentos.....	55 - 63
	Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	63 - 67
	Calificación jurídica de los hechos.....	67 - 71
	Concepto de Lesa Humanidad.....	71 - 73
	C. Declaraciones indagatorias:	73 - 81
	D. Análisis de las declaraciones indagatorias.....	81 - 104
	E. En Cuanto a las Defensas:	
	Defensa del abogado.....	104 - 106
	F. Análisis de las defensas:	
	Consideraciones previas al análisis de la defensa:	
	Obligación de Investigar.....	107 - 122
	Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunales Alemanes.....	122 - 132
	Estado de Derecho.....	132 - 137
	Convenio de Ginebra.....	137 - 138
	G. Análisis de la defensa específica:.....	138 - 141
	H. Acusación particular.....	141 -142
	I. Adhesiones a la Acusación Judicial.....	143
	J. Reflexiones sobre lesa humanidad.....	143 - 149
	K. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:	
	Atenuante de Responsabilidad Penal.....	149 - 150

Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....	150 - 153
Agravantes de Responsabilidad Penal.....	153 - 154
Determinación de la Pena.....	154 - 155
Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....	155 - 162
V. En cuanto a la Acción Civil:	
Demanda civil.....	162 - 165
Contestación de la demanda civil.....	165 - 170
Análisis de la contestación de la demanda civil.....	170 - 180
Acreditación probatoria del daño moral.....	180 - 182
Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....	182 - 183
VI. Aspectos Resolutivos.....	183 - 186

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N°45.355** del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, para investigar el delito de **Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo** y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. JORGE ENRIQUE SCHWEIZER GÓMEZ, R.U.N 1.888.137-3, chileno, natural de Santiago, casado, fallecido según consta en certificado de defunción a fs. 1.784 (Tomo V).

2. DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO, R.U.N 2.582.797-K, chileno, natural de Ovalle, casado, de 86 años de edad, Sargento primero en situación de retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, camino Quilapilún, parcela 25 s/n, comuna de Til Til, región Metropolitana, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 1.411 a fs. 1.415 y de fs. 1.591 a fs. 1.596 Tomo IV).

A **fs. 35 a fs. 46 (Tomo I)**, se inició la causa mediante querella criminal de fecha 27 de noviembre de 2012, interpuesta por el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla Mackenney, en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, consumados, cometidos en la persona de José Ignacio Beltrán Meliqueo, solicitando se sancione al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A **fs. 76 a fs. 80 (Tomo I)**, con fecha 09 de mayo de 2013, interpuso querella criminal Carlos Oliva Troncoso, Presidente de la Agrupación de Familiares Amigos Derechos Humanos, en contra de todos aquellos que resulten responsables, por su intervención en calidad de autores, cómplices y encubridores, en el delito de secuestro calificado, consumado, cometido en perjuicio de José Ignacio Beltrán Meliqueo, solicitando sancionarlo al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A **fs. 201 a fs. 202 (Tomo I)**, con fecha 08 de enero de 2015, interpuso querella criminal David Alberto Morales Troncoso, en representación de Celinda María Melihuén Mellado y otros, por el delito de homicidio calificado, en contra de los agentes del Estado y en contra de todos los que resulten responsables condenándolos al máximo de las penas legales, con costas.

A **fs. 1.426 a fs. 1.470 (Tomo IV)**, con fecha 08 de julio de 2021, se sometió a proceso a **JORGE ENRIQUE SCHWEIZER GÓMEZ y a DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO**, como autores del delito de secuestro calificado en su carácter de lesa humanidad en la persona de José Ignacio Beltrán Meliqueo, perpetrado a contar del 15 de octubre de 1973, sometiéndolo a prisión preventiva.

A **fs. 1.615 (Tomo IV)**, con fecha 26 de noviembre de 2021, **se declaró cerrado el sumario.**

A **fs. 1.617 a fs. 1.659 (Tomo V)**, con fecha 14 de diciembre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **JORGE ENRIQUE SCHWEIZER GÓMEZ y DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO**, como autores del delito de secuestro calificado en su carácter de lesa humanidad en la persona de José Ignacio Beltrán Meliqueo, perpetrado a contar del 15 de octubre de 1973, en la comuna de Lautaro.

A **fs. 1.729 a fs. 1.739 (Tomo V)**, el abogado David Alberto Morales Troncoso, en representación de Luis Nicolás Beltrán Melihuén y otros, en lo principal de su escrito se **adhiera a la acusación fiscal**. Al primer otrosí deduce **demanda civil de indemnización** de perjuicios en representación de Luis Nicolás Beltrán Melihuén y otros, en contra del Fisco de Chile, por concepto de reparación del daño moral sufrido a consecuencia del secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo.

A **fs. 1.745 (Tomo V)**, el abogado Sebastián Saavedra en representación de la Agrupación de Familiares Amigo Derechos Humanos, se adhiere a la acusación fiscal.

A fs. 1.748 a fs. 1.757 (Tomo V), la abogada Carolina Contreras Rivera, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formula **acusación particular**.

A fs. 1.799 (Tomo V), con fecha 07 de marzo de 2022, se **sobresee definitiva y parcialmente** a **Jorge Enrique Schweizer Gómez**, por fallecimiento tal como consta en certificado de defunción a fs. 1.784 (Tomo V).

A fs. 2.082 a fs.2.108 (Tomo VI), el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Saez Willer en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil**. Solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas.

A fs. 2.130 a fs. 2.137 (Tomo VI), el abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Domingo Antonio Campos Collao, en lo principal de su escrito **contesta acusación particular y adhesión a la acusación fiscal**.

A fs. 2.139 (Tomo VI), con fecha 24 de octubre de 2022, se recibió **la causa a prueba**.

A fs. 2.204 (Tomo VI), con fecha 17 de noviembre de 2022, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 2.205 (Tomo VI), con fecha 17 de noviembre de 2022, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs. 2.206 (Tomo VI), se dictaron medidas para mejor resolver.

A fs. 2.238 (Tomo IV), con fecha 29 de abril de 2023 se trajeron los **autos para fallo**.

II. RESUMEN EJECUTIVO

- ACCIÓN PENAL 1° al 30 °:

1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones y Documentos); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y 7°) Concepto de Lesa Humanidad; 8°) Declaración Indagatoria de Domingo Antonio Campos Collao; 9°) y 10°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 11°) Defensa del Abogado Patricio Contreras Boero; 12°) y 13°) **Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa:** Obligación de investigar. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por Tribunales Alemanes. Estado de Derecho. Convenio de Ginebra; 14°) Análisis de Defensa Específica del Acusado Domingo Antonio Campos Collao; 15°) Acusación Particular de la abogada Carolina Contreras Rivera; 16°) Análisis de la acusación particular; 17°) Adhesión a la Acusación del abogado David Morales Troncoso en representación de los querellantes; 18°) Adhesión a la Acusación del abogado Sebastián Saavedra en representación de la querellante; 19°) Análisis de la adhesiones a la acusación; 20°) Reflexiones sobre lesa humanidad; **Circunstancias**

Modificatorias de Responsabilidad Penal: 21°) Atenuante de Responsabilidad Penal; 22°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 23°) y 24°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 25°), 26°) y 27°) Determinación de la pena; 28°), 29°) y 30°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

- **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 31° al 36°:**

31°) Demanda Civil interpuestas por el abogado David Morales Troncoso, en representación de Luis Nicolas Beltrán Melihuén y otros; 32°) Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado; 33°) Análisis de la contestaciones de las demandas civiles efectuadas por el Fisco de Chile; 34°) Acreditación probatoria del daño moral; 35) Montos; 36°) reajustes e intereses de las sumas demandadas.

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- A. Fecha de inicio de la causa: 11 de diciembre de 2012
- B. Actuario de Tramitación Sumario: Marcelo Varas Cicarelli, Gonzalo Millalén Gutiérrez, Ignacia Pérez García, Yessica Sobarzo Tragol, Pablo Lazcano Cárdenas.
- C. Actuario de Tramitación Plenario: Leslie Villalobos Retamal y Yessica Sobarzo Tragol.
- D. Tomos: VI
Tomo I de fs.1 a fs. 356;
Tomo II de fs. 357 a 805;
Tomo III de fs. 806 a 1.183;
Tomo IV de fs. 1.184 a fs. 1.616;
Tomo V de fs. 1.617 a fs. 1.956;
Tomo VI de fs. 1.957 en adelante;
Cuaderno reservado I tomo de 168 fojas.
- E. Fojas 187
- F. Considerandos 36

CONSIDERANDO:

IV. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1°) Que a fs. 1.617 a fs. 1.659 (Tomo V), con fecha 14 de diciembre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **Jorge Enrique Schweizer Gómez** (quien fue sobreseído definitiva y parcialmente a fs. 1.799 Tomo V), y **Domingo Antonio Campos Collao**, como autores del delito de secuestro calificado en su

carácter de lesa humanidad, en la persona de José Ignacio Beltrán Meliqueo, perpetrado a contar del 15 de octubre de 1973, en la comuna de Lautaro.

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del ilícito penal señalado, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 1.617 a fs. 1.659 (que corren de fs. 1 a fs. 1.659), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES:

- | | |
|--|---|
| 1. Celinda María Melihuén Mellado | 22. Hernán Patricio J. A. Mardones Díaz |
| 2. Marcial Edmundo Vera Ríos | 23. Rafael García Ferlice |
| 3. Víctor Matus Vásquez | 24. Jorge Nibaldo Del Río Del Río |
| 4. Robinson Fernando Castillo Orellana | 25. Mario Larrañaga Mora |
| 5. Carlos Mariano Beltrán Melihuén | 26. Nilo Fidel Marín Acuña |
| 6. José Domingo LLabulen LLaulen | 27. Hilda del Carmen Fuentes Ortega |
| 7. Francisca LLaulen Antinao | 28. Víctor Manuel Arias Cereceda |
| 8. Margarita Del Carmen Cuevas Navarrete | 29. Rene Inocencio Rabanal Romero |
| 9. Raquel Cuevas Navarrete | 30. Salvador Del Carmen Zuñiga Rivera |
| 10. Mercedes Huaiquilao Ancaten | 31. Ida Del Carmen Meliquen Quilodran |
| 11. Martín Colicheo Melihuen | 32. Domingo Benedicto Meliquen Morales |
| 12. Luisa Milla Montuy | 33. Carlos Antonio Navarro Schifferli |
| 13. Flor María Caniu Milla | 34. José Rafael Meliqueo Ancaten |
| 14. Hilda Teresa Morales Jaque | 35. Luis Nicolás Beltrán Melihuén |
| 15. Pedro Huenuel Huaquil | 36. José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén |
| 16. Luis Gabriel Grunewaltd Millapan | 37. Verónica Yanet Beltrán Melihuén |
| 17. Mario Ponce Orellana | 38. Daniel Manuel E. Navarro Campos |
| 18. Sergio Manuel Jara Sandoval | 39. Luis Armando Rovant Hidalgo |
| 19. Santiago Millangir Hueche | 40. José Arturo Araneda Pulgar |
| 20. Enrique Ferrier Valeze | 41. Hugo Gómez Cofre |
| 21. Paicavi Lemolemo Painemal Morales | 42. Jorge Enrique Schweizer Gómez |

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1. CELINDA MARÍA MELIHUÉN MELLADO (40 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 67 a fs. 68 (Tomo I); de fs. 85 (Tomo I); de fs. 361 a fs. 362 (Tomo II); de fs. 725 (Tomo II); de fs. 745 (Tomo II); de fs. 945 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de febrero de 2013, rolante a **fs. 67 a 68 (Tomo I)**, narra que, a la edad de 18 años se casó con José Ignacio Beltrán Meliqueo, con quien tuvo 10 hijos, de los cuales cuatro se encuentran con vida actualmente. Que José Ignacio Beltrán Meliqueo, era un pequeño agricultor, quien el día 15 de octubre de 1973, siendo alrededor de las 08:00 horas, salió vestido con pantalón de tela color café, un chaqueta color plomo, una camisa color blanco, unos zapatos tipo bototos color amarillo y un sombrero de huaso de género color negro, con destino a la ciudad de Lautaro, con la finalidad de comprar semillas de trigo para sembrar. Que en horas de la tarde-noche, un tío de José, de nombre Amaro (fallecido), quien vivía en la misma comunidad, llegó a la casa y le contó que su esposo había sido detenido por carabineros de Lautaro, cosa que él había visto y que había sido un carabinero de nombre Domingo Campos, otro de apellido Ponce y otro de apellido Berrios, señalándole que al día siguiente iría a ver qué había pasado con él, ya que era muy tarde. Que al día siguiente, en horas de la mañana se apersonó en la comisaría de carabineros de Lautaro, donde al consultar por su esposo, le respondieron que lo habían soltado el mismo día que lo habían detenido, por lo que regresó a su casa y al ver que no había llegado concurrió nuevamente a carabineros de Lautaro, donde se le informa que a José lo habían soltado, por lo que comenzó a buscarlo entre amigos, familiares, hospitales, cárcel de Temuco, sin saber nada de él, pensando que se había ido de la casa. Después de haber pasado unos 20 años fue citada al Juzgado de Lautaro, donde le informan que su esposo, o los restos de su esposo, habían sido encontrados en una fosa común en el cementerio de Lautaro; donde además le comentaron que José Ignacio estuvo seis días detenido en carabineros de Lautaro y que ahí le habían dado muerte.

En declaración judicial de fecha 14 de junio de 2013, rolante a **fs. 85 (Tomo I)**, ratifica la declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile que rola a fs. 67 y 68. Puntualiza que, quien sabe lo que paso con su esposo es el carabinero Campos Collao, que éste fue quien participó en su detención. Que cuando concurrió hasta el retén de carabineros a preguntar por su esposo, no estaba Campos Collao, la atendió otro carabinero, quien a empujones la sacó de la unidad y le dijo que su marido ya había sido liberado. Que los restos de su esposo actualmente descansan en el cementerio de la comunidad Indígena donde ella reside. Tiempo después, se encontró con un sargento de carabineros de Dollinco, de apellido "Beni", quien le contó que, a su esposo lo habían tenido 6 días en el retén de Perquenco, pero que estaba muerto, que no lo buscara más.

En declaración extrajudicial de fecha 19 de marzo de 2015, rolante a **fs. 361 a fs. 362 (Tomo II)**, manifiesta, que es la cónyuge de José Ignacio Beltrán Meliqueo, con quien contrajo matrimonio el día 6 de febrero de 1950, de cuya relación nacieron 11 hijos de los cuales en la actualidad viven cuatro, cuyos nombres son Carlos, Luis, José y Verónica. Respecto de las actividades de su marido, este solamente se dedicaba a la

agricultura en los terrenos de su propiedad. Que José no era simpatizante ni militante de ningún partido político, incluso nunca fue partícipe de las tomas de terrenos que algunos lugareños efectuaban en esa época. Que la detención de José, fue a manos de carabineros de la Comisaría de Lautaro, en circunstancias que el día 15 de octubre de 1973, mientras había concurrido hasta la ciudad de Lautaro a retirar unas semillas en INDAP, fue detenido en la plaza que está frente al Regimiento La Concepción, por los carabineros Domingo Campos, Enrique Ferrier y Mario Ponce, a quienes ubicaba muy bien, principalmente a Domingo Campos, quien residía en las cercanías del domicilio de la deponente, en el campo. Añade que, lo anterior lo supo por boca de José Rafael Meliqueo Ancatén, quien era primo de su marido y fue testigo de su detención. Recuerda que, José le comentó dicha situación en la tarde de ese mismo día, cerca de las 18:00 horas. Al día siguiente viajó en micro hacia Lautaro, y concurrió a la comisaría de carabineros, siendo atendida por un carabinero, quien, tras ser consultado por su marido, se limitó a contestar que aquel ya no estaba ahí y a empujones la obligó a retirarse del lugar. Que dada la situación, viajó a Temuco y consultó en carabineros y cárcel Pública, pero en dichos lugares no tenían registro de su permanencia. Recuerda que estuvo cerca de un año buscándolo, pero nunca tuvo noticias sobre su paradero. Hace presente que, en una oportunidad sostuvo una conversación con Manuel Benni, quien era carabinero y este le advirtió, en dicha oportunidad, que no buscara más a su marido debido a que se encontraba muerto, comentándole, incluso que él sabía que había permanecido en la Comisaría de Lautaro cerca de 6 días, siendo sacado de esta por unos funcionario cuyas identidades no le dio a conocer. Agrega, que lamentablemente Manuel Benni, en la actualidad está fallecido. Que, después de unos años, cree que el año 1992, se presentó en su domicilio un carabinero de nombre Carlos Parra, quien le dejó una citación para el Juzgado de Lautaro, ignorando, la deponente, de qué se trataba. Es por lo anterior, que concurrió para la fecha de la cita, y el Juez que la atendió le indicó que habían encontrado a su marido y con ello, procedió a hacerle entrega de una urna con sus ropas, las cuales reconoció. Luego de la entrega, procedieron a darle sepultura en el cementerio de la comunidad Manuel Levinao. Al tiempo después fue contactada por una señora que residía en la calle del medio, y que era cónyuge de otra víctima de apellido Lizama, por medio de la cual se enteró que la familia de la señora, por motivos de encontrarse buscando los restos de su marido, encontraron lo de José, en las afueras del cementerio de Lautaro, agregando que, los Tribunales, inclusive habían dado una orden judicial a carabineros para buscar sus restos. Hace presente que, la señora aludida, además le comentó que el entonces encargado del cementerio, sabía el lugar en donde fueron enterradas otras víctimas; lamentablemente ignora la identidad de este señor y con la cónyuge de Lizama, perdió contacto e incluso no recuerda su nombre.

En declaración judicial de fecha 09 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 725 (Tomo II)**, atestigua que efectivamente está casada legalmente con José Ignacio Beltrán

Meliqueo, quien el día lunes 15 de octubre de 1973 salió de la casa con destino a buscar una semilla de trigo a la oficina de INDAP, y desde esa fecha que no ha regresado a casa. Añade que según comentarios de terceras personas su esposo habría sido detenido por carabineros de Lautaro. Al día siguiente concurrió a dicha ciudad y en la comisaría se le informó que había estado allí, pero luego de ser interrogado habría quedado en libertad. Recalca que, como lo ha dicho, nunca más regresó a la casa. Según comentarios de terceras personas, su esposo fue detenido por los funcionarios de carabineros de esa fecha, Domingo Campos y Enrique Ferrier, lo que no le consta, debido a que ella en esa fecha se encontraba en su casa. Que mucha gente comentaba que su marido estaría enterrado en un pozo ubicado en el predio del señor Roussel, junto a otros cuerpos, lo que tampoco le consta.

En declaración judicial de fecha 08 de noviembre de 1993, rolante a **fs. 745 (Tomo II)**, expone que el día 29 de octubre de 1993, concurrió al Tribunal junto a su hijo, Mariano Beltrán, con la finalidad de reconocer los restos que quedaban de su esposo José Ignacio Beltrán Meliqueo; agrega que efectivamente correspondían a él, ya que los zapatos y restos de ropas que se le exhibieron, eran las que él usaba el día que salió de la casa en el año 1973, motivo por el cual, su hijo declaró en el Juzgado, retirando los formularios correspondientes para su sepultación. Cuenta, que se encontraba muy afectada. Finaliza señalando que, los restos de su esposo fueron sepultados en un cementerio mapuche que se encuentra ubicado en la Reducción Manuel Levinao.

En declaración judicial de fecha 21 de junio de 2016, rolante a **fs. 945 (Tomo III)**, añade que su marido desapareció el día 15 de octubre de 1973. Respecto a los responsables de su muerte, tiene conocimiento de que Ferrier, Ponce y Domingo Campos fueron los aprehensores. El cuerpo de su esposo le fue entregado, sin embargo no recuerda el año. Lo sepultaron en el cementerio Manuel Levinao de la comuna de Lautaro, lugar al cual se dirige continuamente. Agrega que, conoce perfectamente la ubicación de su sepultura, por lo cual no tiene problema en concurrir a una posible diligencia de exhumación, respecto de lo que por este acto se le informa.

A.2. MARCIAL EDMUNDO VERA RÍOS (38 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 136 a fs. 138 (Tomo I); de fs. 292 (Tomo I); de fs. 351 (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 24 de julio de 2014, rolante a **fs. 136 a fs. 138 (Tomo I)**, soslaya que, para septiembre de 1973 se desempeñaba como capitán de Carabineros en la Comisaría de Lautaro. Refiere que el comisario de Lautaro en 1973, era el mayor Jorge Schweizer Gómez, quien fue reemplazado durante el primer trimestre de 1974 por el mayor Quezada Lafourcade. También estaban, el subteniente de órdenes, José Huerta Ávila, y el teniente Ramón Tomacevic Cañas. En lo atinente, dice no recordar

al resto de los integrantes, que hubo detenidos políticos en Lautaro y recuerda a dos curas; uno de ellos de apellido Alarcón y al director del Liceo, cuyo nombre no recuerda. Que los detenidos estaban supeditados a las órdenes emanadas desde el regimiento La Concepción. Comenta que, le parece que había un coronel de apellido Ramírez Ramírez que daba órdenes en su lugar y que además cumplía funciones de juez militar en Lautaro. Recuerda al capitán de ejército, Jorge Del Río, quien constantemente acudía a la comisaría de Lautaro a buscar y a dejar detenidos, de todo lo cual quedaba constancia en los libros. Que este oficial siempre se hacía acompañar de sargentos y cabos militares. Precisa, que generalmente las entregas y retiros de detenidos se hacían de día en horarios de funcionamiento del Tribunal Militar. Que el Capitán Del Río siempre iba a buscar detenidos por orden del Juez Militar. Que los consejos de Guerra los integraba el comisario de carabineros, mayor Schweizer. No tuvo conocimiento de que los detenidos fueran víctimas de apremios ilegítimos. Que dichas personas solo permanecían en los calabozos de la unidad. Aludiendo a sus funciones y que vivía junto a su familia en dependencias del cuartel policial, en dos habitaciones ubicadas en el segundo piso de la unidad. Señala que no hubo detenidos en el segundo piso de la unidad, ni en las caballerizas. Tampoco se apremió físicamente a los detenidos en la comisaría, que no fue testigo de ese hecho ni se enteró de aquello. Expone que en su calidad de subcomisario, era jefe de los servicios. Asegurando que no hubo patrullajes conjuntos entre carabineros y militares en Lautaro o que, a lo menos, él no autorizó, puesto que carabineros siguió con su rutina normal. Indica que no hubo carabineros especialmente designados para tratar los temas de detenidos. La comisión civil la designaba él y dependía de un teniente el que tenía a tres carabineros bajo su mando. La comisión de abigeato también era designada por él, y estaba a cargo de algún suboficial o sargento. Agrega, que por lo general estos salían a caballo o en un jeep. En cuanto a los hechos materia de investigación, manifiesta que puede indicar que desconoce todo tipo de antecedentes. Asevera que el nombre de José Ignacio Beltrán Meliqueo le es totalmente desconocido, y afirma no recordar que haya estado detenido en la comisaría de Lautaro. Explica que, en todo caso los detenidos no podían permanecer en la unidad por más de 24 horas, siendo derivados al Tribunal que los requería, ya sea el militar o el de letras. De los nombres que se le dan a conocer como Carabineros de Lautaro, solo recuerda al sargento Ferrier, que era el chofer del comisario, y al carabinero Ponce. Añade que a Domingo Campos no lo recuerda.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de enero de 1996, rolante a **fs. 292 (Tomo I)**, interrogada por el delito de inhumaciones ilegales, señala que fue trasladado de la ciudad de Victoria a Lautaro, aproximadamente entre los meses de mayo a junio de 1972, correspondiéndole asumir el cargo de subcomisario de la primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, en calidad de segundo jefe, por cuanto el jefe de la unidad era un mayor de carabineros de apellido Schweizer. Comenta que, respecto de los nombres

de las personas que le son mencionadas, los cuales al parecer fueron detenidos por personal de carabineros de Lautaro en diferentes circunstancias; debe decir que en esos años la cantidad de detenidos que llegaba a la unidad, en virtud de diferentes órdenes, tanto de los tribunales ordinarios como militares, eran muchas, razón por la cual le es muy difícil, luego de 23 años, poder recordar nombres y apellidos de los innumerables detenidos que pasaron por la comisaría mientras prestó servicio en dicha unidad, más aún, tratándose de nombres y apellidos indígenas, los que en dicha ciudad son frecuentes. Aludiendo que su labor como segundo jefe fue la de carácter administrativo, no correspondiéndole la labor operativa, puesto que dicha comisaría contaba en esos años con una dotación aproximada de 70 efectivos, lo cual significaba que debía mantenerse constantemente con un cúmulo de trabajo administrativo. Agrega que, jamás en la comisaría murió un detenido, ni tampoco hubo algún funcionario que haya participado de algún enfrentamiento que arrojara muertos de la misma manera. Aduce que ningún funcionario del que haya tenido conocimiento, participó en alguna sepultación de personas en forma ilegal, circunstancias todas, de las cuales manifiesta dar fe de que no se efectuaron mientras fue segundo jefe de dicha comisaría.

En declaración judicial de fecha 06 de septiembre de 1996, rolante a **fs. 351 (Tomo I)**, expresa que ratifica íntegramente su declaración prestada en la Policía de Investigaciones (consta en estos autos a fs. 292 Tomo II). Señala que se desempeñaba en el cargo de capitán subcomisario en los roles administrativos y policial y dando el tiempo transcurrido, no recuerda ninguno de los nombres de las personas que se mencionan en el exhorto. Hace presente que no tan solo carabineros detenía a personas por órdenes de los Tribunales de Justicia, sino que también de los Tribunales Militares, ya que en esa época, 1973, realizaban detenciones, investigaciones y militares, dadas las condiciones que el país vivía en esa época.

A.3. VICTOR MATUS VÁSQUEZ (38 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 166 a fs. 167 (Tomo I); de fs. 298 (Tomo I); de fs. 327 a fs. 328 (Tomo I); de fs. 676 (Tomo II); y de fs. 1188 a f. 1189 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 07 de noviembre de 2014, rolante a **fs. 166 a fs. 167 (Tomo I)**, esgrime que, para septiembre de 1973 se desempeñaba como cabo primero de carabineros de la Primera Comisaría de Lautaro. Indica que el comisario de Lautaro en 1973 era el mayor Jorge Schweizer Gómez. También estaban, el capitán Marcial Vera Ríos, subteniente de órdenes José Huerta Ávila, y el teniente Ramón Tomacevic Cañas, aunque al parecer él fue trasladado antes de 1973. Asegura que hubo detenidos por motivos políticos en Lautaro. Recordando a un profesor de apellido Gatica y a otro que le decían “Pichicho” Venegas. Los detenidos eran ingresados por personal militar de Regimiento La Concepción de Lautaro y dejados en los calabozos de la unidad. Añade que al día siguiente eran venidos a buscar por los propios militares y llevados al

regimiento. Agrega que desconoce lo que hacían ellos. Recuerda a los capitanes del ejército Jorge Del Río y García quienes constantemente acudían a la comisaría de Lautaro a buscar y a dejar detenidos, de todo lo cual quedaba constancia en los libros. Que estos oficiales siempre se hacían acompañar de sargentos y cabos militares. El primero de los oficiales mencionados era alto y el segundo, como de su estatura y de complexión gruesa. Acota que ellos se entendían con el teniente Huerta. Expone que el teniente Huerta estaba a cargo de un grupo de carabineros especialmente formado para tratar los temas de detenidos políticos. Entre los carabineros de este grupo, se encontraba el sargento Ferrier, los cabos Domingo Campos Collao, Mario Ponce Orellana, Egidio Sandoval Umaña, Saturnino San Martín Bustos, y el suboficial Sanhueza. Afirma que el grupo señalado tenía una oficina dentro de la unidad donde supuestamente interrogaban a los detenidos. Que el ingreso les estaba prohibido a los demás carabineros. No tuvo conocimiento de que los detenidos fueran víctimas de apremios ilegítimos. Agrega que dichas personas solo permanecieron en los calabozos de la unidad. No hubo detenidos en el segundo piso de la unidad, ni en las caballerizas. Tampoco se apremió físicamente a los detenidos de la comisaría o a lo menos, no fue testigo de este hecho, ni se enteró de aquello. Manifiesta que, respecto de los hechos materia de investigación, desconoce todo tipo de antecedentes. El nombre de José Ignacio Beltrán Meliqueo le es conocido, debido a que hubo muchas órdenes judiciales por abigeato que lo tenían a él en calidad de denunciado. Sin embargo, nunca le correspondió investigar algunos de esos ilícitos ni acudió a su domicilio por alguna gestión policial. Finaliza señalando que no recuerda que haya estado detenido en la comisaría de Lautaro.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 298 (Tomo I)**, relata en lo pertinente que en relación con la inhumación ilegal de 11 personas, hecho denunciado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuya nómina se le da a conocer. Refiere que a las personas allí señaladas no las conoció. Hace presente que para el 11 de septiembre de 1973, cumplía servicios en la Primera Comisaría de Lautaro. Expone que no tuvo participación en la detención de personas, y menos de las que se encuentran desaparecidas, todas residentes en la localidad. Hace presente que no tiene conocimiento de que alguno de sus camaradas, de la Primera Comisaría de Carabineros en ese entonces, haya participado en la detención de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos. Que no tiene ninguna participación en la detención de los detenidos desaparecidos denunciados por la Comisión.

En declaración judicial de fecha 22 de abril de 1996, rolante a **fs. 327 a fs. 328 (Tomo I)**, ratifica sus declaraciones extrajudiciales que rolan de fs. 69 y de fs. 107 (que consta a fs. 298 de este proceso). Puntualiza en lo pertinente, que para el pronunciamiento militar, se encontraba cumpliendo servicios en la comisaría de esta

ciudad y le correspondía sólo hacer servicios urbanos, en administración y en guardias, y cumplía asimismo órdenes judiciales. Relata que, en cuanto a las personas que se nombran en este acto como desaparecidos. Samuel Huichallan Llanquiles o Samuel Huichallan Levian, José Domingo Llabulen Pilquinao, Ceferino, Miguel Eduino, y Oscar Rumualdo Yafulen Mañil, José Bernardino Cuevas Cifuentes, Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, Juan Milla Montuy, Julio Manuel Paine Lipin, José Andrés Meliquen Aguilera y Domingo Nuenul Huaiquil, señala no conocerlos, debido a que vivían en sectores rurales, y declara no tener participación en las detenciones de estas personas. Explica, que no tuvo ni ha tenido conocimiento del hecho de que algunos de sus colegas de trabajo en esos años, hayan tenido participación en la detención de las personas desaparecidas. Insiste, señalando que nada sabe acerca del desaparecimiento de estas personas, y no ha tenido participación alguna en sus detenciones.

En declaración judicial de fecha 21 de enero de 1993, rolante a **fs. 676 (Tomo II)**, testifica que estuvo prestando sus servicios en la comisaría de Lautaro desde el año 1961. Que estuvo tanto en Lautaro como en Dollinco. En el año 1973 se encontraba en Lautaro. Se le pregunta por otro hecho. Que su labor consistía en salir de servicio a la calle, además de hacer turnos a la calle. Afirma que en ese tiempo había detenidos por hurto, robos, ebriedad, y otros delitos que no sabría precisar.

En declaración extrajudicial de fecha 23 de enero de 2019, rolante a **fs. 1.188 a fs. 1.189 (Tomo IV)**, esgrime que en el año 1973 ostentaba el grado de cabo, siendo su labor principal el servicio de guardia y servicio a la población, en la Primera Comisaría de Lautaro, la cual se encontraba a cargo de un mayor. Detalla la dotación del personal eran 40 funcionarios, recordando Marcelino Arriagada, Exequiel Barrera, Isidoro Burgos, Luis Muñoz Cid, Víctor Manuel Mella Vega y otros que no recuerda. Explica que, luego del 11 de septiembre de 1973, les correspondió vigilancia de toque de queda junto a los militares, revisando ellos la población y los militares los patrullajes que realizaban eran de manera autónoma. Debido a esto ingresaron a la unidad una cantidad indeterminada de detenidos políticos y por toque de queda, los cuales permanecían un día, y si es que eran solicitados por los militares, se les entregaban y los regresaban en horas de la noche. Narra que, sobre la detención de José Ignacio Beltrán Meliqueo; quien fuese detenido por personal de carabineros Lautaro en octubre de 1973, desconoce antecedentes. Que sólo le suena el apodo de "repollo", pero no lo vio en la unidad de Lautaro en la fecha que se indica, ni en forma posterior. En la unidad existía un grupo del cual puede decir que no era directamente el que veía casos políticos, pero sí estaba el grupo especial, el cual traía estos detenidos. Puntualiza, entre ellos estaba Ferrier, Ponce, Sandoval Umaña y el teniente Huerta, además en ocasiones Campos. Menciona que, respecto a su permanencia en Dollinco, estuvo desde el año 1963 al 1965., unidad en la cual como carabinero permanente se encontraba José Manuel Beni Uribe, fallecido.

A.4. ROBINSON FERNANDO CASTILLO ORELLANA (23 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 177 a fs. 178 (Tomo I); de fs. 186 a fs. 187 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 20 de octubre de 2014, rolante a **fs. 177 a fs. 178 (Tomo I)**, aduce que, para el año 1973, no recuerda fecha exacta, prestó servicios en la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, recordando que al mando de la unidad se encontraba el mayor Sergio Quezada Lafourcade y el capitán Vera. Sobre sus compañeros de unidad, recuerda a Matus, Bascur y Jara. Con relación a personas detenidas por temas políticos, refiere que probablemente los hubo, pero nunca tuvo relación con ellos, también ignora las identidades de los funcionarios que se encargaban de las labores de inteligencia en la unidad policial. Sobre los funcionarios Ferrier y Campos, los conoció e indica que seguramente pertenecieron al servicio de inteligencia de la comisaría, ya que siempre vestían de civil. Explicita que Ferrier, también se desempeñaba como chofer del comisario jefe de unidad. También, vestía de civil, el funcionario Sandoval Umaña, quien pudo haber sido parte de la sección mencionada. Con relación a los hechos que se investigan y que guardan relación con la detención y posterior desaparición de José Ignacio Beltrán Meliqueo, no lo conoce, y con respecto a su detención y posterior desaparición, ignora completamente lo sucedido con esta persona.

En declaración judicial de fecha 20 de octubre de 2014, rolante a **fs. 186 a fs. 187 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 177 a fs. 178. Aclarar que el comisario de Lautaro, en 1973 era el mayor Jorge Schweizer Gómez y no el señor Quezada Lafourcade, como lo señaló anteriormente. Expone que nunca vio detenidos por motivos políticos. No supo que los hubiera en comisaría. Recuerda que llegaban militares a la unidad a conversar con el teniente Huerta. Siempre andaban tres militares, entre los que recuerda al capitán García, capitán Del Río, y otro, cuyo nombre no recuerda. Que ellos se reunían en la oficina del teniente y posteriormente salían. Desconoce qué temas trataban. Que también llegaba a la comisaría un oficial de resera de la FACH que trabajaba en el banco Osorno, de apellido Ramírez. Explicita que había tres carabineros que trabajaban en el servicio de inteligencia Sandoval Umaña, Juvenal Sanhueza y otro más, cuyo nombre no recuerda. Estos se entendían con el teniente Huerta. Que, apenas llegó a Lautaro el capitán Vera le ordenó que se hiciera cargo de la carnicería de la comisaría, por lo que no hizo servicios a la población ni salió en patrullajes. Respecto de los hechos materia de esta investigación, desconoce todo tipo de antecedentes. Comunica que el nombre de José Ignacio Beltrán Meliqueo le es conocido. Indica que no recuerda que haya estado detenido en la comisaría de Lautaro.

A.5. CARLOS MARIANO BELTRÁN MELIHUÉN (23 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 181 a fs. 182 (Tomo I); de fs. 185 (Tomo I); a fs. 744 (Tomo II); de fs. 1.032 a fs. 1.033 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 14 de octubre de 2014, rolante a **fs. 181 a fs. 182 (Tomo I)**, relata que es hijo de la víctima de los hechos investigados, quien fuera detenido el día 15 de octubre de 1973, en la ciudad de Lautaro, a manos de personal de carabineros de la misma ciudad. Respecto de su padre, este no tenía militancia política alguna, ni tampoco era partícipe en las tomas de terrenos de este sector, solo se dedicaba a la agricultura en los terrenos de su propiedad. En cuanto a la detención de su padre, no fue testigo de esta, ya que dicha situación sucedió el día 15 de octubre de 1973 en circunstancias que concurrió a la ciudad de Lautaro a retirar unas semillas de INDAP. Según un primo de su padre que actualmente está fallecido y cuyo nombre corresponde a José Rafael Meliqueo Ancatén. La detención de su padre fue en la plaza de Lautaro, a manos de los funcionarios de carabineros de Domingo Campos, Enrique Ferrier y Mario Ponce, quienes presuntamente se los llevaron a la comisaría de esa ciudad. Expone que él, junto a otras personas se enteraron de dicha situación por boca del primo de su padre, mencionado anteriormente, a eso de las 18:00 horas del mismo día. Por esa razón, al día siguiente su madre concurrió a Lautaro a consultar por su padre, a la comisaría, pero no la atendieron, ya que la echaron del lugar al efectuar la consulta. Debido a lo anterior, su madre hizo consultas en Temuco, pero también le fue mal, él, por su parte, también efectuó consultas pero no tuvo resultados positivos. Agrega que, con el paso del tiempo, su madre, en una conversación sostenida con don Manuel Bene, quien era carabinero del retén Dollinco y quien conocían porque vivía en ese mismo destacamento, le comentó a su madre que no buscara más a su padre, ya que él sabía que estaba muerto, dándole a conocer que había estado seis días detenido en Lautaro, desde donde lo habían sacado del cuartel, llevándoselo, con rumbo desconocido, no enterándose en detalle qué fue lo que sucedió, pero presumió que le habían dado muerte. Que lo anterior fue lo último que supieron, decidiendo su madre, terminar la búsqueda. Acota que, lamentablemente Bene en la actualidad está fallecido. Hace presente que, 20 años después del golpe de Estado, fue a su domicilio un carabinero de nombre Carlos Parra a informarles que habían encontrado restos óseos y vestimentas de dos personas en las afueras del cementerio Municipal de Lautaro y que probablemente se podría tratar de víctimas de la zona. Detalla que, por lo anterior, al día siguiente fueron a Lautaro, específicamente al Juzgado de dicha ciudad, donde reconocieron que las vestimentas eran de su padre, por lo cual les entregaron sus restos y posteriormente los sepultaron en el cementerio Manuel Levinao de esta comunidad. Manifiesta que, Domingo Campos conocía a su padre, ya que este carabinero tenía terrenos en las cercanías de este domicilio, pero no recuerda que haya tenido problemas con él. Añade que los restos

óseos de la otra persona que encontraron, eran de un señor de apellido Lizama, quien residía en calle Del Medio.

En declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2014, rolante a **fs. 185 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial de fs. 181 a fs. 182. Afirma que los restos óseos de su padre fueron periciados por el Servicio Médico Legal de Santiago. Agrega que, cuando fueron al Juzgado a retirar el cuerpo de su padre, el carabinero Campos estaba presente. Cuando salieron del Tribunal con su madre y su hermano Luis Nicolás Beltrán Melihuén, encararon a Campos, quien se burló de ellos y le aseguró que él había matado a su padre.

En declaración judicial de fecha 29 de octubre de 1993, rolante a **fs. 744 (Tomo II)**, relata que reconoce los restos que quedan de su padre fallecido, José Ignacio Beltrán Meliqueo, ya que los zapatos, calcetines, y otros pequeños trozos corresponden a la ropa que éste llevaba el día que salió de la casa. Agrega que lo recuerda muy bien, ya que a esa fecha aún tenía 19 años, por lo cual, solicita se le haga entrega de sus restos para proceder a su sepultura, ya que en todo este tiempo su padre aparece como desaparecido.

En diligencia de careo entre Carlos Mariano Beltrán Melihuén, Luis Nicolás Beltrán Melihuén y Domingo Antonio Campos Collao, de fecha 29 de marzo de 2017, rolante a **fs. 1.032 a fs. 1033 (Tomo III)**, relata que reconoce que la persona que está sentada a su lado es Domingo Campos Collao, carabinero de Lautaro. Añade que ratifica su declaración de fs. 185, que por este acto le ha sido leída. Señala que un testigo, primo de su padre, vio cuando el señor de apellido Campos fue a detener a su padre. Cuenta que él andaba junto a los carabineros Ponce y Ferrier.

A.6. JOSÉ DOMINGO SEGUNDO LLABULEN LLAULEN (17 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 275 (Tomo I); de fs. 313 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante a **fs. 275 (Tomo I)**, manifiesta es hijo de José Domingo Llabulen Pilquinao, quien se encuentra desaparecido desde el día 11 de octubre de 1973. Cuenta que el día antes señalado, en circunstancias que se dirigía junto a su padre hacia el domicilio de ambos en Lautaro. En la micro de recorrido habitual, alrededor de las 19:00 horas, el microbús fue interceptado por un grupo aproximado de 20 carabineros en el sector del puente Cautín. Que bajaron a todos los pasajeros y procedieron a detener solamente a su padre. Lo trasladaron hasta la comisaría de Lautaro, lugar al que el deponente concurrió. Después de aproximadamente media hora, llegó un camión con militares, los cuales procedieron a llevarse a su padre con destino desconocido, tomando calle Rodríguez hacia el sur. Desde esa fecha nunca más ha vuelto a ver a su padre. Aduce que al día siguiente, su madre, Francisca Llaulen

Antinao, concurrió hasta carabineros de Lautaro a recabar alguna información sobre su padre, lugar donde le manifestaron que luego regresarían. Añade que, según tiene conocimiento, su padre pertenecía al Partido Comunista y era buscado desde el 11 de septiembre de ese año. Aparte de su filiación, ignora los motivos de su detención.

En declaración judicial de fecha 15 de abril de 1996, rolante a **fs. 313 (Tomo I)**, expone que ratifica en todas sus partes su declaración, formulada a Investigaciones, y es la misma que se le lee en este momento y que rola a fs.81 (constan a fs. 275 de este proceso).

A.7. FRANCISCA LLAULEN ANTINAO (47 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 276 (Tomo I); de fs. 310 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1995, rolante a **fs. 276 (Tomo I)**, expresa que convivió con José Domingo Llabulen Pilquinao por 17 años. Señala que su conviviente era agricultor. El día 11 de octubre de 1973 en horas de la mañana, José Domingo salió de la casa con destino a Lautaro, con el propósito de hacer algunas compras. Que ese mismo día, en horas de la tarde, llegó su hijo, José Domingo Llabulen Llaulen, quien le informó que momentos antes, cuando ambos se dirigían a la casa, carabineros de Lautaro procedió a bajarlo de la micro en la cual se movilizaban llevándoselo detenido. También le informó su hijo, que momentos después de estar en la comisaría fue retenido por una patrulla militar y se lo llevaron con destino desconocido. Relata que al día siguiente, personalmente concurrió a la comisaría y al regimiento de Lautaro, donde fue informada que no había llegado hasta esos recintos. Agrega, que también hizo averiguaciones en la cárcel, pero tampoco obtuvo noticias de él. En una oportunidad le informaron en carabineros, que efectivamente había estado detenido, pero que lo habían soltado. Esgrime que ignora los motivos por los cuales detuvieron a su conviviente, ya que se trataba de una persona muy tranquila, ni siquiera pertenecía a algún partido político. Desde el día que salió de la casa, nunca más lo ha vuelto a ver y tampoco ha tenido noticia sobre la suerte que corrió y su actual destino.

En declaración judicial de fecha 15 de abril de 1996, rolante a **fs. 310 (Tomo I)**, manifiesta que ratifica en todas sus partes su declaración extrajudicial que rola a fs. 82 (que consta a fs. 276 de este proceso).

A.8. MARGARITA DEL CARMEN CUEVAS NAVARRETE (15 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 277 (Tomo I); de fs. 316 a fs. 317 (Tomo I)

En declaración extrajudicial de fecha 08 de enero de 1996, rolante a **fs. 277 (Tomo I)**, expone que es hija de José Bernardino Cuevas Cifuentes y Clementina del Carmen Navarrete Ulloa. Señala que su padre, José Bernardino Cuevas Cifuentes, fue

detenido por carabineros de Lautaro entre los días 09 y 11 de octubre de 1973, en momentos que se encontraba en la feria ganadera. Recuerda que en esa oportunidad su padre andaba acompañado de un compadre de nombre José Linco, quien fue la persona que concurrió a avisarles a su domicilio, el mismo día, alrededor de las 21:00 horas. Como en ese entonces había toque de queda, concurrieron al día siguiente a consultar por él en la comisaría de carabineros, y específicamente, su hermana Raquel Cuevas, le manifestaron que su padre se encontraba allí detenido y que le llevaran una manta y comida. Añade que su hermana, en aquella época concurrió al parecer, donde la señora Hilda de Garrido o Rigoberto Vejar, a buscar algo de comer para su padre, y, al volver al cuartel de carabineros, le informaron que su padre había sido dejado en libertad el día anterior en horas de la noche, al hacerle presente la primera versión, estos negaron terminalmente haber manifestado que se encontraba allí detenido y amenazaron con pegarle a su hermana si seguía preguntando por su padre. Hace presente, que por versión del compadre de su padre, José Linco, les manifestó que los carabineros que detuvieron a su padre y a él, fueron Mario Ponce y otro de apellido Campos, que eran de dotación de la Comisaría de Carabineros de Lautaro. Aduce otros hechos.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 1996, rolante a **fs. 316 a fs. 317 (Tomo I)**, relata que es hija legítima de José Bernardino Cuevas Cifuentes y Clementina del Carmen Navarrete Ulloa. Indica que, cuando detuvieron a su padre ella tenía 15 años de edad. Recuerda que entre los días 9 y 11 de octubre de 1973, su padre vino a la feria ganadera de Lautaro en compañía de un compadre de nombre José Linco, quien fue la persona que concurrió a avisarles a su domicilio, que en ese entonces era el fundo Mirador, ubicado como a 3 km de Lautaro, el mismo día, alrededor de las 21:00 horas. Añade que al día siguiente concurrieron sus hermanas a consultar por su padre a la comisaría de esta ciudad, donde les manifestaron que su padre se encontraba allí detenido y que le llevaran una manta y comida. Recuerda además que sus hermanas, en aquella época concurrieron, al parecer, donde la señora Hilda de Garrido o Rigoberto Vejar a buscar algo de comer para su padre, y al volver al cuartel de carabineros, le informaron que su padre había sido dejado en libertad el día anterior, en horas de la noche; y, al hacerle presente la primera versión, estos negaron determinadamente haber manifestado que se encontraba allí detenido y amenazaron con pegarles a sus hermanas si seguían preguntando por su padre. Que, por versión de José Linco, les manifestó que los carabineros que detuvieron a su padre fueron Mario Ponce y otro de apellido Campos, y por otra persona, supo que el carabinero Ferrier también había participado. Comenta otros hechos. Ratifica su declaración de fs. 86 (que consta a fs. 277 de este proceso).

A.9. RAQUEL CUEVAS NAVARRETE (25 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 278 (Tomo I); de fs. 347 a fs. 348 (Tomo I)

En declaración extrajudicial de fecha 11 de enero de 1996, rolante a **fs. 278 (Tomo I)**, manifiesta que es hija de José Bernardino Cuevas Cifuentes y Clementina Navarrete Ulloa. Con respecto a lo acontecido con su padre, recuerda que su padre salió un día miércoles del mes de octubre del año 1973 a comprar a la feria de Lautaro, alrededor de las 08:00 horas, no recordando el día exacto, y sin que hasta la fecha lo haya vuelto a ver. Que, con posterioridad se enteró por medio del presidente del Asentamiento "Guacolda", cuyo nombre no recuerda, y del tesorero Juan Marín, del mismo asentamiento que su padre, que fue detenido por carabineros de la tenencia de Lautaro, en las inmediaciones de la plaza, sin darles mayores antecedentes. Agrega, que el mismo día de la detención, un hermano, Fernando Cuevas, concurrió a la comisaría de Carabineros a fin de dejarle una frazada, la cual no fue recibida, debido a que no era necesario, porque ese día él portaba dos mantas. Al día siguiente, junto a su hermana Delia Cuevas, concurrieron a la precitada comisaría, donde, en un principio se les dijo que le llevaran comida caliente y por vivir lejos de Lautaro, consiguieron con una señora amiga, Hilda de Garrido, que prepara algo de comer y cuando volvieron a dejársela a la comisaría, se les informó que su padre había sido dejado en libertad el día anterior y que era posible que hubiese sido detenido por los militares. Es así que concurrieron al regimiento de Lautaro, donde consultaron por su padre, recibiendo como respuesta que este no se encontraba allí debido a que todos los detenidos por toque de queda quedaban al día siguiente en libertad. Precisa que hicieron diversas averiguaciones sobre el paradero de su padre, llegando incluso hasta la gobernación de Lautaro, donde no se les dio respuesta. Desde esa fecha que no han vuelto a saber de su padre.

En declaración judicial de fecha 23 de agosto de 1996, rolante a **fs. 347 a fs. 348 (Tomo I)**, ratifica sus declaraciones que rolan a fs. 24 y 87 (las que constan fs. 278 Tomo I), asevera que en octubre de 1973, su padre vino a la feria de Lautaro, no regresando a casa, por lo cual hicieron las averiguaciones y un vecino, Juan Marín, les dijo que había sido detenido por carabineros de la comisaría de Lautaro en los alrededores de la plaza de esta ciudad. Señala que el mismo día concurrió su hermano Fernando Cuevas, dejándole unas frazadas, pero no fue necesario porque andaba con dos mantas. Al día siguiente, con su hermana Delia Cuevas, se dirigieron a la comisaría de carabineros a preguntar por su padre y se les informó que debían llevarle comida caliente. Al regresar a la comisaría se les dijo que no estaba su padre, que había sido dejado en libertad el día antes y que era posible que lo hubieran detenido los militares. Concurrieron al regimiento de Lautaro, consultando por su padre, se les dijo que a los que se tomaban detenidos por el toque de queda, al otro día obtenían su libertad. Hicieron muchas averiguaciones pero fue inútil encontrar el paradero de su padre José Bernardino Cueva Cifuentes.

A.10. MERCEDES HUAQUILAO ANCATEN (30 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 279 (Tomo I); de fs. 315 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante a **fs. 279 (Tomo I)**, explicita que es la esposa de Gervasio Héctor Hualqui Calviqueo, quien se encuentra desaparecido desde el día 26 de octubre de 1975. Respecto de los hechos que rodearon la desaparición de su esposo, el día antes señalado, alrededor de las 07:00 horas, llegó hasta su casa, una patrulla de carabineros compuesta por 6 u 8 funcionarios, pero ella solamente recuerda a los carabineros Campos y Sanhueza. Exterioriza que golpearon la puerta, al abrir, estos preguntaron por su esposo, al que en un principio negó, pero después les dijo que estaba, ya que Campos la estaba golpeando. Indica que de inmediato sacaron a su esposo, tal como estaba durmiendo, es decir, no lo dejaron vestirse. Al preguntar las razones de la detención, le dijeron que no se metiera y que se fuera a acostar. Al retirarse los carabineros, la dejaron encerrada en su casa y le prendieron fuego, sin que se percatara quien lo hizo. Agrega, que al darse cuenta que la casa se estaba incendiando, procedió a romper un muro de madera con totora, por el cual logró salir con sus hijos. Apunta a que de esta situación se percató don Martín Colicheo Melihuel, el cual estaba trabajando en un predio vecino al de ella, además, ayudó a sofocar el fuego. Días después de este hecho, concurrió a la comisaría de carabineros de Lautaro, a fin de solicitar antecedentes sobre su esposo, lo cual le fue negado, manifestándosele que no había llegado detenido a ese cuartel. Ante esto fue a denunciar estos hechos a la Intendencia de Temuco, pero no tuvo ningún resultado positivo sobre el paradero de Gervasio. Hace presente que en el mes de septiembre de ese mismo año, su esposo fue detenido por el sargento Sanhueza en la misma casa, pero, en esa oportunidad salió en libertad a los dos días después.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 1996, rolante a **fs. 315 (Tomo I)**, ratifica en todas sus partes su declaración formulada a fs. 88 (que consta a fs. 279).

A.11. MARTIN COLICHEO MELIHUÉN (42 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 280 (Tomo I); de fs. 318 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 280 (Tomo I)**, expone que en el mes de octubre de 1974 o 1975, no recuerda con claridad, debido al tiempo transcurrido, en circunstancias que se encontraba trabajando con su hermano Antonio, en la comunidad José Huaiquil, lugar Montaña Recortada, por calle Quinchol, alrededor de las 10: 30 horas, llegaron hasta el lugar donde estaban trabajando, un grupo de carabineros, entre los cuales se encontraba el sargento Domingo Antonio Campos y Mario Ponce Orellana. Se le acercó el sargento Campos, y le dijo que lo iba a llevar detenido, a lo que respondió que no estaba haciendo nada malo y estaba dedicado a su trabajo. Luego de esto se fue con los otros carabineros hasta la casa de Gervasio

Héctor Huaiquil Calviqueo, distante a unos 50 metros desde donde estaban ellos. Allí sacaron amarrado a Gervasio Huaiquil Calviqueo y lo tiraron a la parte posterior del furgón de los carabineros. Añade que, antes de retirarse los policías le prendieron fuego a la casa de Huaiquil, donde en su interior estaba su esposa, Mercedes Huaiquilao Ancaten, con sus cinco hijos pequeños. Al ver el fuego, con su hermano no se atrevieron a acercarse a la casa, ya que pensaron que podía haber quedado un carabinero en el lugar. Que doña Mercedes, como pudo rompió una muralla de tablas y logró salir desde el interior de la casa con sus hijos. Desde esa vez nunca más ha vuelto a ver a Gervasio Huaiquil e ignora los motivos por los cuales fue detenido.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 1996, rolante a **fs. 318 (Tomo I)**, ratifica en todas sus partes la declaración extrajudicial que rola fs. 28 (que consta a fs. 280 Tomo I), señala que efectivamente, el día 26 de octubre de 1974 o 1975, no recuerda bien el año, en circunstancias que se encontraba en el predio de Héctor Huaiquil Calviqueo, junto a su hermano Antonio Colicheo Melihuén, cortando leña, llegó a las diez horas de la mañana un grupo de carabineros, entre los que reconoció a Antonio Campos, solamente, a los otros, por el tiempo transcurrido no recuerda sus nombres. Agrega que ahí se les acercaron, y quisieron detenerlos, pero él le dijo que no estaban haciendo nada malo, por lo cual no podían hacerlo. No les dijeron nada y se dirigieron a la casa de Héctor Huaiquil Calviqueo, que quedaba más o menos a 50 metros de donde estaban, y encontraron a Huaiquil cortando leña. Narra que llegaron, los tomaron, y después le prendieron fuego a su casa, donde estaba su mujer, Mercedes Huaiquil Ancaten, y sus hijos menores. Afirma que esta tuvo que romper una tabla para poder salir del interior, no resultando lesionados, ni ella ni sus hijos. Desde esa fecha no ha vuelto a ver a Héctor Huaiquil Calviqueo y que ignora lo que le pasó.

A.12. LUISA MILLA MONTUY (42 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 282 (Tomo I); de fs. 320 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante a **fs. 282 (Tomo I)**, manifiesta que es hermana de Juan Milla Montuy, quien en el año 1973 fue detenido por carabineros de la localidad de Lautaro. Señala que a principios de del mes de noviembre de 1973, al parecer el día ocho de ese mes, su hermano fue a Lautaro con la finalidad de efectuar las compras de víveres para su casa. Por versión de un vecino del sector Ramón Curaqueo, se enteraron que había sido detenido por carabineros en las inmediaciones de las calles Barros Arana con Baquedano, el sector Guacolda. Que hasta el día de hoy ignoran qué le pasó, y por temor, no concurrió a preguntar a la policía sobre su paradero.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 1996, rolante a **fs. 320 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola a fs.31. Reitera que es hermana de Juan

Milla Montuy, quien fue detenido el 08 de noviembre de 1973, en Lautaro, donde había concurrido a comprar víveres para su casa, ya que era viudo y tenía 4 hijos. Quien no regresó a casa ese día. Sobre su detención, supo por dichos de Ramón Curaqueo, domiciliado en reducción Curaqueo, lugar Central Alhueco, que su hermano había sido detenido por carabineros, sin mencionar nombre, en la población Guacolda, calle Barros Arana con Baquedano. No vino a preguntar por él en la comisaría de Lautaro por temor. Ignora lo que le pasó a su hermano Juan Milla Montuy, ya que desde esa fecha no ha vuelto a verlo.

A.13. FLOR MARÍA CANIU MILLA (23 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 283 (Tomo I); de fs. 321 a fs. 322 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante a **fs. 283 (Tomo I)**, relata que es sobrina de Juan Milla Muntuy, el cual se encuentra desaparecido desde noviembre de 1973. Agrega que su tío Juan, el día 08 de noviembre de 1973, salió de su casa, en ese tiempo ubicada en San Juan Dollinco, con dirección a Lautaro, con el propósito de hacer algunas compras, ya que él era viudo y tenía a su cargo cuatro hijos pequeños. Señala que no volvió ese día a casa. Relata que, al día siguiente, se enteraron, por intermedio de don Ramón Curaqueo, que su tío había sido detenido por carabineros de Lautaro en calle Barros Arana, sector Guacolda, en los momentos que efectuaba las compras. Les dijo que los carabineros lo habían sacado del interior del negocio y lo habían subido al furgón, ignorando los motivos de su detención. Hace presente que su tío Juan participaba en corridas de cercos en conjunto con elementos políticos. Sugiere que aquella fue la causa de su detención, ya que el dueño del fundo donde corrieron los cercos, según Cuevas Aldea, actualmente fallecido, lo tenía amenazado por este hecho. Agrega que junto a su madre, Luisa Milla Motuy, efectuaron varias averiguaciones en Lautaro donde nunca obtuvieron alguna respuesta positiva sobre él. Señala que no siguieron averiguando ya que carabineros las amenazó, indicándoles que si seguían preguntando también serían detenidas.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 1996, rolante a **fs. 321 a fs. 322 (Tomo I)**, expresa que ratifica su declaración extrajudicial que rola a fs. 31. Relata que su tío Juan Milla Montuy fue detenido en esta ciudad de Lautaro, en el mes de noviembre de 1973. No recuerda el día en la oportunidad que vino a esta ciudad a comprar víveres para su casa, ya que vivía con sus cuatro hijos menores, entre ellas María Angélica Montuy Sánchez, y no regresó ni ha regresado desde esa fecha a su domicilio, por tanto no lo han visto más. Señala que por dichos del vecino Ramón Curaqueo, supieron que éste había sido detenido en un almacén ubicado en calle Barros Arana de la población Guacolda, por carabineros de Lautaro, ignorando el motivo de su detención en esos momentos. Fueron a carabineros a fin de averiguar el nombre de los funcionarios que detuvieron a su tío, y también para saber de su paradero; allí lo negaron,

y les dijeron a ella y a su madre que no insistieran porque las iban a dejar a ellas también detenidas. Indica que no volvieron más. Después, con el tiempo, estimó que su detención se debió a que su tío anduvo en unas corridas de cerco de fundos vecinos por política. Desde esa fecha no han vuelto a saber de su tío, si es que está vivo o muerto, ya que nunca regresó a su casa.

A.14. HILDA TERESA MORALES JAQUE (45 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 286 (Tomo I); de fs. 323 a fs. 324 (Tomo I); de fs. 717 a fs. 718 (Tomo II); de fs. 722 a fs.723 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 286 (Tomo I)**, relata que es la esposa de José Andrés Meliquén Aguilera, el cual se encuentra desaparecido desde el 04 de septiembre de 1973. Explicita que, el día antes señalado, alrededor de las 07:00 horas, llegaron hasta su domicilio un grupo de carabineros encapuchados con gorros pasamontaña, los cuales preguntaron por su esposo. Cuando les dijo que encontraba tomando desayuno, le dijeron que saliera. De inmediato se lo llevaron por el potrero hacia el camino donde los esperaba una camioneta color amarillo. Se pudo percatar que eran alrededor de doce carabineros, entre los cuales se encontraban el sargento Domingo Campos Collao, y el carabinero Enrique Ferrier. Precisa que esto lo puede aseverar, debido a que la señora Elisa Schifferli los vio con el rostro descubierto, además de ser familiares. Después de esto, hizo numerosas averiguaciones en Lautaro, como en Temuco, a fin de saber antecedentes sobre su esposo, pero nunca se le dijo algo concreto sobre él. Manifiesta que el chofer de la camioneta que movilizaba a los carabineros en esa oportunidad era Elías Segundo Cuevas Aldea, actualmente fallecido. Advierte que su esposo no tenía participación en política ni era dirigente campesino, motivo por el cual ignora los motivos de su detención.

En declaración judicial de fecha 18 de abril de 1996, rolante a **fs. 323 a fs. 324 (Tomo I)**, ratifica en todas sus partes sus declaraciones de fs. 37 y 95 (que consta a fs. 286 en este proceso). Reitera que era la esposa de José Andrés Meliquén Aguilera, quien se encuentra desaparecido desde el 04 de octubre de 1993. Cuenta que el día 04 de octubre de 1973, llegaron hasta su domicilio, doce carabineros encapuchados con gorros pasamontañas, reconociendo entre ellos, a Domingo Campos y a Enrique Ferrier, a pesar de andar disfrazado, y además de que sabía que ellos los conocían desde hace tiempo. Estos preguntaron por su marido y al contestarles que estaba tomando desayuno, le dijeron que su esposo saliera al patio. Agrega que ella le avisó y el salió tranquilamente, lo tomaron y lo llevaron rodeado, con las manos en alto hacia el camino Quinchol. Su esposo no opuso resistencia. A ella le habían dicho que se quedara dentro de la casa, y no saliera al patio. Ella vio todo esto por una rendija de la casa. Puntualiza que su casa queda más o menos a trescientos metros del camino Público. Expone que dejó que los policías que llevaban a su esposo anduvieran un buen trecho, saliendo de su casa y

escondiéndose tras las estacas y árboles, pudo ver que lo subían a una camioneta amarilla en la parte de la carrocera. También pudo ver arriba a Sergio Navarro Chifferly. Señala que manejaba esta camioneta Elías Cuevas Aldea, agricultor, vecino de su predio, este último ya fallecido. Quien también vio esto fue doña Elisa Chifferly, madre de Sergio Navarro, fallecida. Posteriormente fue a Lautaro, a la comisaría sin obtener respuesta acerca del paradero de su marido. Continúa detallando sus indagaciones, evidenciando que desde esa fecha, octubre de 1973, desconoce el paradero de José Andrés Meliquen Aguilera.

En declaración extrajudicial rolante a **fs. 717 a fs. 718 (Tomo II)**, insiste que es la cónyuge de José Andrés Meliquen Aguilera. Que el día 04 de octubre de 1973, alrededor de las 07:00 horas, se encontraba con su esposo en su domicilio de la reducción Manuel Levinao, en Lautaro, cuando en forma imprevista tocaron a la puerta, y al preguntar quién era, le dijeron que era la policía y que necesitaban conversar con su esposo, ante lo cual abrió sin temor, percatándose que tras la puerta había una persona vestida con uniforme de carabinero, cubierta su cabeza y rostro, con un gorro pasamontañas, viéndole solamente los ojos, sin lograr identificarle, el que tenía en su mano una especie de carabina. Señala que ignora qué tipo de armamento, ya que no conoce de armas, el cual, una vez que su esposo salió de la casa, le obligó a que pusiera sus manos detrás de la nuca y le hizo caminar, mientras que él se quedaba atrás, apuntándole, llevándole hacia el camino. Arguye que, luego aparecieron desde los matorrales, alrededor de doce personas armadas, y también con uniforme de carabineros y encapuchados, quienes les siguieron hasta el camino, donde les espera una camioneta color amarillo; agrega que los siguió de lejos para que no la vieran, ya que le habían advertido de que si nadie oponía resistencia, existía la posibilidad de que su esposo regresara con vida. Expresa que cuando llegaron al camino, le subieron en la parte trasera de la camioneta, la que tenía un toldo amarillo, quedando al cuidado de la misma, algunos de los carabineros, mientras que los demás fueron a buscar a otra persona. Relata que al día siguiente, concurrió a la comisaría de carabineros de Lautaro a preguntar por su esposo, lugar donde le informaron que éste no había sido detenido y que no figuraba en los libros respectivos. Que días más tarde, regresó nuevamente a la comisaría y fue informada de que su esposo estuvo detenido, pero que se había ido en libertad, inclusive le mostraron un libro donde aparecía una huella de dedo, la que supuestamente era de su esposo, ya que tanto él como ella son analfabetos, constando así su libertad. Continúa detallando sus gestiones en la búsqueda de su marido. Que los carabineros de nombre Domingo Campos y Enrique Ferrier, que trabajaban en el retén de Tres Esquinas, habían participado en la detención de su esposo y posterior desaparecimiento, ya que ellos siempre que se embriagaban lo contaban como anécdota, riéndose de lo sucedido. Perpetuando su relato sobre lo acontecido.

En declaración judicial de fecha 21 de septiembre de 1990, rolante a **fs. 722 a fs. 723 (Tomo II)**, insiste en su relato en cuanto a lo sucedido con su cónyuge José Andrés Meliquén Aguilera, quien fuera detenido el 4 de octubre de 1973, por un grupo de carabineros, llevándolo a la vía pública donde esperaba una camioneta amarilla, vehículo en el cual se llevaron a su marido al retén de carabineros de Tres Esquinas, al menos eso fue lo que en dicha oportunidad pensó. Que al día siguiente se hizo presente en carabineros de Lautaro y en la guardia le manifestaron que su esposo no estaba detenido. Que volvió el 06 de octubre del año antes señalado y en la comisaría le manifestaron que estuvo detenido, pero lo habían dejado en libertad, mostrándole el libro de guardia, donde según carabineros, su marido firmó y colocó su huella. Hace suposiciones donde podría estar los restos de su marido y añade que Daniel Mora, quién trabaja en el fundo de los señores Menke, ubicado en Perquenco, le conversó que el hijo de Elías Cuevas, llamado Patricio Cuevas, habían mandado a buscar a su esposo con carabineros para eliminar a las personas que robaban animales. Que no identificó a los carabineros que detuvieron a su marido, pero el jefe del retén Tres Esquinas en esa fecha era Domingo Campos.

A.15. PEDRO HUENUEL HUAQUIL (quien declaró a fs. 287 (Tomo I); de fs. 325 a fs. 326 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 287 (Tomo I)**, relata que es hermano de Domingo Huenul Huaiquil, el cual se encuentra desaparecido desde el día 15 de junio de 1974. Que ese día su hermano fue a Lautaro a comprar alimentos, no regresando a su domicilio. Que, ante esto comenzó las averiguaciones para saber qué le había pasado. Un día se encontró con Luis Grunewaldt Millapan, quien le manifestó que a su hermano lo había detenido los carabineros Germán García Romero y Domingo Campos, entre otros, en el restaurant “El Rayo”, ubicado frente al terminal de buses de Lautaro. Relata que concurrió a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, a preguntar por su hermano, quienes negaron que hubiera sido detenido, sin dar ninguna explicación al respecto. Hace presente que nunca más supo que pasó con su hermano, ni qué hicieron con él.

En declaración judicial de fecha 18 de abril de 1996, rolante a **fs. 325 a fs. 326 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial, en lo pertinente asevera que el 15 de junio de 1973, su hermano salió de su casa en dirección a Lautaro a hacer unas compras, y no regresó a su casa, y hasta la fecha no se sabe de su paradero. Señala que, por averiguaciones posteriores, y preocupado porque su hermano Domingo Huenul Huaiquil, no regresara a su casa, un día se encontró con Luis Grunewaldt Millapán, quien le manifestó que su hermano había sido detenido en Lautaro en el restaurant “El Rayo”, ubicado frente al terminal de buses, por los carabineros Domingo Campos y Germán

Romero, que lo habían subido al furgón policial que manejaba un policía de apellido Ferrier. Agrega que fue a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, informándosele allí que su hermano no se encontraba detenido. Indica que no hizo más averiguaciones por temor.

A.16. LUIS GABRIEL GRUNEWALTD MILLAPAN (14 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 288 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 288 (Tomo I)**, explicita que conoció a Domingo Huenul Huaiquil, como una persona del sector Santos López de Perquenco. Respecto de los hechos que rodearon su desaparición, puede manifestar que en el año 1974, no recuerda fecha exacta, pero en invierno, se encontraba en el terminal de buses de Lautaro, con el propósito de tomar locomoción para regresar a su casa, cuando repentinamente llegó un furgón de carabineros del cual se bajaron seis de ellos, se dirigieron al restaurante, al parecer de nombre “El Rayo”. Después de unos minutos, la policía sacó desde su interior a varias personas en estado de ebriedad, entre las cuales iba Domingo Huenul Huaiquil, los subieron al furgón, y se los llevaron a su parecer, a la comisaría de Lautaro. Desde esa fecha, nunca más lo ha vuelto a ver. Expone que entre los carabineros que participaron en la detención, se encontraba el sargento Domingo Campos, y Germán García Romero. Acota que ignora los motivos de su detención y posterior desaparición, pero supone que debe haber sido por su participación en la toma del Fundo Collanco.

A.17. MARIO PONCE ORELLANA (años de edad a la época de los hechos investigados rut: 3.370.995-1), quien declaró a fs. 296 a fs. 297 (Tomo I); de fs. 335 a fs. 336 (Tomo I); de fs. 682 (Tomo II); de fs. 692 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 296 a fs. 297 (Tomo I)**, arguye que el 11 de septiembre de 1973, se encontraba trabajando en la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, a cargo de la oficina de empadronamiento. Que durante su tiempo en la comisaría de Lautaro, nunca le correspondió efectuar servicios ordinarios, desempeñándose siempre en una oficina, la que hizo entrega, al acogerse a retiro el día 6 de abril de 1977, al cabo primero Domingo Campos Collao. Se le consulta por otras víctimas las que indica no conocer e ignora los motivos por los cuales tanto sus familiares, como testigos manifiestan haberlo visto junto al cabo primero, Domingo Campos Collao y al civil Enrique Salazar Herrera, participar en la detención de estos. Refiere al proceso seguido por esos hechos. Que durante su presencia en la comisaría de Lautaro, nunca le correspondió trabajar en el cabo primero Domingo Campos Collao, ya que, como lo mencionó anteriormente, solo le hizo entrega a este, de la oficina de empadronamiento de la unidad, por orden del comisario. Añade que durante su desempeño en la Comisaría de Carabineros de Lautaro, no tuvo conocimiento

que algún funcionario de carabineros haya participado en la detención de personas indicadas como detenidos desaparecidos.

En declaración judicial de fecha 23 de abril de 1996, rolante a **fs. 335 a fs. 336 (Tomo I)**, interrogado por otros hechos niega conocer a las víctima e insiste que su trabajo fue de tipo administrativo en el interior de la comisaría de Lautaro. Que jamás salió al servicio en la población, ni rural tampoco. No anduvo en operativos con Domingo Campos Collao. Que mienten las personas que dicen haberlo visto deteniendo a las personas que se le han nombrado y que se encontrarían desaparecidas. Ratifica íntegramente sus declaraciones prestadas a los funcionarios de Investigaciones. Que él no participó en ninguna detención, porque se desempeñaba como funcionario administrativo en la Comisaría de Carabineros de Lautaro, antes y después del pronunciamiento Militar.

En declaración judicial de fecha 21 de enero de 1993, rolante a **fs. 682 (Tomo II)**, narra que en noviembre de 1973 se encontraba prestando servicios en la Comisaría de Lautaro, su trabajo correspondía a la oficina de empadronamiento, que servicio a la calle no le correspondió, los choferes de ese tiempo eran Enrique Ferrier, el cual era chofer personal del comisario de carabineros, en ese tiempo Jorge Schweizer Gómez. Esgrime que tampoco es posible que Ferrier hubiera hecho el procedimiento de levantamiento de los dos cadáveres NN, ya que los dos eran choferes.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de mayo de 1993, rolante a **fs. 692 (Tomo II)**, expone que conoció al funcionario Ferrier, quien se desempeñaba como chofer del comisario. Explicita que en lo relacionado con que esta persona efectuara otras labores que no fueran las ya señaladas, era posible, ya que todo dependía del jefe de unidad y en varias oportunidades, recuerda que el chofer salía con los funcionarios policiales, es decir, de orden y seguridad. Que en lo relacionado con los detenidos desaparecidos, labores propias de la parte orden y seguridad, puede indicar que ignora mayores antecedentes, ya que como señaló anteriormente, él tenía que ver solamente con la parte administrativa.

A.18. SERGIO MANUEL JARA SANDOVAL (35 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 299 (Tomo I); de fs. 331 a fs. 332 (Tomo I); de fs. 677 (Tomo II); de fs. 693 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 299 (Tomo I)**, se le consulta por otros hechos y en lo pertinente sostiene que para el pronunciamiento militar y fechas posteriores, no efectuó ninguna detención, ya que en ese tiempo se desempeñaba como suboficial de guardia y servicio a la población. Expresa que en el único procedimiento que le correspondió participar fue en la detención del gobernador de Lautaro, de apellido Teller, concurriendo al sector de Pumalal, donde no

fue habido. Destaca que la mayoría de las detenciones efectuadas por personal de la Comisaría de Carabineros de Lautaro, en ese entonces, había un grupo especial conformado por los carabineros Domingo Campos Collado, Mario Ponce Orellana y Enrique Ferrier Veleze, quienes en algunas oportunidades lo hacían en una camioneta particular color guinda seca o burdeo, de propiedad de la gobernación. Agrega que no le consta si estos ex funcionarios de carabineros hayan participado en la detención de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, motivo de la presente investigación. Reitera que nunca participó en detención de alguna persona con posterioridad al pronunciamiento militar, y menos de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos.

En declaración judicial de fecha 22 de abril de 1996, rolante a **fs. 331 a fs. 332 (Tomo I)**, ratifica sus declaraciones extrajudiciales prestadas a Policía Investigaciones y que rola a fs. 51; de fs. 69 y de fs. 108 (que consta fs. 299 en este proceso). En lo atinente señala que para el pronunciamiento militar, se encontraba prestando sus servicios en la Comisaría de Carabineros de Lautaro, como servicio en la ciudad y en la guardia. Agrega que recuerda que le correspondió detener al ex gobernador de Lautaro de apellido Tellier, que no se le encomendó ninguna otra diligencia de este tipo posteriormente. Indica que no ha participado en la detención de las personas desaparecidas las que se les nombra. Arguye no saber si otros funcionarios de estos tiempos hicieron alguna detención o detuvieron a alguna de estas personas. Expone no haber mencionado que en la comisaría de Lautaro hubiese algún grupo especial para efectuar detenciones, menos que hubiera nombrado a sus ex colegas, Domingo Campos Collao, Mario Ponce Orellana, ni a Enrique Ferrier Valeze, como que hubieran pertenecido a un grupo como este. Reitera que nunca participó en las detenciones de las personas mencionadas en la denuncia interpuesta, ni le consta que sus colegas lo hubieran hecho.

En declaración judicial de fecha 21 de enero de 1993, rolante a **fs. 677 (Tomo II)**, expone que respecto al parte que en este acto se le lee y corre a fs. 2 (que consta en estos autos a fs. 644, el que dice relación con el hallazgo de dos cadáveres). Agrega que, por el tiempo transcurrido es difícil recordar, y sin desconocer la firma ya que corresponde a la suya, no podría dar más detalles del hallazgo de los dos cadáveres. Que en ese tiempo hizo muchos partes, tanto por robo, hurto como lesiones. Se le pregunta por otra persona. Sostiene que estuvo trabajando dependiente de la base de Lautaro desde el año 1969, pero fue trasladado también a Dollinco y Perquenco. Que les es difícil dar más antecedentes respecto a lo que en éste acto se le lee y pregunta, su trabajo era solo de oficina.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de mayo de 1993, rolante a **fs. 693 (Tomo II)**, esgrime que ingresó a carabineros el uno de agosto de 1958 y en 1968 fue destinado a la comisaría de Lautaro, donde efectuó numerosas funciones y actividades.

Narra en lo pertinente que, en la unidad efectuó detenciones y las personas pasaron detenidas a los diferentes Juzgados de Lautaro y Temuco. En relación a parte N° 424 de fecha 12 de noviembre de 1973, de Carabineros de la Comisaría de Lautaro, el que se encuentra confeccionado por él y firmado por el mayor Jorge Schweizer Gómez, y que dice relación con el hallazgo de dos cadáveres N.N., puede indicar que al personal que aparece nombrado Enrique Ferrier y Mario Larrañaga, efectivamente tomó el procedimiento señalado en dicho informe, que él era en ese momento, el responsable de informar al Juzgado de lo ocurrido y la información es la correcta y no podría estar haciendo un informe falso y poniendo personal que no corresponde. Agrega que, es cierto que Ferrier, era el chofer del comisario, si se le ordenaba efectuar otra labor, tenía que efectuarla, que había poco personal. Asevera que, en relación a las detenciones de personas efectuadas después del golpe militar, señala las ordenaban los jefes, ignoraba mayores antecedentes. No recuerda haber participado en ninguna detención relacionadas con el momento que se vivía.

A.19. SANTIAGO MILLANGIR HUECHE (38 años de edad a la época de los hechos investigados), en **declaración extrajudicial** de fecha 17 de enero de 1996, rolante a **fs. 301 a fs. 302 (Tomo I)**, expone en lo atinente que en el año 1973, como es de conocimiento de todos, hubo varias personas que se detuvieron por diversas razones, las que generalmente eran trasladadas a los recintos policiales de carabineros por personal del servicio de inteligencia del ejército. Añade que, recuerda perfectamente que en varias ocasiones, en circunstancias que se encontraba de guardia en dicha Comisaría (Lautaro), recepcionó detenidos en calidad de custodia, los cuales se ingresaban en los libros de guardia y al día siguiente, eran retirados y presumiblemente trasladados a otros lugares como dijo antes, por personal de inteligencia del ejército. Agrega, que el personal de carabineros que se encontraba de guardia, se le tenía prohibido conversar con toda persona que llegaba en calidad de detenido o custodia por parte del personal de carabineros o del ejército, incluso existían vigilantes especiales de carabineros en los calabozos para evitar el contacto verbal u otra eventualidad hacia las personas detenidas. Orden que fue dada por el señor gobernador de ese entonces, de quien no recuerda su nombre. Sobre las personas que se le mencionaron, no recuerda a ninguna como detenida en el cuartel.

A. 20. ENRIQUE FERRIER VALEZE (45 años de edad a la época de los hechos investigados rut: 2.645.844-7), quien declaró a fs. 303 (Tomo I); de fs. 333 (Tomo I); de fs. 646 (Tomo II); de fs. 672 (Tomo II); de fs. 678 (Tomo II); de fs. 694 (Tomo II); de fs. 728 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 303 (Tomo I)**, expone en lo pertinente que respecto a la inhumación ilegal de once personas, manifiesta que a dichas personas no las conoció, no obstante, de ser oriundo de la zona.

Que para el pronunciamiento militar ocurrido el 11 de septiembre de 1973, efectivamente se encontraba cumpliendo servicios en la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, y se desempeñaba como conductor del comisario jefe de ese entonces mayor Jorge Enrique Schweizer Gómez, motivo por el cual no cumplía servicio a la población y mucho menos participó en detención de persona alguna, y mucho menos de las mencionadas como detenidos desaparecidos. Añade que, así mismo señala que no tiene conocimiento que, algunos de sus compañeros de trabajo haya participado en la detención de las personas denunciadas como detenidos desaparecidos. Afirma que en ese entonces había, en la unidad otro carabinero que se desempeñaba como conductor de furgón, de nombre Mario Larrañaga, no recordando su apellido materno, quien en la actualidad está fallecido, quien en algunas oportunidades condujo la camioneta de la gobernación que era facilitada para efectuar ciertos operativos.

En declaración judicial de fecha 23 de abril de 1996, rolante a **fs. 333 (Tomo I)**, señala que para el pronunciamiento militar se encontraba en Lautaro, prestando sus servicios en la Comisaría de Lautaro, como chofer; no era funcionario de orden y seguridad, solo de servicio, ya que era chofer del comisario. Por esta razón no participó en operativos, averiguaciones o citación de órdenes. Esgrime que, en cuanto a las personas que se le nombran en este acto y cuya relación aparece a fs. f. 2 vta., (en causa diversa), y que se le ha leído sus nombres, no conoció a ninguna, ni colaboró a su detención, ya que no era autorizado para ello y sus servicios eran otros. Expone que, a ningún funcionario de ese entonces vio o supo que hubiera alguna detención, menos de los que se le han nombrado, porque no los conoció y que pertenecieran a la comisaría de Lautaro. Ratifica en todas sus partes su declaración extrajudicial, prestada a los funcionarios de la Policía de Investigaciones a fs. 112 (la que consta a fs. 303 de este proceso).

En declaración judicial de fecha 13 de diciembre de 1973, rolante a **fs. 646 (Tomo II)**, expresa que ratifica el parte de carabineros de fs. 2 (que consta a fs. 642 en estos autos) y como chofer del furgón de carabineros, tuvo que manejarlo y concurrieron a la ribera del río Cautín, a la altura de la cantera, donde habían dos individuos muertos, no pudiendo percatarse de que éstos hayan sido víctimas de atentados, debido a que su cuerpos estaban totalmente descompuestos e irreconocibles. Agrega que se procedió a sacarlos del agua para llevarlos a la morgue.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de diciembre de 1992, rolante a **fs. 672 (Tomo II)**, relata que el año 1973 trabajaba como chofer del comisario mayor Sergio Quezada Lafourcade. Se le pregunta por otros hechos. Expone que no participaba de la labor policial; que nunca efectuó una detención u pasó algún parte. Que sobre detenidos por política u otras circunstancias, puede señalar que ignora todo tipo de antecedentes, ya que no le correspondía. Que la dotación de la unidad de ese momento era

aproximadamente de 40 funcionarios y la gran mayoría está fallecida y de los restantes, solamente recuerda algunos apellidos como Larrañaga, chofer; Salvador Zúñiga, jefe e almacén; Fuentes, enfermero de ganado; Emilio Ponce, de los servicios, y su hermano Mario, oficina de partes (administrativo). Puntualiza que mayores antecedentes al respecto, y referente a sus nombres completos, grados, y actuales paraderos, los ignora.

En declaración judicial de fecha 21 de enero de 1993, rolante a **fs. 678 (Tomo II)**, en lo pertinente, aduce que no recuerda haber hecho el procedimiento de hallazgo de dos N.N. Los que fueron encontrados flotando en el río a la altura del criadero de cerdos de “Ganacoop”, ya que en ese tiempo efectuó otros procedimientos similares en el cual los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Que en esa época era chofer exclusivo del comisario Jorge Schweizer Gómez, del cual ignora su domicilio, por lo que más datos al respecto no puede aportar.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de mayo de 1993, rolante a **fs. 694 (Tomo II)**, reitera sus dichos en cuanto dicen relación con el levantamiento de dos cadáveres de N.N, de igual forma se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 728 (Tomo II)**, manifiesta, que fue funcionario de carabineros. Se le pregunta por otros hechos. Refiera no haber participado en detenciones de personas. Que en el año 1973 trabajaba en la base, es decir, en la Comisaría de Lautaro, y no salía a terreno ya que, como lo ha dicho, fue chofer de los distintos comisarios que pasaron por Lautaro.

A.21. PAICAVI LEMOLEMO PAINEMAL MORALES (años de edad a la época de los hechos investigados rut: 7.248.571-8), quien declaró a fs. 574 a fs. 576 (Tomo II); de fs. 806 a fs. 807 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 05 de junio de 2015, rolante a **fs. 574 a fs. 576 (Tomo II)**, (cuya copia consta a fs. 603 a fs. 605 Tomo II), puntualiza que, ingresó a cumplir su servicio militar obligatorio el mes de abril de 1973, al Regimiento de Infantería Reforzado N°4 La Concepción de Lautaro, quedando encuadrado en la compañía de plana mayor y servicios, sección artillería. Conforme a su recuerdo, sus oficiales eran los capitanes Jaime Rowe Del Río, y Jorge Del Río Del Río, los clases sargento José Leal Placencia, quien era su instructor, también recuerda a Alejandro Muñoz Gálvez, quien también era su instructor. Mencionando a algunos de los conscriptos de su compañía. Que para el día 11 de septiembre de 1973, apenas se les informó respecto al golpe de estado, recibieron la orden de efectuar controles de carretera. Precisa que, posteriormente, en horas de la tarde, se les envió a Temuco en camiones Unimog, entre 6 o 7 vehículos, los cuales trasladaban efectivos de las compañías infantería y la suya. Arguye que al llegar a Temuco, al regimiento Tucapel específicamente, se pudo percatar que había varias personas detenidas en el patio

principal, recordando haber reconocido a un conocido cuyo nombre era Herman Carrasco. Relata el recorrido por la zona de Neltume y lo acontecido con la detención y tortura realizadas a un civil del sector y quienes iban a cargo. Recordando que patrullaron la zona comprendida entre Pucón, Villarrica e incluso Curarrehue, teniendo como base Neltume, continua relatando lo acontecido durante su recorrido. Esgrime que, respecto a la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido en la ciudad de Lautaro el día 15 de octubre de 1973, por personal de carabineros de esa ciudad, debe señalar que ignora todo antecedente relacionado con su persona. Comenta que, es efectivo que personal de carabineros de Lautaro llegaba a la unidad militar con detenidos, los cuales eran torturados al interior de esta. Sostiene, que conforme a su recuerdo, estas sesiones de torturas eran en el gimnasio, caballerizas y un sector llamado el Picadero. Destaca que, dentro de los torturadores, recuerda a los clases Salazar y Juan Escobar, quien era de Imperial, lo conocía ya que habían estudiado juntos en la enseñanza básica en Imperial. Dentro de los oficiales que participaban en las sesiones de torturas, recuerda a Mondaca, Delirio, Silva Rebeco y García, principalmente, no recordando que los demás oficiales participaran en estos actos, describiendo los apremios a que eran sometidos los detenidos. Nombrando a quienes participaban de tales hechos. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante a **fs. 806 a fs. 807 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante a fs. 603 a fs. 605. Precisa que es imposible que esté confundido en la fecha que regresaron al regimiento luego de haber ido a Neltume, y la zona cordillerana, puesto que recuerda haber estado en Galvarino, Nueva Imperial, Carahue y Puerto Saavedra, junto a toda la batería de artillería del capitán Del Río, hecho que sucedió en el mes de octubre de 1973. Refiere a los detenidos en la unidad militar y en lo contingente a estos hechos, puede indicar que desconoce absolutamente qué sucedió con la víctima de autos, que según se le da a conocer, se llamaba José Ignacio Beltrán Meliqueo y que habría sido detenido por carabineros de Lautaro. Añade, que era frecuente y común ver a carabineros llevando detenidos al regimiento, lo que eran recibidos por el personal de inteligencia y por el capitán Del Río, que era el oficial que tomaba las decisiones respecto de estas materias. Asegura que no le cabe la menor duda que, tanto el coronel Ramírez, como el teniente coronel Mardones, sabían de la existencia de detenidos en el regimiento de los que sucedía con ellos, por cuanto ellos eran los oficiales al mando de la unidad. Indica que Ramírez, a pesar de estar ejerciendo como intendente, siempre estaba en el regimiento. Expone otros hechos.

A.22. HERNÁN PATRICIO JUAN ANTONIO MARDONES DÍAZ (43 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 591 a fs. 593 (Tomo II); de fs. 611 a fs. 612 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 07 de mayo de 2015, rolante a **fs. 591 a fs. 593 (Tomo II)**, explicita en lo pertinente que, a partir del 11 de septiembre de 1973 el coronel Ramírez, por su antigüedad asumió como Intendente de la zona, recordando que diariamente viajaba a Temuco, no dejando de lado sus labores como comandante del regimiento. En relación a la permanencia de personas detenidas al interior de la unidad, debe señalar que efectivamente hubo detenidos por parte de personal militar, los cuales en una primera instancia eran llevados al regimiento, para posteriormente ser dejados en custodia del personal de la primera comisaría de carabineros. Acota, respecto a lo anterior, que hubo dos compañías del regimiento que estaban a cargo de la labor operativa, es decir, de los controles de toque de queda, patrullajes, y controles de carretera. Añade que estas correspondían a las unidades de los capitanes Del Río, quien estaba a cargo de la primera batería de artillería y García Ferlice, quien estaba a cargo de la segunda compañía de fusileros. Expone que tiene claro que los oficiales antes mencionados cumplían esas funciones y que los detenidos que traían a la unidad eran interrogados por ellos mismos antes de ser entregados a carabineros de Lautaro, no recordando en que dependencia lo hacían, ya que no había una asignada para esa labor. Puntualiza que desconoce si estos interrogatorios se efectuaban bajo la aplicación de tormentos. Explica que nunca supo de ejecuciones de detenidos a manos de personal de su unidad, solo tiene claro las ejecuciones de los señores Burgos y Haddad, investigación por la cual declaró. Asevera que, respecto al personal de inteligencia de la unidad militar, debe señalar que solo recuerda a un sargento de apellido Salazar, quien tenía esas funciones asignadas desde antes del pronunciamiento militar, ya que él contaba con los cursos correspondientes para ejecutar tales labores. Relata que, respecto de la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido en la ciudad de Lautaro el día 15 de octubre de 1973, por personal de carabineros de esa ciudad, ignora todo antecedente relacionado con su persona. Que es efectivo que personal de su unidad entregaba los detenidos a carabineros de Lautaro, ya que ese era su protocolo de actuación, pero desconoce si en alguna oportunidad personal de ejército retiró detenidos de la unidad, tampoco sabía en qué condiciones se dejaban los detenidos en la comisaría, es decir, no se dejaba ninguna instrucción respecto de sus libertades o permanencia como detenidos; solo sabe que debían ser entregados a su custodia. Indica, que recuerda al mayor comisario de la primera Comisaría de Carabineros de apellido Schweizer, y a un teniente de apellido Huerta, de quien sabía que era complicado por su carácter impulsivo, pero no lo relacionó interactuando con personal de su unidad. Asevera que la única acción conjunta que tuvo con personal de carabineros de Chile, fue cuando personal de la primera comisaría detuvo a una mujer, sobre quien se tenía sospecha de tenía una escuela de guerrillas en un sector rural de la comuna, expone sobre ese hecho. Que nunca dispuso de las libertades de los detenidos que tomaba su personal y que posteriormente eran entregados a carabineros de Chile, ya que siempre estimó que

carabineros era el personal idóneo para determinar el grado de peligrosidad de ese tipo de detenidos, por lo que siempre creyó que eran ellos los que debían determinar sus libertades.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2015, rolante a **fs. 611 a fs. 613 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 591 a fs. 593. Agrega a sus dichos que él nunca recibió ninguna instrucción para ordenar detenciones de personas civiles. Relata que, después del 11 de septiembre de 1973, el coronel Ramírez asumió funciones de Intendente en Temuco, por lo que por orgánica, él, como segunda antigüedad, debía asumir el mando del regimiento. Afirma que además el coronel Ramírez asumió funciones de Intendente en Temuco, por lo que por su orgánica, debía asumir el mando del regimiento. Detalla la orgánica de la unidad militar y que en el regimiento “La Concepción”, había dos unidades operativas que estaban bajo sus órdenes; una era comanda por el capitán García que tenía personal del batallón de infantería, la otra unidad era del grupo de artillería, que estaba a cargo del capitán Del Río. Que nunca se instruyó para que se efectuaran allanamientos o detenciones hacia los campos. El Tribunal le lee la declaración de Jorge Enrique Schweizer Gómez, de fecha 28 de abril último. El deponente señala que nunca se enteró de que personal de regimiento La Concepción hubiese efectuado allanamientos conjuntos con carabineros, o por separado. Que, al menos él, no dio esas instrucciones. Que las personas detenidas por las patrullas a cargo de los capitanes García y Del Río eran interrogados por ellos mismos en el regimiento, pero a él no le daban cuenta de esas diligencias. Que después del 11 de septiembre se envió una comisión a Panguipulli, pero no tiene recuerdo de que se haya enviado alguna unidad a Santiago. Refiere a otras labores, respecto de las víctimas, cuyo nombres se le a conocer y que son José Ignacio Beltrán Meliqueo, Sergio del Carmen Navarro Schifferli, José Andrés Meliquén Aguilera, Manuel Lizama Cariqueo, Domingo Huenul Huaiquil, Manuel Catalán Paillal, José Domingo Llabulén Pilquinao, Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, Benedicto Poo Álvarez, Luis Armando Horn Roa, Julio Manuel Paine Lepín, Pedro Millalén Huenchuñir, Julio Milla Montuy y José Bernardino Cuevas Cifuentes, quienes habrían sido ejecutados o estarían desaparecidas con responsabilidad en estos hechos de personal militar de Regimiento La Concepción de Lautaro. Indica que no los conoció y no supo de sus detenciones o ejecuciones. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración extrajudicial de Paicaví Lemolemo Painemal Morales, de fecha 05 de junio de 2015. El deponente señala que no tuvo conocimiento de los hechos que se indican en esta declaración, pero si éste dice que ocurrieron, entonces debió haber sido así.

A.23. RAFAEL GARCÍA FERLICE (28 años de edad a la época de los hechos investigados), **en declaración extrajudicial** de fecha 15 de mayo de 2015, rolante a **fs. 597 a fs. 599 (Tomo II)**, esgrime que, para el año 1973 ostentaba el grado de capitán de ejército, y se desempeñaba como tal como comandante de la segunda compañía andina

del regimiento de infantería Reforzado N° 20 La Concepción de Lautaro. Recordando a los subtenientes Bórquez y Grunert, a los clases Muñoz, Quezada y Toro. Dice que, el día 12 de septiembre de 1973, su compañía completa fue destinada a la ciudad de Santiago. En lo atinente apunta que, a su llegada a Lautaro, inmediatamente se le envió a Panguipulli a integrarse a la Brigada Chacabuco, que dirigía el General Floody Buxton, con el objeto de ubicar células extremistas que estaban ocultas en ese sector. Respecto de la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido en la ciudad de Santiago, el día 15 de octubre de 1973, por personal de carabineros de esa ciudad, debe señalar que ignora todo antecedente relacionado a su persona. Narra que, es efectivo que personal de su unidad entregaba los detenidos que infringían el toque de queda a carabineros de Lautaro, ya que ese era su protocolo de actuación. Recuerda al mayor comisario de la primera comisaría de carabineros de apellido Quezada y a un teniente de apellido Huerta. Asegura que es efectivo que existió una sección segunda, la cual estaba conformada por un capitán de apellido Lafourcade, era jefe de esa sección. En otros integrantes de esa sección, solo sabe que la oficina de estos funcionarios se ubicaba en el segundo piso del regimiento. Manifiesta que esta sección se encargaba, hasta antes del día 11 de septiembre, de aspectos relacionados con la seguridad del cuartel, como lo eran por ejemplo, la confección de planes de defensa y reacción ante alguna situación de emergencia, y también con el cifrado de mensajes que llegaban a la unidad. Que con posterioridad al 11 de septiembre, esta sección se encargó de los temas políticos, pero a su juicio, no tenían experiencia en esa área, por lo cual debieron ampararse en el conocimiento que tenía personal de carabineros, recordando que para esas funciones se apoyaron en un teniente de esa institución, cuyo apellido era Huerta, a quien siempre veía en el regimiento, incluso tenía mucha relación con los oficiales menos antiguos de su unidad. Esgrime que, por otra parte, la única ejecución que se enteró corresponde a la que tuvo participación el capitán Del Río, de la cual habrían resultado fallecidas dos personas, uno de apellido Burgos, quien trabajaba en el Banco Estado. Añade que, sobre interrogatorios bajo la aplicación de torturas hacia los detenidos dentro de su unidad militar, desconoce tales situaciones, pero no las descarta, ya que fue mucho el tiempo en que estuvo fuera del regimiento.

A.24. JORGE NIBALDO DEL RÍO DEL RÍO (29 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 600 a fs. 602 (Tomo II); de fs. 616 a fs. 619.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de mayo de 2015, rolante a **fs. 600 a fs. 602 (Tomo II)**, afinsa que en cuanto a su estadía, grado y desempeño en el Regimiento N° 4 La Concepción de Lautaro, recordando que junto a él trabajaba el teniente Silva Rebeco, el subteniente Ricardo Dosd, los sargentos Roberto San Martín, quien era conductor, Cartes, López, y González, los cabos Garrido, Napoleón Martínez, Recabal y Hernán Molina. Refiere a la orgánica y sección de inteligencia después del 11

de septiembre, señala que recuerda en esas funciones a los capitanes Rafael García Ferlice, Patricio Lafourcade y un sargento de apellido Salazar, quien era auxiliar de inteligencia, ellos se desempeñaban en el segundo piso de regimiento, a un costado de la oficina del comandante del regimiento y a su parecer sus funciones después del día 11 de septiembre consistían en la obtención de información respecto a la identificación de extremistas de la zona. Hace presente, que la información que manejaba esa oficina era de carácter reservado y no estaba a disposición del resto de la unidad, incluyendo a su persona. Sobre los servicios que comenzaron a efectuarse después del 11 de septiembre, estaban los patrullajes de control de toque de queda, en los cuales no tuvo participación. Según recuerda, poco después fue designado para concurrir a las zonas de Carahue y Puerto Saavedra, eso durante el mes de octubre de 1973, considerando además que los días 11 y 12 de septiembre de 1973, estuvo en la ciudad de Temuco, junto a su Batería, como unidad de reserva en el regimiento Tucapel. Puntualiza sus funciones en Carahue, Puerto Saavedra, Panguipulli y Lonquimay. En relación a la permanencia de personas detenidas al interior de la unidad, aduce que efectivamente hubo detenidos por parte de personal militar, pero estos correspondían a infractores de toque de queda, quienes probablemente eran entregados a carabineros de Lautaro. En base a lo anterior, nunca le correspondió retirar detenidos desde la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, como tampoco supo que otros funcionarios hayan efectuado tal labor por orden superior. En cuanto a los funcionarios de carabineros, que en este acto se le mencionan sus apellidos como Huerta, Ferrier y Campos, recuerda a Huerta como teniente de carabineros, quien tenía una cercana relación con los oficiales jóvenes del regimiento y a Ferrier, como conductor de la comisaría. Añade que, sobre el funcionario de apellido Campos, no lo recuerda. Sobre lo anterior, musita que, en una oportunidad se enteró por comentarios que el teniente Huerta había manifestado que carabineros se encontraba efectuando una limpieza de cuatros y delincuentes de la zona. Respecto a la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido en la ciudad de Lautaro el día 15 de octubre de 1973, por personal de carabineros de esa ciudad, señala que ignora todo antecedente relacionado con su persona, haciendo presente que para esa fecha se encontraba en la zona de Carahue y Puerto Saavedra. Interrogado esgrime otras situaciones.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2015, rolante a **fs. 616 a fs. 619 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile que consta a fs. 600 a fs. 602 (Tomo II), rectificarla aquella parte en que se indica que el capitán García formaba parte de la sección de inteligencia del regimiento La Concepción, porque en realidad eso no le consta. Señala que, quiere agregar a sus dichos que él dependía de comandante del grupo de artillería, mayor Jaime Rowe Del Río y en su ausencia, del segundo comandante, teniente coronel Hernán Mardones Díaz. Puntualiza, que el comentario que hizo el teniente Huerta era “vox

populi”, casi todo el mundo en el regimiento, especialmente los oficiales jóvenes amigos de Huerta, sabían de esto. Entre los oficiales solteros recuerda a Olivares, Silva, Dods, Argomado, Guerra, Grunert, Muñoz, Linares, Bórquez, Valdebeito y Moncada. Acota que todos ellos compartían el casino de oficiales donde acudía frecuentemente el teniente Huerta. Además, los capitanes García y Lafourcade y el mayor Alonso eran solteros. Persiste que, nunca recibió ninguna instrucción para detener personas civiles o practicar allanamientos. Nunca fue sancionado por sus superiores mientras estuvo en el regimiento “La Concepción”. El Tribunal le lee la declaración de Jorge Enrique Schweizer Gómez, de fecha 28 de abril (2015). El deponente señala, que nunca fue a la Comisaría de Lautaro a buscar o dejar detenidos. Que no es cierto lo que el señor Schweizer indica. Que además, nunca llevó detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco. El Tribunal le lee las declaraciones prestadas por Víctor Matus Vásquez y Robinson Fernando Castillo Orellana, con fecha 24 de noviembre de 2014. El deponente señala que lo que se indica en estas declaraciones es falso. Señala que él no estuvo todo el tiempo en Lautaro ya que le correspondió salir en varias comisiones, al igual que el capitán García. El Tribunal le lee la declaración prestada por René Inocencio Rabanal Romero, el 24 de marzo de 2014, en autos. El deponente señala, que es falso lo que esta persona indica. Que jamás estuvo en la comisaría de carabineros para tratar temas políticos o para ir a buscar o dejar detenidos. El Tribunal le lee la declaración prestada por Hernán Patricio Juan Antonio Mardones Díaz, con fecha 19 de agosto (2015). El deponente señala que jamás estuvo a cargo de alguna unidad especial, por lo que el señor Mardones está equivocado. Alega que además, es imposible que el segundo comandante del regimiento no sepa lo que alguno de sus subordinados hacía. Por otra parte, la salida de vehículos y comisiones las disponía él. Explica que, debía existir un documento firmado por el comandante o segundo comandante, si no estaba el titular para sacar hasta un vehículo. Además existía un registro de todo lo que entraba y salía de la unidad. Asegura que, por este motivo, es imposible que en la práctica sucediera lo que indica el señor Mardones. El Tribunal le lee la declaración prestada por Marcial Vera Ríos, con fecha 24 de julio de 2014. El deponente señala que es falso lo que señala esta persona. Precisa, que no hubo consejos de guerra en Lautaro. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración extrajudicial de Paicaví Lemolemo Painemal Morales, de fecha 05 de junio de 2015. El deponente señala que, lo que dice esta persona es falso. Funda, en primer lugar, porque en Lautaro no existían ni caballerizas ni picadero. Agrega que el gimnasio estaba pegado a la guardia. Explaya que, el sargento Salazar no era artillero, sino que pertenecía a la oficina de seguridad. Arguye que Escobar era infante. Detalla que ellos no mezclaban el personal. Que, en su batería tenía cincuenta soldados, además existían alrededor de ocho clases y dos o tres oficiales. Señala que, respecto de las víctimas, cuyos nombres se le dan a conocer en este acto y que son: José Ignacio Beltrán Meliqueo, Sergio del Carmen Navarro Schifferli, José Andrés Meliquén Aguilera, Manuel Lizama Cariqueo, Domingo

Llabulén Pilquinao, Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, Benedicto Poo Álvarez, Luis Armando Horn Roa, Julio Manuel Paine Lepín, Pedro Millalén Huwenchuñir, Julio Milla Montuy y José Bernardino Cuevas Cifuentes, y quienes habrían sido ejecutados o estarían desaparecidos con responsabilidad en estos hechos de personal militar del regimiento La Concepción de Lautaro y carabineros Lautaro, puede indicar que no las conoció y no supo de sus detenciones o ejecuciones. Esgrime que las personas que iban al regimiento preguntando por alguien, eran detenidas en la guardia y en algunos casos la hacían pasar al segundo piso del edificio de la comandancia. Allí pueden haber sido atendidas por el ayudante del regimiento o por el segundo comandante. Recalca que, claramente carabineros intenta deslindar su responsabilidad en estos hechos e intenta cargar la responsabilidad en el personal del ejército. Que lo normal en el Regimiento La Concepción era que se observara la orgánica y el procedimiento. Agrega que no tiene conocimiento que en algún momento, o por determinada situación, se haya desatendido estos protocolos, pero puede haber sido posible, que por orden verbal se hubiesen dado algunas instrucciones. Explica, que por ejemplo, el día 11 de septiembre de 1973 recibió una orden verbal del comandante Ramírez, para ir al regimiento Tucapel con personal armado y camiones con reserva del señalado Comandante.

A.25. MARIO LARRAÑAGA MORA (39 años de edad a la época de los hechos investigados). **En declaración judicial** de fecha 26 de noviembre de 1973, rolante a **fs. 645 (Tomo II)**, expone que ratifica el parte de fs. 2 (de causa diversa). Arguye que, efectivamente, por una llamada telefónica, se tuvo conocimiento en la comisaría, que en el río Cautín, frente a la cantera, se encontraban flotando dos cadáveres. Indica que a él y al sargento Ferrier, los mandaron a verificar estos hechos, constatando la veracidad de la denuncia. Que, previa orden del Tribunal, se sacó del río a estos cadáveres y se pudo constatar que estaban totalmente hinchados, y deformes todas sus facciones y descompuestos. Detalla que no presentaban lesión visible alguna. Añade que, al parecer sus muertes se debieron a inmersión. Cuenta que los occisos fueron enviados a la morgue de esta ciudad. Estima que en el estado de descomposición en que estaban, ni los mismos familiares lo habrían reconocido. Que uno de ellos estaba semidesnudo. Acota que se averiguó sus nombres, pero no se obtuvo resultado alguno.

A.26. NILO FIDEL MARIN ACUÑA (31 años de edad a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 653 (Tomo II); de fs. 662 (Tomo II); de fs. 671 (Tomo II).

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 1974, rolante a **fs. 653 (Tomo II)**, ratifica el informe médico de fs.10 (de causa diversa). Agrega que los occisos se encontraban en total estado de descomposición, y sus muertes se produjeron posiblemente por la hemorragia intensa derivada de la gran destrucción pulmonar

secundaria, probablemente a heridas a abala, cuyas lesiones en la cara anterior y posterior del tórax estaban descritas en el informe correspondiente.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre de 1992, rolante a **fs. 662 (Tomo II)**, manifiesta que, respecto de lo que le pregunta, puede decir que, por el tiempo transcurrido, tiene una idea muy vaga de hechos, de manera que lo que él puede informar, se refiera básicamente a lo que se dice en informe médico Legal de la causa rol 25.989 referido a dos cadáveres identificados como N.N, por lo que ratificaría dicho informe no teniendo más datos que dar al respecto.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de diciembre de 1992, rolante a **fs. 671 (Tomo II)**, refiere a su carrera funcionaria en el hospital de Lautaro. Que, en su función de médico general, le tocaba desempeñar diferentes funciones y en reiteradas oportunidades y por mandato judicial, tuvo que efectuar autopsias. Relata que, específicamente, por las que se consultan y que tiene como fecha de inscripción en el gabinete de identificación de Lautaro, el día 13 de noviembre de 1973, no las recuerda, esto debido al tiempo pasado y a que efectuó muchas. Sobre el ingreso de los cadáveres, él no tenía nada que ver, por lo que ignora mayores antecedentes sobre el procedimiento, su recepción y posterior retiro y las circunstancias del ingreso. Desarrolla que, además para poder ratificar que él efectuara las mencionadas autopsias de los N.N que aparecen inscritos y poder aportar otros datos relacionados con el cadáver, tendría que ver el informe efectuado por él y que tendría que encontrarse en el juzgado correspondiente. Se le pregunta por otro hecho. Añade que, sus funciones en el hospital de Lautaro, eran como empleado del Servicio Nacional de Salud y si efectuó autopsias fue porque el magistrado de esa localidad así lo ordenó y el que además fuera empleado de carabineros, no tenía nada que influenciar en sus labores profesionales. Sobre el personal de carabineros que se desempeñaba en Lautaro en ese tiempo, recuerda solamente algunos apellidos como Muñoz, Matus, Rabanal...etc.

A.27. HILDA DEL CARMEN FUENTES ORTEGA (años de edad a la época de los hechos investigados rut: 7.728.821-K) quien declaró a fs. 668 (Tomo II); de fs. 669 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 26 noviembre de 1992, rolante a **fs. 668 (Tomo II)**, advierte lo relacionado a la desaparición de su conviviente, Benedicto Poo Álvarez, a quien describe físicamente y señala la ropa que usaba el día de los hechos. Explicita que, el día 20 de octubre de 1973, junto a su conviviente se trasladaron a la ciudad de Lautaro, a efectuar unas diligencias; pasaron al domicilio del tío de este, don Urbano Poo, (fallecido), donde se quedó mientras que cónyuge concurrió al centro de la ciudad. Posteriormente, cerca de las 13:30 horas, llegó hasta la casa, Miriam Poo, quien les comunicó que personal de carabineros había detenido a Benedicto en el centro de la

ciudad; posteriormente se enteró que había sido en General Mackenna y Valdivia, y que había sido subido a una camioneta de color verde; no especificó mayores antecedentes y características del vehículo, ni del personal de carabineros. Por esta razón concurrió inmediatamente a la unidad de carabineros, donde se le informó que su conviviente no se encontraba detenido y le mandaron al regimiento, donde se le informó lo mismo y desde ese momento no ha tenido noticias de su paradero. Asevera que, por averiguaciones efectuadas a los años después, se pudo enterar que en el cementerio de Lautaro, había sepultado un N.N., por lo que solicitó el certificado de sepultación y por la fecha podría corresponder a su conviviente, pero de esto, no ha podido averiguar mayores antecedentes. Que por averiguaciones y por lo que se podía ver en la ciudad de Lautaro, carabineros usaba una camioneta de color verde, abierta en su parte trasera y con barandas de madera y en ese vehículo siempre se veía al carabinero Ferrier.

En declaración extrajudicial de fecha 14 diciembre de 1992, rolante a **fs. 669 (Tomo II)**, amplía su declaración en cuanto a las vestimentas de su marido el día de los hechos y sobre los funcionarios de carabineros que trabajaban en ese tiempo, nombra al teniente Huerta, mayor Montes y un carabineros Ferrier. Desconociendo mayores antecedentes.

A.28. VICTOR MANUEL ARIAS CERECEDA (25 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 673 (Tomo II); y a fs. 665 (Tomo II).

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 665 (Tomo II)**, que corresponde a empadronamiento de testigos de causa diversa (39.152) expone que, durante el año 1973, se encontraba trabajando como panteonero en el cementerio de Lautaro; su director era el señora Domingo Bustos, actualmente fallecido. Indica que, recuerda que en el mes de noviembre de 1973, la fecha exacta no la recuerda, en horas de la noche, llegó hasta el cementerio, personal de carabineros, quienes traían dos urnas de madera en bruto, donde venían dos desconocidos (N.N), de los que ignora todo tipo de antecedentes relacionados con su causa de muerte y lugar donde fueron encontrados. Dice que, por lo que recuerda, venían todos los papeles para efectuar la sepultación por lo que se efectuó en el patio N° 3, donde fueron encontrados actualmente por los antropólogos que vinieron de Santiago. Sobre los Carabineros que vinieron esa noche, no ubica sus nombres, ni recuerda mayores características de ellos. Sobre Benedicto Poo, puede señalar que no lo conoció e ignora lo que pudo haber pasado.

En declaración judicial de fecha 20 enero de 1993, rolante a **fs. 673 (Tomo II)**, ratifica íntegramente su declaración que se acompaña en autos (que consta en informe policial de fs. 664 y siguientes). Expone que, en el mes de noviembre de 1973, llegaron dos urnas cerradas, y llevadas al cementerio por un carabinero uniformado del cual ignora su identidad, urnas que fueron puestas en el carro mortuario. Añade que en ese tiempo él

se desempeñaba en el cementerio de esta ciudad (Lautaro) como panteonero, por lo que de inmediato los sepultó en unas fosas, ya se encontraban excavadas; ignora quienes pudieron haber estado en esas urnas. Que su función era solamente sepultar los muertos que llegaban al cementerio. Que ese día se encontraba solo, por lo que nada más puede decir al respecto, que en ese tiempo el administrador del cementerio era Domingo Antonio Bustos Valverde y él fue el que inscribió a los certificados de defunción en los libros correspondientes, persona ya fallecida.

A.29. RENÉ INOCENCIO RABANAL ROMERO (30 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 674 (Tomo II); de fs. 691 (Tomo II); de fs. 997 (Tomo III); de fs. 1.190 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 20 enero de 1993, rolante a **fs. 674 (Tomo II)**, explicita que, a fines de 1971 llegó a prestar sus servicios en carabineros de Lautaro; su función correspondía al servicio de casino, por lo que no tenía contacto con el público, tampoco le correspondió salir a hacer servicio a la calle. Se le pregunta por otro hecho. Afirmando que en ese tiempo se encontraba de comisario el mayor Schweizer, ignora domicilio.

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 691 (Tomo II)**, en lo específico sostiene que en el año 1971 fue trasladado a la comisaría de Lautaro, reitera que presto funciones en el casino, se le interroga por otros hechos. Con relación a la pregunta de los cadáveres encontrados en el mes de noviembre de 1973, dice no tener conocimiento. Acota que Ferrier era el conductor de la unidad.

En declaración judicial de fecha 05 enero de 2017, rolante a **fs. 997 (Tomo III)**, expone que, efectivamente, para el año 1973 se encontraba prestaba servicios en la comisaría de Lautaro, pero al interior del casino, por lo que no tiene conocimiento acerca de la existencia de detenidos por motivos políticos, ni menos de la existencia de una comisión civil que se encargara de tales fines. Agrega que, respecto a la víctima de la presente causa, no tiene ningún antecedente al respecto.

En declaración extrajudicial de fecha 23 enero de 2019, rolante a **fs. 1.190 (Tomo IV)**, expone que, en el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero, siendo su labor principal, labores internas de casino, en la Primera Comisaría Lautaro, la cual se encontraba a cargo de un mayor del cual no recuerda nombre, siendo unos 40 o 50 funcionarios la dotación del personal, recordando a: Marcelino Arriagada, Exequiel Barrera, Isidoro Burgos, Luis Muñoz Cid, Domingo Campos, Ferrier, Sandoval, y otros que no recuerda en estos momentos. Indica que luego del 11 de septiembre de 1973, le correspondió seguir en labores del casino, que nunca participó en servicio a la población ni menos allanamientos; tampoco tuvo contacto con detenidos políticos debido a labor antes señalada. Apunta a que, sobre el hecho investigado y que se le da a conocer en

este momento, sobre la detención de José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuese detenido por personal de carabineros Lautaro, en octubre de 1973, debe señalar que desconoce antecedentes. Acota que, respecto a un funcionario de apellido “Beni”, debe señalar que se hablaba de un funcionario con ese nombre en la Unidad Dollinco, la cual no conoció.

A.30. SALVADOR DEL CARMEN ZÚÑIGA RIVERA (43 años de edad a la época de los hechos investigados). **En declaración judicial** de fecha 21 enero de 1993, rolante a **fs. 683 (Tomo II)**, expone que en el año 1973 prestaba sus servicios en la comisaría de Carabineros de esta ciudad (Lautaro), al mando del comisario Jorge Schweizer Gómez y como subcomisario Marcial Vera. Que su función correspondía en guarda almacén y encargado de la sala de armas, por lo que no le correspondía salir a la calle. Blasona otros hechos.

A.31. IDA DEL CARMEN MELIQUEN QUILODRAN (29 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 709 (Tomo II); de fs. 716 (Tomo II).

En declaración judicial de fecha 14 agosto de 1990, rolante a **fs. 709 (Tomo II)**, ratifica íntegramente la denuncia que antecede (que consta de fs. 704 a fs. 708, sobre presunta desgracia de José Andrés Meliquen Aguilera, José Ignacio Beltrán Meliqueo, y de Sergio Navarro Schifferli).

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 716 (Tomo II)**, esgrime que es hermana de José Andrés Meliquen Aguilera, a quien según lo informado por su padre José Santos Meliquen Levinao (fallecido), el día 04 de octubre de 1973, carabineros del Retén Tres Esquinas, lo sacaron de su casa, alrededor de 07:30 horas, en una camioneta de propiedad de Segundo Cuevas, (fallecido), la cual era conducida por el mismo dueño, percatándose además de que los carabineros eran los cabos Enrique Ferrier y Domingo Campos. Todo esto se lo contó a la semana de ocurridos los hechos, ya que en esa fecha, ella ya se encontraba casada y residiendo en Santiago y viajó al domicilio de sus padres en cuanto se enteró de los sucedido con su hermano. Agrega que, en cuanto le contó, concurrieron junto a la esposa de su hermano, tanto al Retén Tres Esquinas, como a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, a preguntar por su hermano y siempre la respuesta fue la misma, que no había sido detenido y que no había llegado. Añade que también fueron a los hospitales de Lautaro y Temuco, sin encontrarlo. Relata que fue informada por su padre, que la camioneta con los detenidos no llegó al Retén Tres Esquinas, ya que él se quedó esperando que el vehículo regresara al Retén, cosa que nunca ocurrió. Indica que, respecto de la identificación de los carabineros, le dijo que los había visto a “cara limpia, sin pasamontañas ni encapuchados”, y podía reconocerlos, debido a que reiteradas oportunidades habían concurrido a su domicilio. Agrega que, también se enteró de que los mismos carabineros, el mismo día, se llevaron detenido, juntos a su hermano, a Sergio Navarro Schifferli, a quien sacaron de su casa, y el día 15

de octubre de 1973, en la Plaza de Lautaro, los mismos carabineros se llevaron detenidos a José Ignacio Beltrán Meliqueo. Que sus familiares se encuentran desaparecidos desde esa fecha, ignorando donde puedan estar, si es que están vivos o donde se encuentran enterrados, si están muertos. Que en razón a que no fue partícipe de la vez en que desapareció su hermano y las otras personas, decidió concurrir a la Vicaría de los Derechos Humanos, a fin de presentar la respectiva querella y lograr con ello que se dé comienzo a la búsqueda en esta zona. Reitera, que toda esta información se la proporcionó su padre, a la semana de ocurrido el Golpe Militar.

A.32. DOMINGO BENEDICTO MELIQUEN MORALES (11 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 719 (Tomo II); de fs. 724 (Tomo II).

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 719 (Tomo II)**, aduce que es hijo de José Andrés Meliquen Aguilera, recordando que el día 04 de octubre de 1973, alrededor de las 07:00 horas, salía de su domicilio, en dirección al colegio, cuando fue interceptado por varias personas de uniforme verde, encapuchados y uno de ellos le dijo que se devolviera a la casa y que no saliera de ella; debido al susto le hizo caso y cuando ingresó a su hogar, se percató que estaban sacando a su padre y desde esa fecha no le ha vuelto a ver, ni menos han tenido noticias suyas, pese a que su madre y familiares han hecho lo imposible por ubicarle; han concurrido a las comisarías de carabineros, hospitales, cárceles, Vicaría de la Solidaridad, pero en ninguna parte han tenido respuesta. Explica que con el tiempo, ha escuchado de boca de su madre, que había dos personas identificadas que participaron en la detención de su padre y estos serían los carabineros Enrique Ferrier y Domingo Campos, los cuales en reiteradas oportunidades habían concurrido su hogar, a dejar citaciones para su padre. Agrega que Ferrier y Campos siempre andaban juntos y eran muy temidos por la gente.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 724 (Tomo II)**, narra que es hijo de José Andrés Meliquen Aguilera, quien el día 04 de octubre de 1973 fue sacado de la casa por un grupo de carabineros y desde esa fecha nunca más se supo de él. Que él tenía 11 años de edad y recuerda que fue en horas de la mañana cuando lo sacaron de la casa ya que él iba saliendo para el colegio. Indica que en realidad no conoció a ningún funcionario de carabineros que lo sacó de la casa, glosa otros comentarios.

A.33. CARLOS ANTONIO NAVARRO SCHIFFERLI (años de edad a la época de los hechos investigados rut:...) quien declaró a fs. 720 (Tomo II); de fs. 726 (Tomo II).

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 720 (Tomo II)**, relata que el día 04 de octubre de 1973, él salió de su casa alrededor de las 06:00 horas, donde un vecino, regresando aproximadamente a las 08:00 horas, pudo ver a lo lejos, que cuatro sujetos desconocidos, vestidos con uniforme de carabineros, sacaban de su casa a su hermano

Sergio, golpeándoles con las culatas de unos fusiles, llevándoselo en una camioneta media amarilla que esperaba en el camino, lugar donde estaban los carabineros Enrique Ferrier y Domingo Campos, a quienes logró reconocer su madre, Elisa Schifferli Lussinger (fallecida), ya que ella les siguió hasta el vehículo, y después le contó, diciéndole además que también lo buscaban a él, razón por la cual se escondió en los cerros. Añade que al día siguiente, su madre concurrió a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, donde le informaron que su hermano había estado detenido y que había sido dejado en libertad, mostrándole un libro, donde aparecía una firma, la que le explicaron, era de él. Expone que, como no regresaba a la casa, su madre comenzó a buscarle por todas partes, sin obtener noticias sobre su paradero. Expresa que, alrededor de una semana más tarde, se encontró con un vecino de nombre Antonio López Quilapan (fallecido), quien le dijo que había visto el día 04 de octubre, una camioneta media amarilla, que iba con varios carabineros, ingresando a un fundo de propiedad de Pedro Rosel, ubicado a unos 19 km., de Lautaro, a mano izquierda, la que tenía varios cadáveres en la parte posterior, y que después de un rato había salido desocupada, presumiendo que uno de esos cadáveres era el de su hermano. Continúa relatando sus gestiones en torno a búsqueda de su hermano.

En declaración judicial de fecha 12 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 726 (Tomo II)**, manifiesta que efectivamente es hermano de Sergio Navarro Schifferli, quien el día 04 de octubre de 1973, en horas de la mañana fue sacado por carabineros desde su casa de habitación y hasta la fecha no ha regresado, por lo que se presume que lo mataron, lo que no le consta, ya que ese día él no estaba en su casa y solo se enteró por dichos. Apunta a que, con respecto a los funcionarios que lo detuvieron, debe decir que no puede dar nombres ya que no estuvo presente. Indica que, también la gente comenta que su hermano estaría en el interior de un pozo ubicado en el predio del señor Roussel.

A.34. JOSÉ RAFAEL MELIQUEO ANCATEN (38 años de edad a la época de los hechos investigados). **En declaración judicial** de fecha 06 de diciembre de 1990, rolante a **fs. 730 (Tomo II)**, expone que es hijo de Segundo Meliqueo Levinao, quien, en el año 1973, la fecha exacta no la recuerda, pero fue después que los militares se hicieron cargo del gobierno, comentó en la casa que él estaba junto a José Ignacio Beltrán, en la plaza de esta ciudad, y que este último había sido detenido por carabineros y de ahí nunca más se supo de Beltrán, pero la verdad es que él no fue testigo de esos hechos, solo lo supo por versiones de su padre, quien en la actualidad está fallecido.

A.35. LUIS NICOLÁS BELTRÁN MELIHUÉN (7 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 967 a fs. 968 (Tomo III); de fs. 1.030 (Tomo III); de fs. 1.032 a fs. 1.033 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 03 de junio de 2016, rolante a **fs. 967 a fs. 968 (Tomo III)**, expone que es hijo de la víctima de los hechos investigados, cuya identidad corresponde a José Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido por personal de carabineros de Lautaro el día 15 de octubre de 1973, en la ciudad de Lautaro. Aduce que para el año 1973, tenía la edad de siete años, por lo que no tiene muchos recuerdos sobre la información que había en ese momento respecto a la detención de su padre. Lo único que recuerda es que un día salió de mañana en dirección a la ciudad en busca de insumos agrícolas a la oficina de INDAP, no regresando nunca más a su domicilio. Indica que, con el paso del tiempo se rumoreaba mucho que su padre había sido detenido por un carabinero de apellido Campos, junto a otro funcionario cuyo apellido no recuerda en estos momentos, no enterándose de mayores antecedentes en su momento. Añade que su madre fue la persona que siempre lo buscó, incluso en más de una oportunidad preguntó en carabineros de Lautaro, pero estos siempre le contestaron que su padre estaba detenido ahí, pero que no lo podía ver, incluso le decían que tenía que volver al día siguiente, encontrándose al regresar con la misma respuesta. Que, pasado veinte años de la desaparición de su padre el año 1993, si bien recuerda, llegaron hasta su domicilio personal de la Policía de Investigaciones de Lautaro, a informarles que en las afueras del cementerio general de la ciudad habían sido encontradas dos osamentas, las cuales habían sido trasladadas al Servicio Médico Legal de Santiago para periciarlas y que ahora estaban en el Juzgado de Lautaro, ya que se había confirmado que una de estas correspondía a su padre. Es así, que fue junto a su madre y su hermano mayor Carlos, fueron hasta dependencias del Juzgado donde les exhibieron las osamentas de su padre, e incluso tenían los restos de sus vestimentas, las cuales fueron reconocidas por ellos. Hicieron los trámites para retirar su cuerpo, el cual posteriormente fue trasladado hasta su domicilio en el sector Los Aromos donde fue velado dos días antes de sepultarlo en el cementerio de la comunidad Manuel Levinao. Que, es efectivo que el día que retiraron los restos de su padre del Juzgado de Lautaro, a la salida de este recinto estaba el carabinero Domingo Campos, quien vestía de civil, ocasión en que su madre le preguntó si él había matado a su padre, respondiéndole de manera irónica y burlesca, que él lo había matado y que lo volvería a hacer si es que fuera necesario, retirándose del lugar, riéndose de ellos, sin importarle que toda la familia estuviera presente. Acota que el carabinero anteriormente aludido nunca allanó su domicilio antes de la desaparición de su padre, solo sabe que a él se le vincula con la desaparición de otras personas que residían en sectores rurales de Lautaro.

En declaración judicial de fecha 29 de marzo de 2019, rolante a **fs. 1.030 (Tomo III)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 968 a fs. 969 (que consta a fs. 967 a fs. 968). Esgrime que, es poco lo que recuerda a las circunstancias que rodearon la desaparición de su padre, ya que en esa fecha tenía 7 años. Expone que, cuando fueron al juzgado a retirar

el cuerpo de su padre, en el año 1993, junto a su hermano Carlos Mariano y su madre, se encontraron con el carabinero Campos, momento en el que su madre, le preguntó sobre el destino de su padre, recibiendo como respuesta, que lo volvería a matar si fuera necesario.

En diligencia de careo entre Carlos Mariano Beltrán Melihuén, Luis Nicolás Beltrán Melihuén y Domingo Antonio Campos Collao, de fecha 29 de marzo de 2017, rolante a **fs. 1.032 a fs. 1033 (Tomo III)**, manifiesta que reconoce a la persona que está sentada a su lado, llamado Domingo Campos Collao, lo reconoce porque era carabinero en la ciudad de Lautaro. El Tribunal le lee, en lo pertinente su declaración de fs. 1.031 señala que ratifica aquellas declaraciones, se mantiene en sus dichos.

A.36. JOSÉ IGNACIO SEGUNDO BELTRÁN MELIHUÉN (24 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 1.071 a fs. 1.072 (Tomo III); de fs. 1.077 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de septiembre de 2017, rolante a **fs. 1.071 a fs. 1.072 (Tomo III)**, funda que, es hijo de José Beltrán Meliqueo, señala que para el año 1973 tenía sobre 50 años de edad, se dedicaba a la agricultura y no pertenecía a ningún partido político. Indica que, de la detención de su padre, ocurrida en el mes de septiembre de 1973, se enteró mientras se encontraba en la ciudad de Concepción, donde llevaba 6 años trabajando en la construcción. Recordando que recibió una carta de una de sus hermanas, en la cual se le informaba que su padre se encontraba detenido-desaparecido. Aduce que, por lo antes señalado, viajó a Lautaro a interiorizarse de lo sucedido, obteniendo como única información, que su padre había sido detenido en la plaza de Lautaro por un grupo de carabineros, entre los que se encontraban los de apellidos Ponce, Ferrier y Domingo Campos, quienes eran muy conocidos en esta zona, porque anteriormente habían trabajado en el retén Dollinco. Que una de las acciones que realizó para buscar a su papá, fue concurrir a la comisaría de carabineros, policía de investigaciones y el regimiento de Lautaro, donde no se le dio ningún tipo de información respecto del paradero de su padre. Hace presente que nunca obtuvo antecedentes de terceras personas respecto a los hechos que rodearon la detención de su padre, siendo la única información que recibieron, con el paso del tiempo, que sus restos habrían sido encontrados al costado del cementerio de Lautaro, los cuales fueron periciados por el Servicio Médico Legal de Santiago, donde se confirmó su identidad.

En declaración judicial de fecha 19 de diciembre de 2017, rolante a **fs. 1.077 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial, de **fs. 1.071 a fs.1.072**. Comenta que a su padre lo tomaron detenido en la plaza de Lautaro. “Estaba curado. Y de ahí no salió más”. “Que esos eran los que tomaban a la gente para matarlos”. Señala que un carabinero conocido dijo que lo habían tenido, a su papá, cinco días en la comisaría y después lo

sacaron para matarlo. Acota que el carabinero se llamaba Manuel Beni (fallecido). Que no supo que haya habido un testigo de la detención de su padre. Que su “padre tenía 10 balazos en el cuerpo. El cuerpo estaba roto por todas partes”. Su hermano y su madre fueron quienes trabajaron buscando a su padre.

A.37. VERÓNICA YANET BELTRÁN MELIHUÉN (3 años de edad a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 1.073 (Tomo III); de fs. 1.078 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de septiembre de 2017, rolante a **fs. 1.073 (Tomo III)**, acota que, es hija de José Beltrán Meliqueo, respecto a la detención y desaparición de su padre, no tiene muchos antecedentes, debido a que para la fecha de su detención tenía tan solo 3 años de edad. Cuenta, que la única información que tiene es la que le dio a conocer su madre, donde hacía referencia a que su padre fue detenido en el mes de octubre de 1973 en la ciudad de Lautaro. Que el otro antecedente, es que los restos de su padre fueron encontrados a un costado del cementerio de Lautaro, los cuales fueron periciados por el Servicio Médico Legal de Santiago, donde se determinó su identidad.

En declaración judicial de fecha 19 de diciembre de 2017, rolante a **fs. 1.078 (Tomo III)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1.073.

A.38. DANIEL MANUEL EDGARDO NAVARRO CAMPOS (15 años de edad a la época de los hechos investigados). **En declaración judicial** de fecha 16 de enero de 2014, rolante a **fs. 1.153 bis a fs. 1.154 (Tomo III)**, inquiriere que, le parece que “el repollo” era familiar de Beltrán Meliqueo, pero no sabe su nombre. Que su padre, Carlos Navarro Schifferli, también fue perseguido por los carabineros. Por este motivo él se escondió en diferentes lugares para no ser encontrado. Que carabineros llegaba a su domicilio en diferentes horas sacándole al patio todas las veces, en muchas de las cuales fue golpeado, amarrado y amenazado de muerte para que diera el paradero de su padre. Soflame que carabineros del retén Dollinco, ubicado en el sector Tres Esquinas, son los que deben saber el paradero de su tío Sergio Navarro Schifferli y de Andrés Meliquén Aguilera. Asevera que, respecto de las identidades de los carabineros que participaron en la golpiza que le dieron a su tío Sergio Navarro Schifferli y a él, pudo reconocer a Campos, Ponce, Matus, Ferrier y al teniente Huerta. A estas personas las conocía desde antes porque hacían patrullajes por el sector rural. Piensa que a su padre y a su tío los persiguieron, porque en el tiempo de Allende, ellos se inscribieron en comités para recibir ayuda del Estado, pero nunca fueron políticos. Asevera que Carabineros ese día andaba en número superior a los 20 efectivos y por lo que pudo ver, se movilizaban en dos o tres vehículos; sin embargo, no pudo identificar la marca y modelo de estos. Tampoco podría asegurar si andaban civiles acompañando a los carabineros. Sabe que por el sector vivía

un señor de apellido Cuevas, pero no sabe si participó en los hechos investigados. Que producto de las golpizas que recibió de parte de los carabineros, quedó con secuelas físicas y psicológicas. Indica que quedó con problemas de audición y perdió la capacidad intelectual que tenía antes.

A.39. LUIS ARMANDO ROUANT HIDALGO (36 años de edad a la época de los hechos investigados). **En declaración judicial** de fecha 10 de enero de 2019, rolante a **fs. 1.176 bis a fs. 1.177 (Tomo III)**, atestigua que para septiembre de 1973 se desempeñaba como sargento segundo de carabineros en la comisaría de Lautaro, el comisario de Lautaro era el mayor Jorge Schweizer Gómez, no recordando quien lo seguía en el mando. Recuerda que formaba parte de la dotación Ferrier, quien se desempeñaba como chofer, uno de apellido Campos, Millangir, Matus y otros que no recuerda. Dice que no supo que hubiera una comisión civil en Lautaro. Que los que detenían por temas políticos, para el año 1973 era el ejército. Recalca que para el año 1973 a ellos los acuartelaron en la comisaría de Lautaro, no recuerda por cuanto tiempo. Que sus funciones eran de servicio en la calle, servicio y guardia. Que los detenidos por temas políticos los veía el ejército, porque los veía cuando venían a conversar con el comisario. Desconoce que tema hablaban. No recuerda que el ejército dejara personas detenidas en la comisaría. Su función de servicio de guardia lo cumplía en una oficina al interior de la comisaría, la que se ubicaba en la entrada. Las funciones eran despachar los turnos de servicio en la calle, recibir denuncias, nunca recibió detenido, “era tan chica esa comisaría”. El Tribunal le lee la declaración de fs. 136 (de causa diversa), que indica “sí hubo detenidos por motivos políticos en Lautaro, recordando a dos curas, uno de ellos de apellidos Alarcón; y al director del Liceo, cuyo nombre no recuerdo”, a lo que el deponente señala que no recuerda que hubiesen detenidos. Acota, que no recuerda a un carabinero llamado Manuel Benni.

A.40. JOSÉ ARTURO ARANEDA PULGAR (30 años de edad a la época de los hechos investigados). **En declaración extrajudicial** de fecha 23 de enero de 2019, rolante a **fs. 1.191 a fs. 1.192 (Tomo IV)**, soflama que en el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero, su labor principal, servicio de cuartelero, vigilante de calabozos y servicio a la población, en la Primera Comisaría de Lautaro, la cual se encontraba a cargo de mayor Jorge Schweizer Gómez y subcomisario de los servicios, capitán Marcial Vera Ríos, además, siendo unos 35 a 40 funcionarios la dotación del personal, entre ellos Marcelino Arriagada, Exequiel Barrera, Isidoro Burgos, Luis Muñoz Cid, Víctor Manuel Mella Vega, Domingo Campos, Mario Ponce, Enrique Ferrier Valece, y otros que no recuerda en estos momentos. Indica que luego del 11 de septiembre de 1973, les correspondió vigilancia de toque de queda en la población y patrullajes que se realizaban de forma autónoma, ingresando diariamente unos cuatro por toque de queda, que eran llevados por los militares y eran dejados en horas de la mañana. Sobre la detención de

José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuese detenido por personal de carabineros Lautaro en octubre de 1973, desconoce antecedentes. Asevera que en la unidad existía un grupo del cual puede decir que no era directamente el que veía casos políticos, pero sí estaba el grupo especial el cual veía a este tipo de detenidos, entre ellos estaba Ferrier, Ponce, Sandoval, Umaña, teniente Huerta, además del sargento Campos. Referente a un funcionario de nombre “Beni”, lo conoció, pero nunca trabajó con él, era un hombre muy tranquilo, el cual trabajaba en el Retén Dollinco, pero tomado muy poco en cuenta por otros funcionarios.

A.41. HUGO GÓMEZ COFRE (35 años de edad a la época de los hechos investigados). **En declaración extrajudicial** de fecha 24 de enero de 2019, rolante a **fs. 1.193 a fs. 1.194 (Tomo IV)**, detalla que, en el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero, siendo su labor principal servicio de guardia y servicio a la población, en la Primera Comisaría de Lautaro, la cual se encontraba a cargo de un mayor Schweizer, siendo unos 40 funcionarios la dotación del personal, entre ellos Exequiel Barrera, Millangir, y otros que no recuerda. Que luego del 11 de septiembre de 1973, les correspondió vigilancia de toque de queda. Cuenta que a la unidad llegó gran cantidad de personas llamadas por los bandos para que se presentaran en las unidades respectivas, en muchas de esas oportunidades los militares pasaron a buscar a las personas que se encontraban detenidas. Sobre la detención de José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuese detenido por personal de carabineros Lautaro en octubre de 1973, desconoce antecedentes. Respecto a un funcionario de apellido “Beni”, lo desconoce.

A.42. JORGE ENRIQUE SCHWEIZER GÓMEZ (48 años a la época de los hechos investigados), quien declaró a fs. 128 a fs. 129 (Tomo I); de fs. 161 a fs. 164 (Tomo I); de fs. 289 a fs. 290 (Tomo I); de fs. 350 (Tomo I); de fs. 366 a fs. 367 (Tomo II); de fs. 689 a fs. 690 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 30 de junio de 2014, rolante a **fs. 128 a fs. 129 (Tomo I)**, funda que, para el año 1973, ostentaba el grado de mayor de carabineros y era el oficial a cargo de la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, recordando que el oficial que le seguía en el mando era el capitán Marcial Vera Ríos. En cuanto a su estadía en la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, señala que cumplió funciones en dicha unidad desde el año 1972, hasta el mes de octubre de 1973, no recuerda muy bien. Lo que sí tiene claro, es que el mando de la unidad se lo dejó al capitán Marcial Vera Ríos. Precisa sobre la existencia de un grupo especial de carabineros de la Primera Comisaría de Lautaro, que efectivamente existió y estaba a cargo de los opositores al régimen militar, el cual estaba a cargo del teniente Huerta, quien tenía a cargo dos o tres carabineros subalternos. Este grupo se reportaba cuando detenían a alguna de estas personas. Respecto a lo anterior, señala que el sargento Ferrier, quien era su chofer, pertenecía a este grupo, ya que era el encargado de manejar

el vehículo en que se movilizaba este grupo. A los detenidos de estos funcionarios no se les efectuaban interrogatorios, en base a la aplicación de torturas. Expone que, sobre el reclamo de algunos familiares de estos detenidos, no tiene recuerdo alguno. Los detenidos del grupo especial, generalmente eran alojados en los calabozos de la unidad, y posteriormente eran entregados a personal de ejército, quienes los trasladaban a la ciudad de Temuco, ya que en esa ciudad operaba la Fiscalía Militar. Explicita que dentro de los oficiales del regimiento a Concepción de Lautaro, recuerda al capitán Del Río, a quien no recuerda haberle dado información alguna sobre las personas residentes de la ciudad que tenían antecedentes políticos o delictuales. Hace presente, que los subalternos del capitán Del Río, eran los que sacaban a los detenidos de su unidad y como dijo anteriormente, los llevaban a Temuco ante un Fiscal de apellido Podlech. En relación a lo anterior, debe señalar que nunca se le reportó alguna muerte o tortura, tanto por parte de Huerta o Ferrier. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 28 de agosto de 2014, rolante a **fs. 161 a fs. 164 (Tomo I)**, ratifica la declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a **fs. 128 a fs.129**, comunica que después del 11 de septiembre de 1973 empezaron a llegar detenidos por motivos políticos a la unidad, los que sólo estaban en tránsito por la comisaría, ya que después de su aprehensión y paso por la comisaría, eran enviados hasta el regimiento de Temuco. Este traslado era efectuado por personal del regimiento La Concepción de Lautaro. No le consta que los detenidos se hayan llevado al regimiento de Temuco, pero se presumía, ya que cuando sacaban a los detenidos de la unidad quedaba registro en los libros de egreso de la comisaría, dejándose constancia del funcionario del regimiento La Concepción que iba a efectuar ese traslado. Recuerda que después del 11 de septiembre de 1973 hubo coordinación con el capitán Del Río, para proceder al traslado de detenidos desde la Comisaría de Lautaro, hasta el regimiento de Temuco. Acordaron que él sería quien se ocuparía del traslado de los detenidos desde la comisaría de Lautaro hasta la fiscalía de Temuco. Recuerda que después del 11 de septiembre de 1973 hubo coordinaciones con el capitán Del Río, para proceder al traslado de detenidos desde la comisaría de Lautaro, hasta el regimiento de Temuco. Escruta que, los detenidos que eran aprehendidos por el grupo del teniente Huerta, entre los que estaban Ponce, Ferrier, entre otros, eran trasladados por el grupo del capitán Del Río hasta Temuco. Que en la comisaría de Lautaro había detenidos por el grupo de Huerta y también por el grupo que disponía el Capitán Del Río. Que efectivamente había una comunicación constante entre el capitán Del Río, del regimiento La Concepción de Lautaro y el encartado, pero esta, mayoritariamente era de forma telefónica. No recuerda que se hubiesen reunido periódicamente para coordinar traslados de detenidos políticos u otro tipo de coordinación. Manifiesta que en más de una oportunidad el capitán Del Río lo llamó para comunicarle que sus subalternos, de quienes no recuerda nombres, iban a ir a buscar detenidos por motivos políticos a la comisaría. Agrega que el grupo del capitán Del

Río era el encargado, además, de trasladar los detenidos que eran aprehendidos por el grupo de Huerta. Además, en la comisaría también había detenidos políticos por los militares del regimiento La Concepción de Lautaro. Ignora si es que el capitán Del Río era de algún grupo de inteligencia u otro tipo en el regimiento de Lautaro. Lo que sí es cierto, es que sólo lo recuerda a él como el enlace entre ellos y el regimiento. No recuerda la fecha exacta, pero después de Lautaro se trasladó por ascenso hasta la prefectura de Temuco, con el cargo de subprefecto. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola fs. 136 a fs. 138 de causa rol 45.355, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro. El acusado señala que es totalmente falso lo que relata Marcial Vera, en el sentido de que él habría integrado consejos de guerra. Ahora, respecto a que el capitán Del Río iba constantemente a la comisaría a dejar y buscar detenidos, podría ser posible, pero que él lo haya recibido y el haya estado en su oficina. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración de rola a fs. 177 a fs. 178 de causa rol 45.357 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro. El acusado señala que es cierto lo que relata Caillet, en el sentido de que militares del regimiento La Concepción de Lautaro llevaban y traían detenidos a la comisaría. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 242 a fs. 243 de causa rol 45.362 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro. El encartado señala que, como ya ha relatado, es efectivo que hubo detenidos por motivos políticos en Lautaro, pero estando en la comisaría, todos los funcionarios podían tener acceso a ellos, no había una prohibición para tener contacto con los detenidos. Señala que los detenidos eran mantenidos en los calabozos y en las pesebreras de la comisaría. Que efectivamente fue en algunas oportunidades a ver a los detenidos por motivos políticos a las pesebreras o los calabozos. No conversó con ellos, solo fue a verlos. Que solo el personal autorizado podía sacar a los detenidos por motivos políticos, esto es el personal que estaba de guardia en la unidad. Dice que el capitán Vera Ríos también tenía contacto con los militares, ya que estaba interiorizado de todo lo que pasaba en la unidad, con respecto a los detenidos políticos y al contacto permanente con el capitán Del Río, su grupo, quienes trasladaban a los detenidos desde la comisaría hasta Temuco y además, de las permanencia de detenidos por el grupo del capitán Del Río. Añade que él debía saber todo esto, ya que, era quien le subrogaba cuando él no estaba. Que él podría no haber estado en la unidad, ya que también efectuaba patrullajes en la población. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 246 a fs. 247, ratificada a fs. 256, de causa rol 45.362, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro. Sostiene que, es efectivo lo que relata Rabanal Romero, en el sentido que el capitán Del Río llegaba hasta la comisaría a buscar detenidos. Recuerda que llegaba con suboficiales y soldados que eran parte de su grupo operativo. A la pregunta del Tribunal, señala que sí, el capitán Del Río iba periódicamente con su grupo hasta la Comisaría, cuando debían trasladar detenidos políticos desde la unidad de carabineros hasta la Fiscalía Militar de Temuco. Indica que se enteró que los detenidos debían ser entregados

al Fiscal Militar de apellido Podlech, porque éste era el encargado de los detenidos por motivos políticos. Sabían que el Fiscal era de apellido Podlech, ya que eso era lo que se comentaba en las unidades de carabineros. No recuerda que durante su permanencia como comisario de Lautaro, familiares de detenidos por motivos políticos o de otra índole hayan concurrido a su presencia a averiguar sobre sus familiares. Deja constancia que todos estos hechos quedaban consignados en el libro de guardia de la unidad, identificándose de forma completa el nombre de los aprehensores y del aprehendido, y lo mismo sucedía al egresar o trasladarse los detenidos de la comisaría. Respecto al caso de José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien según se le informa en este acto, habría sido detenido por personal de la comisaría de Lautaro y llevado hasta la mencionada unidad, el 15 de octubre de 1973, manifiesta que nada sabe al respecto, es primera vez que escucha su nombre.

En declaración judicial de fecha 18 de enero de 1996, rolante a **fs. 289 a fs. 290 (Tomo I)**, manifiesta que, en el mes de marzo de 1972, asumió funciones como comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, ostentando el grado de mayor, dicha función la realizó hasta el mes de noviembre de 1973, fecha en que fue trasladado a Temuco, con el grado de teniente coronel. Respecto de las personas por las cuales se le consulta, de nombres Samuel Huichailan Levian, José Domingo Llabulen Pilquinao, Ceferino Antonio, Miguel Eduardo, Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, José Bernardino Cuevas Cifuentes, Gervasio Héctor Hualqui Calviqueo, Juan Milla Montuy, Julio Manuel Paimé Lipin, José Andrés Meliquien Aguilera y Domingo Huenul Huaiquil, debe señalar que no le son conocidas, ni recuerda que hayan estado detenidas estas personas en la comisaría, pero debido al tiempo transcurrido, no lo recuerda. Destaca que, los detenidos que llegaban al cuartel por razones de índole político, eran chequeados por personal del ejército y de ser importante para ellos, eran trasladados a la Fiscalía Militar de Temuco. Los que no presentaban encargos, eran puestos de inmediato en libertad. Durante su permanencia en Lautaro, no supo de ejecuciones de personas sin previo juicio de la Fiscalía. Por el tiempo transcurrido y a su corta permanencia en la unidad, no recuerda todos los nombres de sus subalternos, pero entre ellos el capitán Marcial Vera, cabos Campos, Ponce, Jara, sargentos Ponce y Ferrier, entre otros. Agrega que, de todo detenido que ingresaba a la comisaría, era registrado en el libro de guardia. Cuando estos eran conducidos a la Fiscalía Militar, tanto el detenido como la persona que lo retiraba, debía dejar estampada su identificación y firma. Que esta documentación se encuentra incinerada de acuerdo al reglamento.

En declaración judicial de fecha 23 de septiembre de 1996, rolante a **fs. 350 (Tomo I)**, relata que, en relación a los hechos, puede manifestar que se desempeñó como mayor comisario de la Comisaría de Carabineros de Lautaro, desde el mes de marzo de 1972 hasta el mes de noviembre de 1973, fecha en la cual fue ascendido a teniente

coronel y trasladado a la Prefectura de Carabineros de Temuco como subprefecto. Durante el período que se desempeñó en esta comisaría, no recuerda que se hubiera detenido a algunas de las personas que se mencionan a fs. 2 vta., (de causa diversa) además, que por los años transcurridos no lo recuerda. Señala que también, su estadía en esta ciudad (Lautaro) como Comisario, fue de poco más de año y medio. Que en lo demás que se le interroga en este acto, ratifica sus declaraciones prestadas a funcionarios de Investigaciones que rolan a fs. 44 y 45 (que constan a fs. 248 y 249) y fs.98 y 99 (que consta a fs. 289 y 290) de estos autos.

En declaración judicial de fecha 28 de abril de 2015, rolante a **fs. 366 a fs. 367 (Tomo II)**, narra que, recuerda que el comandante del regimiento La Concepción, Hernán Ramírez, después del 11 de septiembre de 1973 le pidió un listado de personas que eran delincuentes habituales y cuatrerros. Además, le solicitó colaboración de parte de personal suyo para que los guiaran hacia los domicilios de estas personas, puesto que el ejército no conocía, como ellos, todos los lugares. Por este motivo, le encomendó esta labor al teniente Huerta, quien formó un grupo especial para estos fines. El grupo especial de carabineros al mando del teniente Huerta no era fijo, por cuanto este oficial tomaba a los carabineros que estuviesen disponibles para cumplir las órdenes que se daban desde el regimiento La Concepción. Sin embargo, los carabineros Ponce, Sanhueza, Campos y Sandoval, siempre estaban disponibles, por lo que participaban en varias ocasiones de estas salidas. En ese sentido, carabineros debía acudir a apoyar los allanamientos que el ejército efectuaba hacia el campo donde los terroristas tenían tomas de terrenos. Indica que los carabineros se movilizaban para estos efectos en el jeep de la comisaría que manejaba el sargento Ferrier. En cuanto a los oficiales que acudían a buscar y dejar detenidos a la comisaría, solo recuerda al capitán Del Río. Sin embargo él nunca interrogó a los detenidos en la comisaría. Afirma que, si bien es cierto que declaró a fs. 161 que el teniente Huerta y su grupo efectuaba detenciones de personas que posteriormente el capitán Del Río llevaba a Temuco, en este momento no podría indicar a qué tipo de detenidos se refirió, puesto que carabineros no efectuaba detenciones de carácter político. Sosteniendo que, las detenciones de carácter político las efectuaba el ejército. Que el capitán Del Río llevaba a estas personas a la Fiscalía Militar de Temuco o al regimiento La Concepción, para tomarles declaración seguramente. Que no existió en la comisaría de Lautaro durante su mando algún grupo que realizara labores de inteligencia o que tratara temas de índole político. El Tribunal le lee el parte policial que rola a fs. 2 de la causa 25.989 del Juzgado de Letras de Lautaro, que se tiene a la vista en esta declaración. El encartado señala que recuerda haber firmado un parte en que se daba cuenta del hallazgo de cadáveres flotando en el río Cautín, cerca de Lautaro, pero nunca supo las identidades de estas personas ni cómo fallecieron. El Tribunal le señala que dos de estas personas fueron identificadas como Manuel Lizama Cariqueo y José Ignacio Beltrán Meliqueo, ambos detenidos previamente por carabineros dependientes de la

comisaría de Lautaro. El acusado señala que si fueron detenidas por carabineros de Lautaro, con seguridad fueron llevadas a la comisaría, pero allí no fueron ejecutadas. Que también es seguro que posteriormente estas personas fueron dejadas en libertad o retiradas por personal militar a cargo del capitán Del Río o por algún subalterno de este. Dice que no está seguro de qué sucedió en realidad.

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 689 a fs. 690 (Tomo II)**, esgrime que, ingresó a carabineros de Chile el día 16 de marzo de 1946, desempeñándose en esta institución en diversas unidades del país, alcanzando el grado de teniente coronel, cumpliendo treinta años de servicios, retirándose en un día 31 de marzo de 1977. En relación a lo que se le pregunta en este acto, debe decir, que efectivamente trabajó en la comisaría de Lautaro, desde el mes de mayo de 1972 hasta el mes de diciembre de 1973, como comisario jefe de unidad, con el grado de mayor. En relación al día 11 de septiembre de 1973, dice que, en la unidad antes mencionada, estuvieron “retenidas” entre 30 y 40 personas, que eran traídas por personal de ejército y carabineros; sin embargo, los cargos contra estas personas las realizaba el “Servicio de Inteligencia del Ejército”, precisando que del regimiento La Concepción de Lautaro. El control de estos “Retenidos”, lo llevaba el personal de guardia de su unidad, en el libro de novedades del servicio de guardia, donde quedaban consignados los ingresos y salidas de personas, tanto en libertad, como cuando eran puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco. Agrega en este punto, que la confección del parte correspondiente, lo realizaba personal de inteligencia del ejército. Respecto de los días que siguieron al 11 de septiembre de aquel año, tanto el servicio de inteligencia del ejército, como personal de carabineros de su unidad, continuaron trayendo detenidos, pero en menor proporción, por lo general toda esta gente eran algunos dirigentes políticos locales, como también sindicales, los que casi siempre eran traídos por patrullas del ejército, los nombres de estos “Retenidos” se los llevaba personal del regimiento antes indicado, para chequearlos, según tenía entendido, entonces los que tenían cargos, según ellos, eran puestos a disposición de la Fiscalía y los otros en libertad. Respecto a la persona que se le nombra, Benedicto Poo Álvarez, no lo recuerda entre los detenidos de su unidad, debido, principalmente a la gran cantidad de documento que tenía que revisar y firmar, como jefe de unidad, como también a los años que han transcurrido, dice no le es fácil de recordarlo; pero agrega, que si esta persona estuvo en la comisaría de carabineros de Lautaro, tendría que haber quedado la constancia de su ingreso, como también de su egreso en el libro de novedades de la guardia. No teniendo mayores antecedentes que aportar.

B. DOCUMENTOS:

1. Informe del Servicio Médico Legal.
2. Ordinario Servicio de Registro Civil e Identificación.
3. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
4. Causa a la vista rol 25.989 Juzgado de Letras de Lautaro.
5. Informe Departamento de Control y Fronteras.
6. Ordinario Tesorería General de la República.
8. Informe del Museo de la Memoria y Derechos Humanos.
9. Informe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros.
10. Copia de Digesto de Jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos.
11. Copia de causa 40.943 Juzgado de Letras de Lautaro.
12. Copias simple de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Berrio Alto vs. Perú.
13. Copias simple de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid y otros vs. Chile.
14. Copias simple de sentencias dictada en rol 40.184 del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua.
15. Copias simple de sentencias dictada en rol 40.181 del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua.
16. Copia simple de sentencia dictada en rol 5.219-10 Excma. Corte Suprema.
17. Copias de causa 39.717 del ingreso de Juzgado de Letras de Lautaro.
18. Copia simple de libro Memoria de 2 sacerdote fusilados.
19. Ordinario del Servicio Médico Legal.
20. Informe pericial planimétrico.
21. Acta constitución del Tribunal.
22. Informe pericial fotográfico .
23. Informe Servicio Médico Legal.
24. Ordinario del Servicio de Registro Civil e Identificación.
25. Ordinario del Servicio Médico Legal.
26. Acta reunión con familiares.
27. Certificados defunciones.
28. Informe pericial Servicio Médico Forense.
29. Copia autorizada de oficio del Departamento Derechos Humanos de Carabineros.
30. Informe Servicio de Registro Civil e Identificación.
31. Ordenes de investigar.

B.1. A fs. 50 (Tomo I), informe del Servicio Médico Legal, que reseña no tener registro de protocolo de autopsia de José Ignacio Beltrán Meliqueo.

B.2. Ordinario del Servicio de Registro Civil e Identificación, que remite: **A fs. 53 (Tomo I)**, certificado de nacimiento de José Ignacio Beltrán Meliqueo; **A fs. 54 (Tomo I)**, certificado de defunción de José Ignacio Beltrán Meliqueo que

consigna defunción de fecha 15 de octubre de 1973. A **fs. 123 (Tomo I)**, partida de nacimiento de José Ignacio Beltrán Meliqueo. A **fs. 124 (Tomo I)**, extracto de filiación y antecedentes de José Ignacio Beltrán Meliqueo.

B.3. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que soslaya: A **fs. 56 (Tomo I)** “José Ignacio Beltrán Meliqueo, casado, 6 hijos, obrero agrícola, fue detenido el 15 de octubre de 1973, alrededor de las 15:00 horas, por carabineros, en la plaza de la ciudad de Lautaro. Ese día salió de su casa en dirección a una oficina de INDAP- Instituto de Desarrollo Agropecuario- a buscar unas semillas de trigo. Encontrándose en la plaza de la ciudad de Lautaro, frente al regimiento, fue aprehendido por los carabineros Domingo Campos Collao y Enrique Ferrier Valeze y conducido a la Comisaría de Lautaro. Testigo de la detención fue José Rafael Meliqueo Ancatén, quien concurrió a avisar de lo sucedido a la esposa del afectado, señora Celinda María Melihuén Mellado. Enterada de los hechos, la cónyuge concurrió al día siguiente a la comisaría de Carabineros de Lautaro, donde se le informó que sí había permanecido allí, pero luego de ser interrogado había quedado en libertad. Sin embargo, el afectado nunca más regresó a su casa ni se supo de su paradero. Es necesario destacar que el día 4 de octubre de 1973, su primo José Andrés Meliquén Aguilera y un amigo, Sergio Navarro Schifferli fueron detenidos en sus respectivos domicilios de la ciudad de Lautaro por los mismos carabineros que detuvieron al afectado. José A. Meliquén Aguilera y Sergio Navarro Schifferli, junto a José Ignacio Beltrán Meliqueo continúan desaparecidos”.

A **fs. 56 a fs. 59 (Tomo I)**, gestiones judiciales realizadas, entre ellas extracto de declaración ante el Tribunal de Celinda María Melihuén Mellado, de fecha 9 de noviembre de 1990, cónyuge de José Ignacio Beltrán Meliqueo, respecto a la detención de este sostiene: “por comentarios de vecinos, había llegado a su conocimiento que los aprehensores de su marido fueron los carabineros Domingo Campos Collao y Enrique Ferrier Valeze, y que el afectado habría sido muerto, habiendo sido presumiblemente enterrado en una fosa ubicada en el predio del señor Pedro Roussel”.

B.4. A **fs. 72 (Tomo I)**, oficio del Juzgado de Letras de Lautaro, acompaña carpeta de la causa rol 25.989 sobre muerte de dos desconocidos, tenida a la vista a fs. 73 (Tomo I) de autos.

B.5. A **fs. 86 (Tomo I)**, informe del Departamento de Control y Fronteras Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, que glosa que

revisado los archivos del departamento José Ignacio Beltrán Meliqueo no registra anotaciones de viajes.

B.6. A fs. 91 (Tomo I), Ordinario de la Tesorería General de la República, que informa que revisado el sistema computacional en relación a José Ignacio Beltrán Meliqueo, se verificó que este no se encuentra registrado como contribuyente, no tiene movimiento alguno a la fecha.

B.7. A fs. 93 (Tomo I), informe del Servicio de Impuestos Interno, no tiene información.

B.8. Informe del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, que contiene: **A fs. 97 a fs. 98 (Tomo I)**, certificado y partida de nacimiento de José Ignacio Beltrán Meliqueo. **A fs. 99 (Tomo I)**, certificado de defunción de José Ignacio Beltrán Meliqueo, consigna fecha defunción 15 de octubre de 1973, observaciones: inscripción ordenada por oficio del Juzgado de Letras de Lautaro causa rol N° 25.989, 8 de enero de 1994. **A fs. 100 a fs. 101 (Tomo I)**, certificado médico de defunción y estadística de mortalidad fetal tardía de José Ignacio Beltrán Meliqueo, explicita inscripción requerida de oficio Juzgado de Letras de Lautaro en causa rol N° 25.989 del 8 de enero de 1994. **A fs. 102 a fs. 120 (Tomo I)** datos de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sinopsis de los hechos, de gestiones judiciales realizadas.

B.9. A fs. 149 a fs. 152 (Tomo I), informe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile, que comunica a fs. 149 relación del personal de carabineros de Chile que figura de dotación de la Primera Comisaría Lautaro, entre los meses de marzo a diciembre de 1973, en el numeral 1 mayor Jorge Enrique Schweizer Gómez y en el numeral 23 cabo Domingo Antonio Campos Collao.

B.10. A fs. 207 a fs. 208 (Tomo I), copias simples de páginas 362 a 363 y de páginas 386 a 387 de Digesto de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

B.11. A fs. 210 a fs. 354 (Tomo I), copia certificada de lo obrado en causa rol N° 40.943 del Juzgado de Letras de Lautaro, por inhumación ilegal de 11 personas. Tenida a la vista en causa rol N° 45.363.

B.12. A fs. 369 a fs. 400 (Tomo II), copia simple de sentencia dicta en caso Berrios Alto vs. Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 14 de marzo de 2001.

B.13. A fs. 401 a fs. 477 (Tomo II), copia simple de sentencia dicta en caso Almonacid y otros vs. Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 26 de septiembre de 2006.

B.14. A fs. 478 a fs. 494 (Tomo II), copia simple de sentencia de segunda instancia en causa rol N°103-2011, de la ltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 14 de enero de 2013, que incide en rol N°40.184 del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria Manuel Moreno Vega.

B.15. A fs. 495 a fs. 504 (Tomo II), copia simple de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema rol N°1260-13, de fecha 29 de julio de 2013, que incide en causa rol N°40.181 del Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria Manuel Moreno Vega.

B.16. A fs. 505 a fs. 569 (Tomo II), copia simple de sentencia de reemplazo de la Excma. Corte Suprema rol N°5.219-10, de fecha 22 de julio de 2011.

B.17. A fs. 642 a fs. 803 (Tomo II), copia autorizada de las piezas pertinentes de causa rol N°39.717 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguidas por hallazgo de osamentas de Manuel Lizama Cariqueo y otros, iniciada el 1 de diciembre de 1993, que contiene: **A fs. 643 (Tomo II)**, oficio N°161 del Hospital de Lautaro, comunicación al Juzgado de ingreso de dos cadáveres de sexo masculino, encontrados en la ribera del río Cautín. **A fs. 644 (Tomo II)**, copia de Parte N°424 Carabineros Comisaría de Lautaro, de fecha 12 de noviembre de 1973, da cuenta de hallazgo de dos cadáveres de sexo masculinos encontrados flotando en el agua del río Cautín a la altura del criadero de cerdos "GANACOO". **A fs. 647 a fs. 648 (Tomo II)**, copia de Parte N°338 de la Inspectoría de Investigaciones de Lautaro, de fecha 3 de diciembre de 1973, por el hallazgo de dos cadáveres, informa que en conversación con doctor Fidel Marín Zavala, informó que uno de los cadáveres tenía cuatro impacto de bala de grueso calibre en la espalda y el otro un impacto también de grueso calibre, en el hemitorax izquierdo, y su muerte databa de más o menos un mes y dos semanas. **A fs. 650 y a fs. 651 (Tomo II)**, certificados de defunción de desconocidos. **A fs. 652 (Tomo II)**, informe médico legal de los dos cadáveres de sexo masculino identidad desconocida. **A fs. 652 a fs. 803 (Tomo II)**, declaraciones extrajudiciales y judiciales detalladas en el apartado "A) Declaraciones" según corresponde a cada uno de los deponentes.

B.18. A fs. 858 a fs. 889 (Tomo III), copia simple de páginas 119 a 180 del libro “Memoria de 2 Sacerdote Fusilados, de Miguel Jorda” que relata lo vivido por el sacerdote Wilfredo Alarcón, detenido el 13 de septiembre de 1973 por carabineros de Lautaro.

B.19. A fs. 893 a fs. 941 (Tomo III), ordinario N°9368 del Servicio Médico Legal de Santiago, que contiene protocolos N°75-94 respecto de osamentas incompleta remitidas desde el Juzgado de Letras de Lautaro en causa rol N°39.717. Protocolo 1219-95 que refiere a documentación respecto de cráneo enviado por el Segundo Juzgado de Temuco. Documentación respecto a la exhumación de Julio Hadad Riquelme. Documentación respecto de protocolo 21-06/82-07 osamentas levantadas desde el ex recinto militar “El Avellano”, en Lautaro.

B.20. A fs. 957 a fs. 962 (Tomo III), informe pericial planimétrico N°251-2016, de fecha 27 de julio de 2016, correspondiente a la ubicación del cementerio ubicado a 688 metros al norte de ruta que conduce desde Lautaro hacia Curacautín, localizando la sepultura de José Ignacio Beltrán Meliqueo. **A fs. 960 (Tomo III),** lámina 1 de 3, fotográfica aéreas que refiere a la localización de la Comunidad Manuel Levinao, distante a 21,8 kilómetros al Este de la ciudad de Lautaro, medido en sentido de ruta que conduce hacia Curacautín. **A fs. 961 (Tomo III),** lámina 2 de 3, fotografía aérea, se muestra la localización del cementerio en la Comunidad Manuel Levinao, a una distancia de 688 metros al norte de la ruta que conduce a la ciudad de Curacautín. **A fs. 962 (Tomo III),** lámina 3 de 3, fotografía aérea, se muestra la localización de la sepultura en cuestión al interior del cementerio de la Comunidad Manuel Levinao.

B.21. A fs. 973 a fs. 974 (Tomo III), Acta de constitución del Tribunal en el cementerio Mapuche Manuel Levinao de Lautaro, de fecha 2 de agosto de 2016, reseña que se ha constituido el Tribunal con la presencia de la unidad Especial de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal de Santiago, Constanza Gnecco Acuña, arqueóloga; Juan Francisco Reyes Sanchez, antropólogo; Andrés San Martín Truffi, periodista; de los testigos Vivian Quelepan Neculqueo; del Programa del Servicio de Salud Araucanía Sur, Karin Berkohoff Tonk y Karima Pinto Ruiz, asistente social del Programa de Continuación de la ley 20.045 del Ministerio del Interior; Carolina Contreras Rivera, abogada del Programa Continuación Ley 19.123 y los familiares de la víctima de autos Verónica Beltrán Melihuén, hija y Benjamín Contreras Beltrán, nieto. No existiendo en el cementerio un registro oficial que determine el lugar exacto donde se

encuentran inhumados los restos de José Ignacio Beltrán Meliqueo, el Tribunal insta a los familiares que se trasladen al lugar donde se encuentra tumba figurando el nombre de la víctima antes indicada, ordenándose la apertura de la misma, realizada por personal municipal. Inspeccionada la tumba se constata que existen osamentas, que corresponderían a la víctima de autos. Se procede a su exhumación, clasificando las osamentas y vestimentas. El Tribunal ordena trasladar las osamentas y resto de prendas al Servicio Médico Legal de Santiago para practicar las pericias tanatológicas y cualquier otra que amerite.

B.22. A fs. 975 a fs. 977 (Tomo III), informe pericial fotográfico N°301/27 de fecha 27 de julio de 2017, que remite CD con fotografías correspondiente a Inspección Ocular al cementerio Manuel Leinao, ubicado en la comuna de Lautaro, por los delitos de secuestro y homicidio calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, se concluye que la secuencia obtenida es el resultado fiel de lo que el Perito Fotográfico ha sido testigo al momento de la diligencia y por tanto constituye un documento visual concluyente en sí mismo.

B.23. A fs. 1.000 a fs. 1.014 (Tomo III), ordinario N°1105 del Servicio Médico Legal Metropolitano, Unidad Especial de Identificación Forense, se acompaña acta de exhumación en relación a la diligencia codificada como RM-UEIFT-T-33-16, Protocolo RM-UEIF-21-16, documento compuesto por 13 hojas, que concluye: “Punto 1: Se realizó la exhumación de los restos asociados a la víctima Sr. José Ignacio Beltrán Meliqueo, Protocolo RM-UEIF-21-16, inhumado en su sepultura familiar, ubicada en el cementerio Mapuche Manuel Leinao de la comunidad homónima, comuna de Lautaro, IX región de La Araucanía. Punto 2): Los restos óseos y la evidencia cultural asociada fueron trasladados en una caja plástica sellada, con su respectiva cadena de custodia, a dependencia de la UEIF del SML de Santiago donde permanecerá debidamente embalados y resguardados hasta la entrega de los mismos a sus familiares, una vez finalizadas las pericias pertinentes”.

B.24. A fs. 1.050 a fs. 1.051 (Tomo III), ordinario N°0403 del Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes familiares de José Ignacio Beltrán Meliqueo. Casado con Celinda María Melihuén Mellado; hijos: Verónica Yanet Beltrán Melihuén; Juan Patricio Beltrán Melihue (fallecido); José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén; Carlos Mariano Beltrán Melihuén y Luis Nicolás Beltrán Melihuén.

B.25. A fs. 1.091 a fs. 1.105 (Tomo III), ordinario N°5087 del Servicio Médico Legal Santiago, de fecha 19 de marzo de 2018, que concluye: “Los datos

genéticos evidenciados en el resto humano reseñado como RM-UEIF-21-16. M-001-1-RF-1 (fragmento de fémur derecho) incluido en este informe, **no son compatibles** con los datos genéticos de los familiares de la víctima con id. N°226 (sus hijos Carlos Mariano, José Ignacio Segundo, Luis Nicolás y Verónica Yanet Beltrán Melihuén, a su vez hijos de su esposa, Celinda María Melihuén Mellado). Por tanto, se puede descartar que la muestra correspondiente al protocolo RM-UEIF-21-16 incluida en el informe, pertenezca al grupo familiar”:

B.26. A fs. 1.109 (Tomo III), acta de reunión de fecha 25 de abril de 2018, el Tribunal se reúne con familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos pertenecientes a hechos conocidos y seguidos ante este Tribunal, a fin de informar estado de causas y lo pertinente al ordinario N°5087, del Servicio Médico Legal que rola a fs. 1091 y siguientes, señalando la necesidad de contar con muestras genéticas de ADN de los familiares.

B.27. Certificados de defunciones de personal de carabineros, que constan de **fs. 1.152**; de **fs. 1.158**; de **fs. 1.199**; de **fs. 1.292** a **fs. 1.315** y de **fs. 1.337** a **fs. 1.363**.

B.27.1 Certificado defunción de fs. 1.404 (Tomo IV) de Segundo Meliqueo Levinao.

B.27.2. Certificado de defunción de fs. 1.405 (Tomo IV) de José Rafael Meliqueo Ancatén.

B.28. A fs. 1.222 a fs. 1.280 (Tomo IV), informe Pericial Médico Forense RM-UEIF-21-16, de fecha 26 de septiembre de 2019, remitido por el Servicio Médico Legal Nacional, que en lo pertinente a fs. 1.230 soslaya que: “El perfil genético de las osamentas analizadas es excluyente con la identidad del Sr. José Ignacio Beltrán Meliqueo en relación a las muestras referidas obtenidas. No es posible establecer que las osamentas periciadas corresponden a uno de los dos cuerpos no identificados rescatados desde el río Cautín el 12 de noviembre de 1973”.

B.29. A fs. 1.285 a fs. 1.290 (Tomo IV) antecedentes traídos a la vista, copia autorizada del oficio N°249 del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, agregados en causa 45.373 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, sustanciada ante este Tribunal y que contiene en lo pertinente en cuaderno reservado: A **fs. 6 a fs. 48 (Tomo cuaderno reservado)**, hoja de vida de Jorge Enrique Schweizer Gómez. A **fs. 83 a fs. 128 (Tomo cuaderno reservado)**, hoja de vida de Domingo Antonio Campos Collao. Que a fs. 127 párrafo 6 de fecha

07 de mayo de 1977, condecoración: “El 27.04.77 se le concedió condecoración de 3ra. Clase por servicios distinguidos prestado el 11.09.73”.

B.30. Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación que contiene: A **fs. 1.407 a fs. 1.410** y de **fs. 1.587 a fs. 1.596 (Tomo IV)**, extracto de filiación y antecedentes de Jorge Enrique Schweizer Gómez. A **fs. 1.411 a fs. 1.415** y de **fs. 1.591 a fs. 1.596 (Tomo IV)**, extracto de filiación de Domingo Antonio Campos Collao.

B.31. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, las que se desglosan de la siguiente manera:

B.31.1. A **fs. 63 a fs. 70 (Tomo I)**, informe policial N° 767-202, declaraciones voluntarias de Celinda María Melihuén Mellado y de Domingo Antonio Campos Collao.

B.31.2. A **fs. 172 a fs. 183 (Tomo I)**, informe policial N° 6423/202, declaraciones voluntarias de Robinson Fernando Castillo Orellana, de Luis Gumercindo Urrea Lavín y de Carlos Mariano Beltrán Melihuén.

B.31.3. A **fs. 357 a fs. 363 (Tomo II)**, informe policial N° 1625/202, que contiene declaración voluntaria de Celinda María Melihuén Mellado.

B.31.4. A **fs. 577 a fs. 608 (Tomo II)**, informe policial N° 3691/202, declaraciones voluntarias de Hernán Patricio Juan Antonio Mardones Díaz, de Rodrigo Eduardo Grunert Lawrence, de Rafael García Ferlice, de Jorge Nibaldo Del Río Del Río, de Paicavi Lemolemo Painemal Morales y de Miguel Fernando Rubio Diocaretz.

B.31.5. A **fs. 810 a fs. 819 (Tomo III)**, informe policial N°6781/202 de fecha 20 de noviembre 2015, declaraciones de Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y de Lorenzo Antonio Fuentes Albornoz.

B.31.6. A **fs. 963 a fs. 968 (Tomo III)**, informe policial N°3372/202 de fecha 21 de junio de 2016, declaración de Luis Nicolás Beltrán Melihuén.

B.31.7. A **fs. 1.066 a fs. 1.073 (Tomo III)**, informe policial N°5206/202, de fecha 11 de octubre de 2017, declaraciones de José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y de Verónica Yanet Beltrán Melihuén

B.31.8. A **fs. 1.184 a fs. 1.194 (Tomo IV)**, informe policial N°01121/202, declaraciones de Víctor Matus Vásquez, de Rene Inocencio Rabanal Romero, de José Arturo Araneda Pulgar y de Hugo Gómez Cofre.

B.31.9. A fs. 1.330 a fs. 1.333 (Tomo IV), informe policial N°04493/202, contiene individualización de la dotación del personal que prestaba servicios en la Primera Comisaría de Lautaro, para septiembre a diciembre de 1973.

B.31.10. A fs. 1.376 a fs. 1.378 (Tomo IV), informe policial N°01358/202, declaración de Luis Gerardo Ibacache Salamanca.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública el día 11 de Septiembre de 1973 asumieron el mando Supremo de la Nación, reuniendo los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo en la Junta de Gobierno según se dejó establecido en el Bando N° 5, de igual fecha, así como en el Decreto Ley N° 1, posteriormente aclarado y complementado por los Decretos Leyes N° 128, 527 y 788, se dispuso entre otras medidas el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, ordenándose acuartelamiento en grado uno para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

B.- Que para el 11 de septiembre de 1973, a raíz de los sucesos acaecidos en el país, en todas las Comisarías se formó un grupo operativo especial denominado “comisión civil”, dedicado a labores de inteligencia que consistía en averiguar situaciones de búsqueda de información de determinadas personas quienes estaban consideradas en bandos militares, entre otras, es decir, eran labores que escapaban a los procedimientos comunes policiales (lo anterior consta en causa rol 113.987 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, rol 14-2013 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, rol 45.359 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, rol 45.362 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, rol 45.368 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, todas seguidas por este Tribunal y que son de público conocimiento).

C.- Que en el caso de la 1ª Comisaría de Carabineros de Lautaro se encontraba a cargo del Comisario de Carabineros el Mayor Jorge Enrique Schweizer Gómez (fallecido según consta a fs. 1.784 Tomo V) y le seguía en el mando el Capitán Marcial Edmundo Vera Ríos, (fallecido según consta a fs. 1.337 Tomo IV), el grupo especial estaba integrado y cargo del Teniente José Orlando Huerta Ávila, (fallecido según consta a fs. 1.292 Tomo IV); Enrique Ferrier Valeze, (fallecido según consta a fs. 1.300 Tomo IV); Mario Ponce Orellana, (fallecido

según consta a fs. 1.299 Tomo IV); Egidio Manuel Sandoval Umaña, (fallecido según consta a fs. 1.314 Tomo IV); Juvenal Santiago Sanhueza Sanhueza, (fallecido según consta a fs. 1.301 Tomo IV); Domingo Antonio Campos Collao, entre otros, este grupo especial realizaba patrullajes por la zona rural y urbana y la vez colaboraban con personal del Regimiento La Concepción de Lautaro, realizando patrullajes conjuntos por la zona rural dependiente de la jurisdicción de dicha unidad policial, procediendo a indicar los nombres y domicilios de personas que posteriormente fueron detenidas y llevadas a la comisaría para ser interrogadas en distintas dependencias. Las detenciones efectuadas por este grupo especial, eran realizadas sin exhibir orden judicial previa. (Lo anterior consta en causa rol 45.306-B “episodio Burgos, Hadad y Ponce” del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por este Tribunal y de público conocimiento, así también de las declaraciones de Víctor Matus Vásquez de fs. 166 a fs. 167 (Tomo I), de fs. 1.188 a fs. 1.189 (Tomo IV); de Marcial Edmundo Vera Ríos de fs. 351 (Tomo I), de Paicavi Lemolemo Painemal Morales, de fs. 574 a fs. 576 (Tomo II); de fs. 806 a fs. 807 (Tomo III); de Hernán Patricio Juan Antonio Mardones Díaz, de fs. 591 a fs. 593 (Tomo II); de Jorge Nibaldo Del Río Del Río, de fs. 601 a fs. 602 (Tomo II); de Robinson Fernando Castillo Orellana, de fs. 186 a fs. 187 (Tomo I); de Sergio Manuel Jara Sandoval, de fs. 299 (Tomo I); de Santiago Millangir Hueche, de fs. 301 (Tomo I); de José Arturo Araneda Pulgar, de fs. 1.191 a fs. 1.192 (Tomo IV); de Hugo Gómez Cofre, de fs. 1.193 a fs. 1.194 (Tomo IV).

D.- Que la dependencia de la 1ª Comisaría de Carabineros de Lautaro era usada para mantener a los detenidos por este grupo especial y por aquellos detenidos por personal del Regimiento La Concepción de Lautaro, los que posteriormente eran trasladados por este grupo especial con rumbo desconocido o eran retirados por personal del Regimiento La Concepción de Lautaro, según testimonios, entre otros, de: Celinda María Melihuén Mellado, de fs. 67 a fs. 68 (Tomo I); de fs. 361 a fs. 362 (Tomo II); de fs. 725 (Tomo II); de Víctor Matus Vásquez, de fs. 166 a fs. 167 (Tomo I); de fs. 1.188 a fs. 1.189 (Tomo IV) de José Domingo Segundo LLabulen Llaulen, de fs. 275 (Tomo I); de Francisca Llaulen Antilao, de fs. 276 (Tomo I); de Margarita del Carmen Cuevas Navarrete, de fs. 277 (Tomo I); de fs. 316 a fs. 317 (Tomo I); de Raquel Cuevas Navarrete, de fs. 278 (Tomo I); de fs. 347 a fs. 348 (Tomo I); Mercedes Huaiquilao Ancaten, de fs. 279 (Tomo I); de Martín Colicheo Melihuén, de fs. 280 (Tomo I); de fs. 318 (Tomo I); de Sergio Samuel Jara Sandoval, de fs. 299 (Tomo I); de fs. 693 (Tomo II); de Santiago Millangir Hueche, de fs. 301 a fs. 302 (Tomo I); de Hilda Teresa Morales

Jaque, de fs. 286 (Tomo I); de fs. 323 a fs. 324 (Tomo I); de fs. 668 a fs. 669 (Tomo II); de fs. 722 a fs. 723 (Tomo II); de Pedro Huenul Huaiquil, de fs. 287 (Tomo I); de fs. 325 a fs. 326 (Tomo I); de Luis Gabriel Grunewaltd Millapan, de fs. 288 (Tomo I); de Paicavi Lemolemo Painemal Morales, de fs. 574 a fs. 576 (Tomo II); de fs. 806 a fs. 807 (Tomo III); de Hernán Patricio Mardones Díaz de fs. 591 a fs. 593 (Tomo II); de Rafael García Ferlice, de fs. 597 a fs. 599 (Tomo II); de Mario Ponce Orellana, de fs. 692 (Tomo II); de Ida del Carmen Meliquen Quilodran de fs. 716 (Tomo II); de Carlos Antonio Navarro Schifferli, de fs. 720 (Tomo II); de Domingo Benedicto Meliquen Morales, de fs. 719 (Tomo II); de fs. 724 (Tomo II); de José Rafael Meliqueo Ancaten, de fs. 730 (Tomo II); de José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén, de fs. 1.077 (Tomo III); de Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, de fs. 1.153 a fs. 1.154 (Tomo III); de José Arturo Araneda Pulgar, de fs. 1.191 a fs. 1.192 (Tomo IV); Hugo Gómez Cofre, de fs. 1.193 a fs. 1.194 (Tomo IV); lugar en el que se encontraban detenidos indistintamente hombres y mujeres, de todos estos antecedentes de detenciones de personas que eran llevados a la comisaría de Lautaro, tenía conocimiento como se ha indicado el mando superior compuesto por Jorge Enrique Schweizer Gómez (fallecido según consta a fs. 1.784 (Tomo V); Marcial Edmundo Vera (fallecido según consta a fs. 1.337 (Tomo IV); y José Orlando Huerta Ávila, (fallecido según consta a fs. 1.292 Tomo IV).

E.- Que con fecha 15 de octubre de 1973, José Ignacio Beltrán Meliqueo, de 46 años de edad, casado, 6 hijos, obrero agrícola, sin militancia política, salió de su domicilio ubicado en la Comunidad Manuel Levinao, de la comuna de Lautaro, hacia la oficina del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la misma ciudad, a buscar unas semillas. Testigos de este hecho fue Segundo Meliqueo Levinao, (fallecido según consta a fs. 1.404 Tomo IV) tío de la víctima, quien avisó e informó a la familia a través de su hijo José Rafael Meliqueo Ancaten (fallecido según consta a fs. 1.405 Tomo IV) que en horas de la tarde de ese día, mientras se encontraba en la plaza de Armas de Lautaro, José Ignacio Beltrán Meliqueo fue detenido por los funcionarios de Carabineros Domingo Antonio Campos Collao y Enrique Ferrier Valeze, de la 1ª Comisaría de Carabineros de Lautaro, siendo trasladado hasta la unidad policial. Con esta información su cónyuge Celinda María Melihuén Mellado concurre al día siguiente hasta la citada unidad policial, donde se le informó que José Ignacio Beltrán Meliqueo, efectivamente estuvo detenido, pero luego habría sido dejado en libertad. Al tercer día y ante la insistencia, funcionarios de la Comisaría le recibieron algunos alimentos, indicándole **“esta es la última que va a comer su**

marido” (lo que consta en copia simple de informe de la Comisión de Nacional de Verdad y Reconciliación, de fs. 6 Tomo I). La viuda de José Ignacio Beltrán Meliqueo fue vista en la Comisaría de Carabineros de Lautaro preguntando por su cónyuge por el propio carabinero Domingo Antonio Campos Collao (según consta en declaración de fs. 83 a fs. 84 Tomo I). En conversación sostenida con posterioridad a los hechos por la cónyuge de la víctima con José Manuel Beni Uribe, (fallecido según consta a fs. 1.199 Tomo IV); carabinero perteneciente a la jurisdicción de la Comisaría de Lautaro para la época (según consta en declaración de Elizabeth Myriam Agurto Romero de fs. 1.217 Tomo IV), le dijo que su esposo estuvo detenido 6 días luego de lo cual había sido sacado por unos funcionarios de carabineros a los que no identificó, con rumbo desconocido, como consta en las propias declaraciones de Celinda María Melihuén Mellado, de fs. 67 a fs. 68 (Tomo I); de fs. 85 (Tomo I); de fs. 361 a fs. 362 (Tomo II); de fs. 725 (Tomo II); de fs. 945 (Tomo III); de Carlos Mariano Beltrán Melihuén, de fs. 181 a fs. 182 (Tomo I); de fs. 185 (Tomo I); de fs. 1.032 a fs. 1.033 (Tomo III).

F.- Que en el año 1993 a raíz de una investigación en causa rol 25.989 del Juzgado de Letras de Lautaro, por inhumación ilegal de dos cadáveres descubiertos en el patio 23 del cementerio de Lautaro, se identificó uno de los cuerpos allí encontrados como José Ignacio Beltrán Meliqueo, tras la identificación de la época, el cuerpo fue entregado a sus familiares ocasión en la que concurren al Juzgado de Letras de Lautaro, la viuda y dos de sus hijos, quienes se encontraron con el carabinero Domingo Antonio Campos Collao y al ser encarado por los familiares de la víctima este les dijo “que él había matado a su padre” (según consta en el testimonio de Carlos Mariano Beltrán Meliqueo de fs. 185 Tomo I), “que lo volvería a matar si fuera necesario” (según consta en declaración de Luis Nicolás Beltrán Meliqueo, de fs. 1.030 Tomo III), luego de lo cual velaron y sepultaron en el cementerio de la Comunidad Manuel Levinao a José Ignacio Beltrán Meliqueo (según se desprende de causa rol 39.717 expediente traído a la vistas cuyas copias fueron agregadas a estos autos de fs. 642 a fs. 803 (Tomo II).

G.- Que en el año 2017 el Tribunal ordenó la exhumación (a fs. 952 Tomo III), de los restos de la víctima. Constituyéndose en el cementerio de la Comunidad Manuel Levinao el 02 de agosto de 2017, con personal de la Unidad Especial de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal de Santiago, personal del Programa Prais del Servicio Salud de la Araucanía Sur, personal del Programa de Continuación Ley 19.123 del Ministerio del Interior y familiares de la víctima, a

objeto de realizar la exhumación de los restos de José Ignacio Beltrán Meliqueo, a fin de que le sean practicadas pericias tanatológicas según consta de fs. 973 a fs. 974 (Tomo III); cuyos resultados fueron entregados el 28 de marzo de 2018, que indican la incompatibilidad genética de ADN de los familiares de José Ignacio Beltrán Meliqueo y los restos exhumados, según consta a fs. 1.091 a fs. 1.105 (Tomo III). Por lo que desde el 15 de octubre de 1973 (fecha en que fue detenido por carabineros) se ignora hasta el día de hoy el paradero y que habría sucedido en la persona de José Ignacio Beltrán Meliqueo.

4°) Calificación. Que los hechos reseñados en esta etapa procesal son constitutivos del delito de **secuestro calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, previsto y sancionado en artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de **lesa humanidad**. Así se ha pronunciado este Tribunal, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

X. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

Y. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Z. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

LL.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena. Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad.** 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad"

Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En

términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michele Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

C. DECLARACIÓN INDAGATORIA

8°) Que prestando declaración indagatoria **DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO** (36 años a la época de los hechos), quien declaró a fs. 13 (Tomo I); de fs. 69 a fs. 70 (Tomo I); de fs. 83 a fs. 84 (Tomo I); de fs. 294 a fs. 295 (Tomo I); de fs. 340 a fs. 342 (Tomo I); de fs. 721 (Tomo II); de fs. 727 (Tomo II); de fs. 1.032 a fs. 1.033 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 19 de julio de 1996, rolante a **fs. 13 (Tomo I)**, otorgada ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, aduce que, respecto del hecho de haber sido sindicado por parientes y familiares de la víctima (Huenul Huaiquil Domingo), como uno de sus aprehensores, niega haber participado en la detención de la víctima, declarando que había sido detenida por el

suboficial de carabineros Renato Rodríguez Rodríguez, junto al personal de su destacamento, entre los cuales recuerda a Caifual y Torres y que a ellos deberían interrogar. Señala haber participado en las detenciones de José Ignacio Beltrán Meliqueo, José Domingo Llabulén Pilquinao, José Andrés Meliquén Aguilera y Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, todos ellos conocidos cuatrereros de la zona, según declaración. Manifiesta que él formaba parte de la sección abigeato, por tal razón detenía a esas personas y ha sido mencionado por muchos testigos como responsable de la desaparición de estas víctimas, pero eso se debe al hecho de que él era una persona conocida por las funciones que desempeñaba, pero nada sabe de la desaparición de ellos. Indica que un civil llamado Ceferino Antilao (señalado por los testigos y familiares de las víctimas como persona involucrada en desapariciones de personas), está dispuesto a declarar, ante la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. De quien entrega la dirección, a fin de que sea citado ante Corporación. Lamenta de su suerte en el proceso por secuestro y desaparición de Cheuquepán Levimilla y Llabulén Pilquinao, realizado en el Juzgado de Lautaro, en el cual fue condenado a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas.

En declaración extrajudicial de fecha 07 de febrero de 2013, rolante a **fs. 69 a fs. 70 (Tomo I)**, afirma que, con fecha 01 de agosto del año 1957 lo contrataron en Carabineros de Chile, realizando el curso de formación en la ciudad de Antofagasta, curso que duró alrededor de ocho meses, siendo su primera unidad de destinación la Primera Comisaría de Potrerillos, acogéndose al retiro en el mes de diciembre del año 1985, con el grado de sargento primero, mientras prestaba servicios en la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro. Recuerda que en el año 1964, estando realizando servicios en la ciudad de Arica, y llegó a prestar servicios en la unidad de Lautaro. Respecto a la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo, señala que a este lo conoce muy bien, ya que era un cuatrero muy conocido en el sector de Lautaro y varias veces fue detenido por los carabineros del Retén de Dollinco, cometiendo este tipo de delitos, y que además generalmente era mandado a buscar detenidos por el Juzgado de Lautaro, por sustracción o robo de animales. Con relación a la detención, desaparición y muerte de estas personas, debe señalar que no tiene ningún tipo de participación en esto, como se señala y se le acusa, ya que cuando se produce el pronunciamiento militar, el ejército de Chile se posicionó y comenzó a dar órdenes para que sean cumplidas por el resto de las instituciones armadas, de orden y seguridad. Aduce que recuerda claramente

cuando un día, llegó el comandante del regimiento La Concepción de Lautaro, siendo acompañado por el sargento de ejército Sergio Salazar y le pidieron al señor comisario de Lautaro que hiciera entrega de los nombres de todas las personas que se dedicaban al abigeato en Lautaro y sus alrededores, nómina en la cual se consignaba a José Ignacio Beltrán Meliqueo y una vez con ese listado, el sargento Salazar del ejército, comenzó a realizar las detenciones de esta gente. “Es más, a Beltrán Meliqueo le decían El Repollo cuando fue detenido, un vecino del sargento primero, Mario Ponce Orellana, de carabineros y que era del ejército de apellido Leviano si mal no recuerdo, le contó a Ponce que Salazar había detenido al Repollo, y lo habían llevado al regimiento La Concepción”.

En declaración judicial de fecha 14 de junio de 2013, rolante a **fs. 83 a fs. 84 (Tomo I)**, ratifica la declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile que rola fs. 69 a fs. 70. Asevera que, sus labores en la comisaría de Lautaro eran servicios ordinarios, turnos, patrullajes en la población, cumplimientos de órdenes judiciales. Recuerda como parte de la dotación de carabineros de Lautaro, en octubre de 1973, al suboficial Barrera, Isaías Muñoz, Juvenal Sanhueza, carabinero Sandoval, Mario Ponce, Herminio Ponce, Toribio Salazar, uno de apellido Novoa, Enrique Ferrier, Marcelino Arriagada, Isidoro Burgos, José Vergara, Manuel Meyer y otros que no recuerda. Aduce que conoció a José Ignacio Beltrán Meliqueo, ya que fue detenido por robo de animales en el retén Dollinco. Relata que, efectivamente los militares hacían patrullajes en la población y los detenidos de esos patrullajes eran ingresados a la comisaría de Lautaro. El procedimiento consistía en ingresarlos en el libro de guardia, pasaban a los calabozos y al día siguiente los detenidos eran retirados por los mismos militares. El destino de estos detenidos los desconoce. Sin embargo, puede agregar que siempre escuchaban balazos en las cercanías del fundo Miraflores de esta comuna. Estos balazos se atribuían a la “eliminación de personas en ese sector”. Los balazos era de armamento militar, se distinguían ráfagas de ametralladoras. Indica que no hubo patrullajes mixtos entre carabineros y personal de ejército. Que junto a Salazar, trabajaba un funcionario del ejército de apellido Zúñiga. Menciona que, Salazar era quien mandaba las patrullas militares. Respecto al caso de José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien según se le informa, habría estado detenido en la Comisaría de Carabineros de Lautaro y se le indica como aprehensor del mismo, en el mes de octubre de 1973, junto a Enrique Ferrier, manifiesta que es falso aquello y desconoce las razones del por qué se le involucra en el caso. Dice que, seguramente se le nombra porque es muy conocido

en Lautaro. Sin embargo, recuerda haber visto a la viuda de José Ignacio Beltrán Meliqueo consultando por él en la comisaría de Lautaro. En relación al carabinero de apellido Beni, puede indicar que efectivamente él se desempeñó en octubre de 1973 en la comisaría de Lautaro. Además trabajaron juntos en el retén Dollinco. Acota que declaró con anterioridad ante un Juez del Crimen de esta comuna, respecto a la causa que actualmente se investiga. También, en otra oportunidad, el Juez Alfaro, le condenó por un hecho ocurrido en la comuna de Perquenco, era por el secuestro de un menor de apellido Llulén.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 294 a fs. 295 (Tomo I)**, arguye que ingresó a carabineros de Chile el 01 de agosto de 1957, correspondiéndole desempeñarse en diferentes unidades del país y desde 1964 en la comisaría de Lautaro y sus destacamentos dependientes. Para los sucesos del 11 de septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo funciones en la unidad base de Lautaro, donde era comisario el mayor Jorge Schweizer Gómez. Dentro de las primera misiones que le correspondió participar junto a otros funcionarios, fue la de detener personas que habían participado en las tomas de terrenos y corridas de cercos. En especial, se trataba de mapuche que vivían en los alrededores de los fundos tomados, tales como fundo La Peña, ubicado en el sector camino Quinchol; fundo Miraflores, ubicado en el sector camino Brasil; fundo Huelqueco, ubicado en camino a Vilcún, entre otros. Respecto del hecho puntual por el cual se le consulta, puede decir que, sobre el desaparecimiento de Samuel Huichallan Llanquilen, puede señalar, que debido a que antes del pronunciamiento militar el deponente estuvo ocho años destinado en el retén Dollinco, razón por la cual conocía a la gran mayoría de los habitantes del sector jurisdiccional, en especial a los que se dedicaban al robo de animales. “Samuel Huichallan era cuatrero reconocido”. Los hermanos Ceferino Antonio, Miguel Eduardo y Oscar Yaufulem Mañil, también eran cuatros reconocidos, que vivían en el sector de Quiñaco Manzanares. Que las dos personas mencionadas en puntos anteriores, además de Juan Eleuterio Cheuquepan Levimilla y Julio Llulén Antilao, fueron detenidos por personal del retén Perquenco, el que estaba a cargo del suboficial, don Renato Rodríguez Rodríguez, el cual le conversó personalmente, diciéndole que le había ayudado a limpiar el sector. Debido a que el encartado trabajaba en la comisión contra el Abigeato. El acusado dice que, no participó en la detención de estas personas, ningún funcionario del retén Dollinco, ni de la comisaría de Lautaro, ni tampoco le correspondió indicarles el domicilio de estas personas. Señala que en el

proceso en el cual está sometido, la mayoría de las personas señalan que estos detenidos fueron llevados a Perquenco. Asevera que, le correspondió en algunas oportunidades, mostrar domicilios a militares, lo cual le era ordenado por sus jefes superiores. De estos puede indicar que lo pasaban a buscar a la comisaría en un vehículo militar en el que andaban siempre personas de civil, más el chofer, a su parecer, oficiales de los cuales no conoce sus identidades. La misión consistía en pasar por fuera de los domicilios de las personas que ellos requerían y seguir el camino. Recuerda que le correspondió mostrar las casas de José Domingo Llabulen Pilquinao, que vivía en ese tiempo en el sector Quiñaco Manzanares; la de Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, ubicada en el lugar Montaña Recortada, por calle Quinchol y José Andrés Meliquen Aguilera, que vivía en Reducción Levinao, por calle Quinchol. Una vez que estos domicilios fueron mostrados, lo regresaron a su unidad. Posteriormente se supo que los militares habían detenido a estas personas, y que estaban desaparecidas, además, en una oportunidad, se lo comunicó la señora de José Andrés Meliquen. Respecto de José Bernardino Cuevas Cifuentes, Juan Milla Montuy, Julio Manuel Paine Lipin y Domingo Huenul Huaiquil, manifiesta que no los conoce y no ha participado en sus detenciones. Que en ese tiempo la dotación de la comisaría de Lautaro era de aproximadamente 43 funcionarios, los que se desempeñaban en las labores policiales habituales. Cuando había algún operativo, en especial los que mencionó al principio de su declaración, premunidos de un decreto judicial, un oficial de alta graduación, disponía la formación de un piquete, para realizar tal cometido, lo que le podía corresponder a cualquiera que estuviere disponible. Hace presente que ha sido nombrado en numerosos procesos por detenidos desaparecidos, debido a que él integró la comisión contra el abigeato por un largo tiempo, en el cual tuvo varios resultados positivos con las personas que lo involucraron en estos delitos, habiendo constancia de estas detenciones en los procesos por abigeato que se encuentran en el Juzgado del Crimen de Lautaro. Reitera que no tuvo participación en los hechos que se le inculpa, siendo realmente el autor de estas detenciones el suboficial de carabineros Renato Rodríguez Rodríguez, junto a personal de su destacamento.

En declaración judicial de fecha 23 de abril de 1996, rolante a **fs. 340 a fs. 342 (Tomo I)**, cuenta que ingresó a carabineros de Chile en el mes de agosto de 1957. Prestó servicio en diversas unidades y desde el año 1964 prestó servicio en la unidad de Lautaro, siendo enviado al retén Dollinco y después de unos años, a la comisaría de esta ciudad (Lautaro). Que integró la comisión de abigeato por muchos

años, habiendo tenido resultados positivos. En cuanto al caso N°1 (fs. 9 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso y que corresponde a Samuel Huichillan LLanquilen o Samuel Huichaillan Levian), manifiesta que lo conoció por muchos años, como cuatrero e incluso en varias oportunidades se le detuvo por hurto, antes del pronunciamiento militar. Después supo que había sido detenido por carabineros de Perquenco, según lo manifestado por Ceferino Antilao, quien anduvo con el jefe del retén Perquenco, Renato Rodríguez y además, personal de ese destacamento. Él no ha detenido a Samuel Huichallan, después del pronunciamiento. En cuanto al caso N°3 (fs. 17 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), Estos Indígenas, Ceferino Antonio Yaufulen, Miguel Eduardo Yaufulen Mañil, y Oscar Romualdo Yafulen Mañil, los conoció cuando investigaban hurto y robos y muchas veces se les detuvo, pero antes del pronunciamiento Militar. Después, el procesado dice que, no los volvió a detener. Comunica que debe decir que, en una ocasión por el mismo jefe del retén de Perquenco, que habían sido detenidos por él y su personal, y llevados a Perquenco. Respecto del caso N°5 (fs. 26 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), en cuanto a Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, el acusado lo conocía, porque también era cuatrero reconocido en el sector Dollinco. Después de pronunciamiento, refiere el encartado que no lo detuvo, pero por orden de sus superiores, es decir, su mayor Schweizer, comisario de la comisaría de esta ciudad, debía mostrarle los domicilios de varios indígenas de malos antecedentes, es decir, cuatreritos a funcionarios militares del regimiento Andino de Lautaro, lo que el encartado hizo, ya que en vehículo militar pasaban por los lugares y ahí les indicaba sus domicilios y así lo hizo, mostrando el domicilio Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, pero en esa oportunidad no fue detenido, ni los acompañó posteriormente. Respecto al caso N° 8 (fs. 39 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), en cuanto a José Andrés Meliquen, apodado El "Ten" era un ladrón reconocido en el sector. También a éste por orden del comisario de ese tiempo, tuvo que mostrarles a una patrulla militar su domicilio, pero en su presencia no se detenía a nadie. En una oportunidad, llegó hasta la comisaría la esposa de Meliquen pidiéndole que le ayudara a indagar el nombre de los militares que habían detenido a su marido, el acusado pudo hacerlo, ya que no podía obtener datos de esta naturaleza y no se los iban a dar, así se lo manifestó a esta señora Hilda, que no sabe su apellido o no lo recuerda en este momento. Afirma que, ella mejor que nadie puede asegurar que cuando detuvieron a su esposo, él no participó. Respecto al Caso N° 9 (fs. 42 de la causa rol 40.943 a la vista en este proceso), en cuanto a Domingo Huenul Hauiquil, no lo conoció y por lo que se le interrogó, este pertenecía

al sector de carabineros de Perquenco y en el cual no podía el encartado actuar habiendo un retén que estaba facultado o autorizado para cualquier contingencia que se le presentara, en cuanto a denuncias y averiguaciones. En cuanto a los otros indígenas que se le nombran, José Domingo Llabulen, Juan Milla Montuy, Julio Paine Lipin y José Cuevas Cifuentes; al primero les mostró su domicilio a los funcionarios o a los militares, eso nada más, a los demás no recuerda haberlos detenido ni tampoco los conoció. En esos tiempos la dotación de carabineros era de solo 43 funcionarios aproximadamente y cuando había que cumplir misiones, se nombraba a cualquier funcionario y no solo a él, y no salían solos, sino varios al mando de un oficial. Hace presente que a Samuel Huichallan, los hermanos Yafulen Mañil, José Andrés Meliquen, el jefe del retén de Perquenco le dijo en una oportunidad, que les había ayudado a limpiar el sector de la comisaría, ya que estos indígenas ya nombrados fueron detenidos por él y su personal y llevados a Perquenco, al retén. Que los indígenas, todos lo nombran, porque lo conocían por haber estado destinado por muchos en el retén de Dollinco. Agrega que Juan Cheuquepán Levimilla y Julio Llaulén Antilao, mencionados en el proceso N° 37.869, fueron detenidos por su colega en retiro, Renato Rodríguez. Que él, ni el personal de carabineros de Dollinco y de la comisaría de carabineros de Lautaro, han participado en la detención de estos indígenas mencionados en esta causa. Recalca que posteriormente, ha sabido que estos hechos por los cuales se le inculpan, el autor de las detenciones fue el suboficial en retiro de carabineros, Renato Rodríguez Rodríguez. Insiste, que nada tiene que ver en estos hechos denunciados. No tiene participación en ello.

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 721 (Tomo II)**, arguye que es sargento primero en retiro. Que el año 1966 fue enviado a trabajar al retén Dollinco, conocido como Tres Esquinas, lugar donde desempeñó funciones hasta el año 1970, fecha en que fue trasladado al retén Quillen, el cual en la actualidad no existe, trabajando allí hasta el año 1972, fecha en que lo destinaron a la comisaría base de Lautaro, donde prestó servicios hasta el mes de diciembre de 1985, en que se acogió a retiro. Durante el tiempo en que trabajó en la base, se creó un grupo operativo para combatir los abigeatos, al cual perteneció. Respecto de las personas que se le consulta, debe señalar que a José Andrés Meliquen Aguilera, lo conoció, ya que era un cuatrero de la zona de Dollinco, a quien puso a disposición del Tribunal, en reiteradas oportunidades, durante su permanencia en el retén Dollinco. A José Ignacio Beltrán Meliqueo lo conoció físicamente y por oídas de que era un

delincuente que robaba junto a Meliqueo, pero a este sujeto no lo pasó nunca detenido, ya que no se le comprobó participación en delito alguno. A Sergio Navarro Schifferli, lo conoció solamente de oídas, ya que siempre les decían que sustraía animales en diferentes comunas, pero jamás lo vio, ni se pudo detener. Respecto de la detención y posterior desaparición de las tres personas antes indicadas, el acusado señala que él no ha participado en la detención de ninguno de ellos. Ni menos efectuó detención alguna, junto al sargento segundo (r), Enrique Ferrier Veleze, ya que este era un funcionario contratado como chofer y nunca podía hacer servicios ordinarios, como son los que efectuaba cualquier carabinero que no sea chofer, ya que estos solamente se limitaban a manejar y tienen prohibición de hacer detenciones. Al agricultor Domingo Cuevas, no le conoce, pero sí conoció a don Elías Cuevas Aldea, quien, el año 1973 tenía una camioneta Chevrolet C-10, color blanca, pero nunca el encartado salió con él, ni con su hijo Patricio, ya que no había motivos para ello. No recuerda la fecha en que las tres personas presuntamente detenidas por él desaparecieron del sector, ya que sin darse cuenta, nunca más se supo de que alguno de ellos estuviera participando en la sustracción de animales. Ignora que sucedió con ellos, pero de los que está seguro, es que no tiene nada que ver con sus desapariciones. Presume que las personas que lo inculpan de tal situación, son familiares adoloridos por el hecho de que él, más de una vez puso a disposición de la justicia a esas personas.

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 727 (Tomo II)**, expone que, efectivamente conoció a José Meliquén, José Beltrán y Sergio Navarro, ya que cuando él fue funcionario de carabineros, trabajó por un tiempo en el retén Dollinco o Tres Esquinas y como estas personas eran de ese sector y además que se dedicaban al cuatreroismo, por lo tanto eran muy nombrados. En cuanto a la querella presentada en su contra, informa que nunca los detuvo, debido a que el año 1973, trabajaba en el retén de Quillen, por lo que no participó en detención, ni de civil, ni con uniforme, razón por la cual nada podría aportar sobre las personas antes nombradas y que se dice que desaparecieron en el año 1973. Con respecto a Enrique Ferrier, este en esa fecha era chofer de la comisaría y no realizaba servicio de orden y seguridad, todo esto se lo declaró al funcionario de investigaciones que está a cargo de la investigación de este sumario. Insiste, que no tiene ninguna participación en los hechos investigados ya que nunca detuvo a los presuntos desaparecidos.

En diligencia de careo con Carlos Mariano Beltrán Melihuén y Luis Nicolás Beltrán Melihuén, de fecha 29 de marzo de 2017, rolante a **fs. 1.032 a fs. 1033 (Tomo III)**, reconoce a una de las personas que está sentada a su lado, es de apellido Beltrán, lo reconoce de cuando el encartado trabajaba en el retén Dollinco. Añade que éste era un niño. A la otra persona no la reconoce. Que además tiene una hijuela cerca de ellos, por lo que ellos lo conocen. El Tribunal le lee, en lo pertinente, sus declaraciones de fs. 83 a fs. 84, a lo que el acusado señala que ratifica aquellas declaraciones que en este acto le han sido leídas. Respecto a las declaraciones que se le han leído en este acto, puede señalar que son falsas, que él no estaba fuera del Servicio Médico Legal. Cree que lo sindicaron porque lo conocen, son vecinos y estos deben estar recibiendo algún beneficio.

9º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO**, quien fue sometido a proceso a **fs. 1.426 a fs. 1.470 (Tomo IV)**, con fecha 08 de julio de 2021. **Acusado** según el auto de **fs. 1.617 a fs. 1.659 (Tomo V)**, con fecha 14 de diciembre de 2021, como autor del delito de **Secuestro Calificado**, en su carácter de lesa humanidad en la persona de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, perpetrado a contar del día 15 de octubre de 1973, en la comuna de Lautaro. Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

A.1. VICTOR MATUS VÁSQUEZ

En declaración judicial de fecha 07 de noviembre de 2014, rolante a **fs. 166 a fs. 167 (Tomo I)**, esgrime que, para septiembre de 1973 se desempeñaba como cabo primero de carabineros de la Primera Comisaría de Lautaro. Que el comisario de Lautaro en 1973 era el mayor Jorge Schweizer Gómez. También estaban, el capitán Marcial Vera Ríos, subteniente de órdenes José Huerta Ávila. Asegura que hubo detenidos por motivos

políticos en Lautaro. Recordando a un profesor de apellido Gatica y a otro que le decían “Pichicho” Venegas. Refiere otros hechos y en lo pertinente dice que el teniente Huerta estaba a cargo de un grupo de carabineros especialmente formado para tratar los temas de detenidos políticos. Entre quienes se encontraba el sargento Ferrier, los cabos Domingo Campos Collao, Mario Ponce Orellana, Egidio Sandoval Umaña, Saturnino San Martín Bustos, y el suboficial Sanhueza. Afirma que el grupo señalado tenía una oficina dentro de la unidad donde supuestamente interrogaban a los detenidos. Que el ingreso les estaba prohibido a los demás carabineros. No tuvo conocimiento de que los detenidos fueran víctimas de apremios ilegítimos. Agrega que dichas personas solo permanecieron en los calabozos de la unidad. No hubo detenidos en el segundo piso de la unidad, ni en las caballerizas. Tampoco se apremió físicamente a los detenidos de la comisaría o a lo menos, no fue testigo de este hecho, ni se enteró de aquello. Que el nombre de José Ignacio Beltrán Meliqueo le es conocido, debido a que hubo muchas órdenes judiciales por abigeato que lo tenían a él en calidad de denunciado.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 298 (Tomo I)**, relata en lo pertinente que en relación con la inhumación ilegal de 11 personas, hecho denunciado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuya nómina se le da a conocer. Refiere que a las personas allí señaladas no las conoció. Replica donde se desempeñaba y que no no tuvo participación en la detención de personas y menos de las que se encuentran desaparecidas, todas residentes en la localidad. Hace presente que no tiene conocimiento de que alguno de sus camaradas, de la Primera Comisaría de Carabineros en ese entonces, haya participado en la detención de las personas mencionadas como detenidos desaparecidos. Que no tiene ninguna participación en la detención de los detenidos desaparecidos denunciados por la Comisión.

En declaración judicial de fecha 22 de abril de 1996, rolante a **fs. 327 a fs. 328 (Tomo I)**, ratifica sus declaraciones extrajudiciales que rolan de fs. 69 y de fs. 107 (que consta a fs. 298 de este proceso). Puntualiza en lo atinente a las personas que se le nombran Samuel Huichallan Llanquiles o Samuel Huichallan Levian, José Domingo Llabulen Pilquinao, Ceferino, Miguel Eduino, y Oscar Rumualdo Yafulen Mañil, José Bernardino Cuevas Cifuentes, Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, Juan Milla Montuy, Julio Manuel Paine Lipin, José Andrés Meliquen Aguilera y Domingo Nuenul Huaiquil, señala no conocerlos, debido a que vivían en sectores rurales y declara no tener participación en las detenciones de estas personas. Explica, que no tuvo ni ha tenido conocimiento del hecho de que algunos de sus colegas de trabajo en esos años, hayan tenido participación en la detención de las personas desaparecidas.

En declaración judicial de fecha 21 de enero de 1993, rolante a **fs. 676 (Tomo II)**, testifica que estuvo prestando sus servicios en la comisaría de Lautaro desde el año 1961. Que estuvo tanto en Lautaro como en Dollinco. En el año 1973 se encontraba en Lautaro. Se le pregunta por otro hecho. Afirma que en ese tiempo había detenidos por hurto, robos, ebriedad, y otros delitos que no sabría precisar.

En declaración extrajudicial de fecha 23 de enero de 2019, rolante a **fs. 1.188 a fs. 1.189 (Tomo IV)**, esgrime su carrera funcionaria y dotación en la Primera Comisaría de Lautaro, que luego del 11 de septiembre de 1973, les correspondió vigilancia de toque de queda junto a los militares, revisando ellos la población y los militares los patrullajes que realizaban eran de manera autónoma. Debido a esto ingresaron a la unidad una cantidad indeterminada de detenidos políticos y por toque de queda, los cuales permanecían un día y si es que eran solicitados por los militares, se les entregaban y los regresaban en horas de la noche. Sobre la detención de José Ignacio Beltrán Meliqueo; quien fuese detenido por personal de carabineros Lautaro en octubre de 1973, desconoce antecedentes. Que sólo le suena el apodo de "repollo", pero no lo vio en la unidad de Lautaro en la fecha que se indica, ni en forma posterior. En la unidad existía un grupo del cual puede decir que no era directamente el que veía casos políticos, pero sí estaba el grupo especial, el cual traía estos detenidos. Puntualiza, entre ellos estaba Ferrier, Ponce, Sandoval Umaña y el teniente Huerta, además en ocasiones Campos. Menciona que, respecto a su permanencia en Dollinco, estuvo desde el año 1963 al 1965, unidad en la cual como carabinero permanente se encontraba José Manuel Beni Uribe, fallecido.

A.2. ROBINSON FERNANDO CASTILLO ORELLANA

En declaración extrajudicial de fecha 20 de octubre de 2014, rolante a **fs. 177 a fs. 178 (Tomo I)**, aduce que, para el año 1973, no recuerda fecha exacta, prestó servicios en la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro. En lo pertinente que, en relación a personas detenidas por temas políticos, refiere que probablemente los hubo, pero nunca tuvo relación con ellos. Sobre los funcionarios Ferrier y Campos, los conoció e indica que seguramente pertenecieron al servicio de inteligencia de la comisaría, ya que siempre vestían de civil. Que Ferrier, también se desempeñaba como chofer del comisario jefe de unidad. También, vestía de civil, el funcionario Sandoval Umaña, quien pudo haber sido parte de la sección mencionada. Con relación a los hechos que guardan relación con la detención y posterior desaparición de José Ignacio Beltrán Meliqueo, no lo conoce.

En declaración judicial de fecha 20 de octubre de 2014, rolante a **fs. 186 a fs. 187 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial de fs. 177 a fs. 178. Aclarar que el comisario de Lautaro, en 1973 era el mayor Jorge Schweizer Gómez. Que no vio detenidos por motivos políticos. No supo que los hubiera en comisaría. Recuerda que llegaban militares a la unidad a conversar con el teniente Huerta. Siempre andaban

tres militares, entre los que recuerda al capitán García, capitán Del Río y otro, cuyo nombre no recuerda. Que ellos se reunían en la oficina del teniente y posteriormente salían. Desconoce qué temas trataban. Que había tres carabineros que trabajaban en el servicio de inteligencia Sandoval Umaña, Juvenal Sanhueza y otro más, cuyo nombre no recuerda. Estos se entendían con el teniente Huerta. Que el nombre de José Ignacio Beltrán Meliqueo le es conocido. Indica que no recuerda que haya estado detenido en la comisaría de Lautaro.

A.3. SANTIAGO MILLANGIR HUECHE

En declaración extrajudicial de fecha 17 de enero de 1996, rolante a **fs. 301 a fs. 302 (Tomo I)**, en lo atinente refiere que en el año 1973, hubo varias personas que se detuvieron por diversas razones, las que generalmente eran trasladadas a los recintos policiales de carabineros por personal del servicio de inteligencia del ejército. Recuerda perfectamente que en varias ocasiones, en circunstancias que se encontraba de guardia en dicha Comisaría (Lautaro), recepcionó detenidos en calidad de custodia, los cuales se ingresaban en los libros de guardia y al día siguiente, eran retirados y presumiblemente trasladados a otros lugares, por personal de inteligencia del ejército. Que el personal de carabineros que se encontraba de guardia, se le tenía prohibido conversar con toda persona que llegaba en calidad de detenido o custodia por parte del personal de carabineros o del ejército, incluso existían vigilantes especiales de carabineros en los calabozos para evitar el contacto verbal u otra eventualidad hacia las personas detenidas. Orden que fue dada por el señor gobernador de ese entonces, de quien no recuerda su nombre.

A.4. PAICAVI LEMOLEMO PAINEMAL MORALES

En declaración extrajudicial de fecha 05 de junio de 2015, rolante a **fs. 574 a fs. 576 (Tomo II)**, (cuya copia consta a fs. 603 a fs. 605 Tomo II), puntualiza que, ingresó a cumplir su servicio militar obligatorio el mes de abril de 1973, al Regimiento de Infantería Reforzado N°4 La Concepción de Lautaro, detallando otros hechos y en lo pertinente esgrime que, respecto a la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido en la ciudad de Lautaro el día 15 de octubre de 1973, por personal de carabineros de esa ciudad, debe señalar que ignora todo antecedente relacionado con su persona. Que, es efectivo que personal de carabineros de Lautaro llegaba a la unidad militar con detenidos, los cuales eran torturados al interior de esta. Que estas sesiones de torturas eran en el gimnasio, caballerizas y un sector llamado el Picadero. Dentro de los torturadores, recuerda a los clases Salazar y Juan Escobar, quien era de Imperial, lo conocía ya que habían estudiado juntos en la enseñanza básica en Imperial, de los oficiales que participaban en las sesiones de torturas, recuerda a Mondaca, Delirio, Silva Rebeco y García, principalmente, no recordando que los demás oficiales participaran en estos actos, describiendo los apremios a que eran sometidos los detenidos. Nombrando a quienes participaban de tales hechos. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante a **fs. 806 a fs. 807 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante a fs. 603 a fs. 605. Precisando otras circunstancias y en lo pertinente a los detenidos en la unidad militar y en lo contingente a estos hechos, indica que desconoce absolutamente que sucedió con la víctima de autos José Ignacio Beltrán Meliqueo y que habría sido detenido por carabineros de Lautaro. Sostiene que era frecuente y común ver a carabineros llevando detenidos al regimiento, lo que eran recibidos por el personal de inteligencia y por el capitán Del Río, que era el oficial que tomaba las decisiones respecto de estas materias. Asegura que no le cabe la menor duda que, tanto el coronel Ramírez, como el teniente coronel Mardones, sabían de la existencia de detenidos en el regimiento de los que sucedía con ellos, por cuanto ellos eran los oficiales al mando de la unidad. Expone otros hechos.

A.5. JORGE NIBALDO DEL RÍO DEL RÍO

En declaración extrajudicial de fecha 25 de mayo de 2015, rolante a **fs. 600 a fs. 602 (Tomo II)**, afirma que en cuanto a su estadía, grado y desempeño en el Regimiento N° 4 La Concepción de Lautaro, recordando con quienes trabajaba. Comenta los servicios que comenzaron a efectuarse después del 11 de septiembre, y las zonas que realizaron patrullajes. En relación a la permanencia de personas detenidas al interior de la unidad, aduce que efectivamente hubo detenidos por parte de personal militar, pero estos correspondían a infractores de toque de queda, quienes probablemente eran entregados a carabineros de Lautaro. En base a lo anterior, nunca le correspondió retirar detenidos desde la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, como tampoco supo que otros funcionarios hayan efectuado tal labor por orden superior. En cuanto a los funcionarios de carabineros, que en este acto se le mencionan sus apellidos como Huerta, Ferrier y Campos, recuerda a Huerta como teniente de carabineros, quien tenía una cercana relación con los oficiales jóvenes del regimiento y a Ferrier, como conductor de la comisaría. Añade que, sobre el funcionario de apellido Campos, no lo recuerda. Que en una oportunidad se enteró por comentarios que el teniente Huerta había manifestado que carabineros se encontraba efectuando una limpieza de cuatreros y delincuentes de la zona. Respecto a José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido en la ciudad de Lautaro el día 15 de octubre de 1973, por personal de carabineros de esa ciudad, ignora todo antecedente, haciendo presente que para esa fecha se encontraba en la zona de Carahue y Puerto Saavedra. Interrogado esgrime otras situaciones.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2015, rolante a **fs. 616 a fs. 619 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile que consta a fs. 600 a fs. 602 (Tomo II), puntualiza en lo pertinente que, el comentario que hizo el teniente Huerta era “vox populi”, casi todo el mundo en el regimiento, especialmente los oficiales jóvenes amigos de Huerta, sabían de esto. Entre los oficiales solteros recuerda a Olivares, Silva, Dods, Argomedo, Guerra,

Grunert, Muñoz, Linares, Bórquez, Valdebeito y Moncada. Acota que todos ellos compartían el casino de oficiales donde acudía frecuentemente el teniente Huerta. Además, los capitanes García y Lafourcade y el mayor Alonso eran solteros. Persiste que, nunca recibió ninguna instrucción para detener personas civiles o practicar allanamientos. Nunca fue sancionado por sus superiores mientras estuvo en el regimiento “La Concepción”. El Tribunal le lee la declaración de Jorge Enrique Schweizer Gómez, de fecha 28 de abril (2015). El deponente señala, que nunca fue a la Comisaría de Lautaro a buscar o dejar detenidos. Que no es cierto lo que el señor Schweizer indica. Que además, nunca llevó detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco. El Tribunal le lee las declaraciones prestadas por Víctor Matus Vásquez y Robinson Fernando Castillo Orellana, con fecha 24 de noviembre de 2014. El deponente señala que lo que se indica en estas declaraciones es falso. Señala que él no estuvo todo el tiempo en Lautaro ya que le correspondió salir en varias comisiones, al igual que el capitán García. El Tribunal le lee la declaración prestada por René Inocencio Rabanal Romero, el 24 de marzo de 2014, en autos. El deponente señala, que es falso lo que esta persona indica. Que jamás estuvo en la comisaría de carabineros para tratar temas políticos o para ir a buscar o dejar detenidos. El Tribunal le lee la declaración prestada por Hernán Patricio Juan Antonio Mardones Díaz, con fecha 19 de agosto (2015). El deponente señala que jamás estuvo a cargo de alguna unidad especial, por lo que el señor Mardones está equivocado. Alega que además, es imposible que el segundo comandante del regimiento no sepa lo que alguno de sus subordinados hacía. Se le pregunta por otros hechos. El Tribunal le lee la declaración prestada por Marcial Vera Ríos, con fecha 24 de julio de 2014. El deponente señala que es falso lo que señala esta persona. Precisa, que no hubo consejos de guerra en Lautaro. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración extrajudicial de Paicaví Lemolemo Painemal Morales, de fecha 05 de junio de 2015. El deponente señala que, lo que dice esta persona es falso. Porque en Lautaro no existían ni caballerizas ni picadero. Agrega que el gimnasio estaba pegado a la guardia. Refiere a otras situaciones. Respecto a José Ignacio Beltrán Meliqueo, Sergio del Carmen Navarro Schifferli, José Andrés Meliquén Aguilera, Manuel Lizama Cariqueo, Domingo Llabulén Pilquinao, Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo, Benedicto Poo Álvarez, Luis Armando Horn Roa, Julio Manuel Paine Lepín, Pedro Millalén Huwenchuñir, Julio Milla Montuy y José Bernardino Cuevas Cifuentes, y quienes habrían sido ejecutados o estarían desaparecidos con responsabilidad en estos hechos de personal militar del regimiento La Concepción de Lautaro y carabineros Lautaro, indica que no las conoció y no supo de sus detenciones o ejecuciones. Esgrime que las personas que iban al regimiento preguntando por alguien, eran detenidas en la guardia y en algunos casos la hacían pasar al segundo piso del edificio de la comandancia. Allí pueden haber sido atendidas por el ayudante del regimiento o por el segundo comandante. Que carabineros intenta deslindar su responsabilidad en estos hechos e intenta cargar la responsabilidad en el personal del

ejército. Que lo normal en el regimiento La Concepción era que se observara la orgánica y el procedimiento. Agrega que no tiene conocimiento que en algún momento, o por determinada situación, se haya desatendido estos protocolos, pero puede haber sido posible, que por orden verbal se hubiesen dado algunas instrucciones. Explica lo acontecido el 11 de septiembre de 1973.

A.6. JOSÉ ARTURO ARANEDA PULGAR

En declaración extrajudicial de fecha 23 de enero de 2019, rolante a **fs. 1.191 a fs. 1.192 (Tomo IV)**, soflama que en el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero, su labor principal, servicio de cuartelero, vigilante de calabozos y servicio a la población, en la Primera Comisaría de Lautaro, la cual se encontraba a cargo de mayor Jorge Schweizer Gómez y subcomisario de los servicios, capitán Marcial Vera Ríos, además, siendo unos 35 a 40 funcionarios la dotación del personal, entre ellos Marcelino Arriagada, Exequiel Barrera, Isidoro Burgos, Luis Muñoz Cid, Víctor Manuel Mella Vega, Domingo Campos, Mario Ponce, Enrique Ferrier Valece, y otros que no recuerda en estos momentos. Indica sus funciones luego del 11 de septiembre de 1973. Sobre la detención de José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien fuese detenido por personal de carabineros Lautaro en octubre de 1973, desconoce antecedentes. Asevera que en la unidad existía un grupo del cual puede decir que no era directamente el que veía casos políticos, pero sí estaba el grupo especial el cual veía a este tipo de detenidos, entre ellos estaba Ferrier, Ponce, Sandoval, Umaña, teniente Huerta, además del sargento Campos.

A.7. JOSÉ DOMINGO SEGUNDO LLABULEN LLAULEN

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante a **fs. 275 (Tomo I)**, manifiesta es hijo de José Domingo Llabulen Pilquinao, quien se encuentra desaparecido desde el día 11 de octubre de 1973. Que el día antes señalado, cuando se dirigía junto a su padre hacia el domicilio de ambos en Lautaro. En la micro de recorrido habitual, alrededor de las 19:00 horas, el microbús fue interceptado por un grupo aproximado de 20 carabineros en el sector del puente Cautín. Bajaron a todos los pasajeros y procedieron a detener solamente a su padre. Lo trasladaron hasta la comisaría de Lautaro, lugar al que concurrió. Después de aproximadamente media hora, llegó un camión con militares, los cuales procedieron a llevarse a su padre con destino desconocido. Desde esa fecha nunca más ha vuelto a ver a su padre. Que su padre pertenecía al Partido Comunista y era buscado desde el 11 de septiembre de ese año. Aparte de su filiación, ignora los motivos de su detención.

En declaración judicial de fecha 15 de abril de 1996, rolante a **fs. 313 (Tomo I)**, expone que ratifica en todas sus partes su declaración, formulada a Investigaciones, y es la misma que se le lee en este momento y que rola a fs.81 (constan a fs. 275 de este proceso).

A.8. FRANCISCA LLAULEN ANTINAO

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1995, rolante a **fs. 276 (Tomo I)**, expresa que convivió con José Domingo Llabulen Pilquinao por 17 años. Que el 11 de octubre de 1973 en horas de la mañana, José Domingo salió de la casa con destino a Lautaro, con el propósito de hacer algunas compras. Que ese mismo día, en horas de la tarde, llegó su hijo, José Domingo Llabulen Llaulen, quien le informó que momentos antes, cuando ambos se dirigían a la casa, carabineros de Lautaro procedió a bajarlo de la micro en la cual se movilizaban llevándose detenido. También le informó su hijo, que momentos después de estar en la comisaría fue retenido por una patrulla militar y se lo llevaron con destino desconocido. Relata que al día siguiente, personalmente concurrió a la comisaría y al regimiento de Lautaro, donde fue informada que no había llegado hasta esos recintos. Que en una oportunidad le informaron en carabineros, que efectivamente había estado detenido, pero que lo habían soltado. Ignora los motivos por los cuales detuvieron a su conviviente, ya que se trataba de una persona muy tranquila, ni siquiera pertenecía a algún partido político. Desde el día que salió de la casa, nunca más lo ha vuelto a ver y tampoco ha tenido noticia sobre la suerte que corrió y su actual destino.

En declaración judicial de fecha 15 de abril de 1996, rolante a **fs. 310 (Tomo I)**, manifiesta que ratifica en todas sus partes su declaración extrajudicial que rola a fs. 82 (que consta a fs. 276 de este proceso).

A.9. MARGARITA DEL CARMEN CUEVAS NAVARRETE

En declaración extrajudicial de fecha 08 de enero de 1996, rolante a **fs. 277 (Tomo I)**, expone que es hija de José Bernardino Cuevas Cifuentes y Clementina del Carmen Navarrete Ulloa. Que su padre, José Bernardino Cuevas Cifuentes, fue detenido por carabineros de Lautaro entre los días 09 y 11 de octubre de 1973, en momentos que se encontraba en la feria ganadera. Recuerda que en esa oportunidad su padre andaba acompañado de José Linco, quien fue la persona que concurrió a avisarles a su domicilio, el mismo día, alrededor de las 21:00 horas. Que concurrieron al día siguiente a consultar por él en la comisaría de carabineros y específicamente, a su hermana Raquel Cuevas, le manifestaron que su padre se encontraba allí detenido y que le llevaran una manta y comida. Que su hermana al volver al cuartel de carabineros, le informaron que su padre había sido dejado en libertad el día anterior en horas de la noche, al hacerle presente la primera versión, estos negaron terminalmente haber manifestado que se encontraba allí detenido y amenazaron con pegarle a su hermana si seguía preguntando por su padre. Que por versión del compadre de su padre, José Linco, les manifestó que los carabineros que detuvieron a su padre y a él, fueron Mario Ponce y otro de apellido Campos, que eran de dotación de la Comisaría de Carabineros de Lautaro. Aduce otros hechos.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 1996, rolante a **fs. 316 a fs. 317 (Tomo I)**, relata que en lo oportuno que cuando detuvieron a su padre ella tenía 15 años de edad. Reiterando sus dichos que entre los días 9 y 11 de octubre de 1973, respecto de la detención de su padre y que José Linco, fue la persona que concurrió a avisarles a su domicilio, el mismo día, alrededor de las 21:00 horas. Que al día siguiente concurrieron sus hermanas a consultar por su padre a la comisaría de Lautaro, donde les manifestaron que su padre se encontraba allí detenido y que le llevaran una manta y comida. Que al volver al cuartel de carabineros, le informaron que su padre había sido dejado en libertad el día anterior, en horas de la noche y al hacerle presente la primera versión, estos negaron determinadamente haber manifestado que se encontraba allí detenido y amenazaron con pegarles a sus hermanas si seguían preguntando por su padre. Que, por versión de José Linco, les manifestó que los carabineros que detuvieron a su padre fueron Mario Ponce y otro de apellido Campos y por otra persona, supo que el carabinero Ferrier también había participado. Comenta otros hechos. Ratifica su declaración de fs. 86 (que consta a fs. 277 de este proceso).

A.10. RAQUEL CUEVAS NAVARRETE

En declaración judicial de fecha 23 de agosto de 1996, rolante a **fs. 347 a fs. 348 (Tomo I)**, ratifica sus declaraciones que rolan a fs. 24 y 87 (las que constan fs. 278 Tomo I), asevera que en octubre de 1973, su padre vino a la feria de Lautaro, no regresando a casa, por lo cual hicieron las averiguaciones y su vecino, Juan Marín, les dijo que había sido detenido por carabineros de la comisaría de Lautaro en los alrededores de la plaza de esta ciudad. Que el mismo día concurrió su hermano Fernando Cuevas, dejándole unas frazadas, pero no fue necesario porque andaba con dos mantas. Al día siguiente, con su hermana Delia Cuevas, se dirigieron a la comisaría de carabineros a preguntar por su padre y se les informó que debían llevarle comida caliente. Al regresar a la comisaría se les dijo que no estaba su padre, que había sido dejado en libertad el día antes y que era posible que lo hubieran detenido los militares. Concurrieron al regimiento de Lautaro, consultando por su padre, allí se les dijo que a los que se tomaban detenidos por el toque de queda, al otro día obtenían su libertad. Hicieron muchas averiguaciones pero fue inútil encontrar el paradero de su padre José Bernardino Cueva Cifuentes.

A.11. MERCEDES HUAQUILAO ANCATEN

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante a **fs. 279 (Tomo I)**, explicita que es la esposa de Gervasio Héctor Hualqui Calviqueo, quien se encuentra desaparecido desde el día 26 de octubre de 1975. Respecto de los hechos que rodearon la desaparición de su esposo, el día antes señalado, alrededor de las 07:00 horas, llegó hasta su casa, una patrulla de carabineros compuesta por 6 u 8 funcionarios, pero ella solamente recuerda a los carabineros Campos y Sanhueza. Que golpearon la

puerta, al abrir, estos preguntaron por su esposo, al que en un principio negó, pero después les dijo que estaba, ya que Campos la estaba golpeando. Que de inmediato sacaron a su esposo, no lo dejaron vestirse. Al preguntar las razones de la detención, le dijeron que no se metiera y que se fuera a acostar. Al retirarse los carabineros, la dejaron encerrada en su casa y le prendieron fuego, sin que se percatara quien lo hizo. Que al darse cuenta que la casa se estaba incendiando, procedió a romper un muro de madera con totora, por el cual logró salir con sus hijos. De esta situación se percató don Martín Colicheo Melihuel, el cual estaba trabajando en un predio vecino y ayudó a sofocar el fuego. Días después de este hecho, concurrió a la comisaría de carabineros de Lautaro, a fin de solicitar antecedentes sobre su esposo, lo cual le fue negado, manifestándosele que no había llegado detenido a ese cuartel. Ante esto fue a denunciar estos hechos a la Intendencia de Temuco, pero no tuvo ningún resultado positivo sobre el paradero de Gervasio. Hace presente que en el mes de septiembre de ese mismo año, su esposo fue detenido por el sargento Sanhueza en la misma casa, pero en esa oportunidad salió en libertad a los dos días después.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 1996, rolante a **fs. 315 (Tomo I)**, ratifica en todas sus partes su declaración formulada a fs. 88 (que consta a fs. 279).

A.12. MARTIN COLICHEO MELIHUÉN

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 1996, rolante a **fs. 318 (Tomo I)**, ratifica en todas sus partes la declaración extrajudicial que rola fs. 28 (que consta a fs. 280 Tomo I), señala que el día 26 de octubre de 1974 o 1975, no recuerda bien el año, en circunstancias que se encontraba en el predio de Héctor Huaiquil Calviqueo, junto a su hermano Antonio Colicheo Melihuén, cortando leña, llegó un grupo de carabineros, entre los que reconoció a Antonio Campos, a los otros, por el tiempo transcurrido no recuerda sus nombres. Quienes se les acercaron y quisieron detenerlos, pero él le dijo que no estaban haciendo nada malo, por lo cual no podían hacerlo. Que estos se dirigieron a la casa de Héctor Huaiquil Calviqueo, que quedaba más o menos a 50 metros de donde estaban y encontraron a Huaiquil cortando leña. Que lo detuvieron y después le prendieron fuego a su casa, donde estaba su mujer, Mercedes Huaiquil Ancaten y sus hijos menores. Que esta tuvo que romper una tabla para poder salir del interior, no resultando lesionados, ni ella ni sus hijos. Desde esa fecha no ha vuelto a ver a Héctor Huaiquil Calviqueo y que ignora lo que le pasó.

A.13. LUISA MILLA MONTUY

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 1996, rolante a **fs. 320 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola a fs.31. Dice que es hermana de Juan Milla Montuy, quien fue detenido el 08 de noviembre de 1973, en Lautaro, donde había concurrido a comprar víveres para su casa, ya que era viudo y tenía 4 hijos. Sobre su detención, supo por dichos de Ramón Curaqueo, lugar Central Alhueco, que su hermano

había sido detenido por carabineros, sin mencionar nombre, en la población Guacolda, calle Barros Arana con Baquedano. No vino a preguntar por él en la comisaría de Lautaro por temor. Ignora lo que le pasó a su hermano Juan Milla Montuy, ya que desde esa fecha no ha vuelto a verlo.

A.14. FLOR MARÍA CANIU MILLA

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 1996, rolante a **fs. 321 a fs. 322 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola a fs. 31. Relata que su tío Juan Milla Montuy fue detenido en esta ciudad de Lautaro, en el mes de noviembre de 1973. Que ese día vino a Lautaro a comprar víveres ya que vivía con sus cuatro hijos menores y no regresó ni ha regresado desde esa fecha a su domicilio, por tanto no lo han visto más. Señala que por dichos de su vecino Ramón Curaqueo, supieron que éste había sido detenido en un almacén ubicado en calle Barros Arana de la población Guacolda, por carabineros de Lautaro, ignorando el motivo de su detención. Que fueron a carabineros a fin de averiguar el nombre de los funcionarios que detuvieron a su tío y también para saber de su paradero; allí lo negaron, y les dijeron a ella y a su madre que no insistieran porque las iban a dejar a ellas también detenidas. Indica que no volvieron más. Después, con el tiempo, estimó que su detención se debió a que su tío anduvo en unas corridas de cerco de fundos vecinos por política. Desde esa fecha no han vuelto a saber de su tío, si es que está vivo o muerto, ya que nunca regresó a su casa.

A.15. HILDA TERESA MORALES JAQUE

En declaración judicial de fecha 18 de abril de 1996, rolante a **fs. 323 a fs. 324 (Tomo I)**, ratifica en todas sus partes sus declaraciones de fs. 37 y 95 (que consta a fs. 286 en este proceso). Expresa que era la esposa de José Andrés Meliquen Aguilera, quien se encuentra desaparecido desde el 04 de octubre de 1993. Cuenta que el día 04 de octubre de 1973, llegaron hasta su domicilio, doce carabineros encapuchados con gorros pasamontañas, reconociendo entre ellos, a Domingo Campos y a Enrique Ferrier, a pesar de andar disfrazado y además de que sabía que ellos los conocían desde hace tiempo. Estos preguntaron por su marido y al contestarles que estaba tomando desayuno, le dijeron que su esposo saliera al patio. Su esposo no opuso resistencia. Que vio todo esto por una rendija de la casa. Puntualiza que dejó que los policías que llevaban a su esposo anduvieran un buen trecho, saliendo de su casa y escondiéndose tras las estacas y árboles, pudo ver que lo subían a una camioneta amarilla en la parte de la carrocera. También pudo ver a Sergio Navarro Shifferly. Que manejaba la camioneta Elías Cuevas Aldea, agricultor, vecino de su predio. Quien también vio esto fue doña Elisa Shifferly, madre de Sergio Navarro, fallecida. Posteriormente fue a Lautaro, a la comisaría sin obtener respuesta acerca del paradero de su marido. Continúa detallando sus indagaciones, evidenciando que desde esa fecha, octubre de 1973, desconoce el paradero de José Andrés Meliquen Aguilera.

En declaración extrajudicial rolante a **fs. 717 a fs. 718 (Tomo II)**, insiste en su relato y lo acontecido con su cónyuge de José Andrés Meliquen Aguilera. Quien fuera detenido el día 04 de octubre de 1973, dando detalle de la misma. Que los carabineros de nombre Domingo Campos y Enrique Ferrier, que trabajaban en el retén de Tres Esquinas, habían participado en la detención de su esposo y posterior desaparecimiento, ya que ellos siempre que se embriagaban lo contaban como anécdota, riéndose de lo sucedido. Perpetuando su relato sobre lo acontecido.

En declaración judicial de fecha 21 de septiembre de 1990, rolante a **fs. 722 a fs. 723 (Tomo II)**, insiste en su relato en cuanto a lo sucedido con su cónyuge José Andrés Meliquén Aguilera, quien fuera detenido el 4 de octubre de 1973, por un grupo de carabineros, llevándolo a la vía pública donde esperaba una camioneta amarilla, vehículo en el cual se llevaron a su marido al retén de carabineros de Tres Esquinas, al menos eso fue lo que en dicha oportunidad pensó. Que al día siguiente se hizo presente en carabineros de Lautaro y en la guardia le manifestaron que su esposo no estaba detenido. Que el 06 de octubre de ese año, en la comisaría le manifestaron que estuvo detenido, pero lo habían dejado en libertad, mostrándole el libro de guardia, donde según carabineros, su marido firmó y colocó su huella. Hace suposiciones donde podría estar los restos de su marido y añade que Daniel Mora, quién trabaja en el fundo de los señores Menke, en Perquenco, le conversó que el hijo de Elías Cuevas, llamado Patricio Cuevas, habían mandado a buscar a su esposo con carabineros para eliminar a las personas que robaban animales. Que no identificó a los carabineros que detuvieron a su marido, pero el jefe del retén Tres Esquinas en esa fecha era Domingo Campos.

A.16. PEDRO HUENUEL HUAQUIIL

En declaración judicial de fecha 18 de abril de 1996, rolante a **fs. 325 a fs. 326 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 287, y narra que el 15 de junio de 1973, su hermano salió de su casa en dirección a Lautaro a hacer unas compras y no regresó a su casa, que hasta la fecha no se sabe de su paradero. Por averiguaciones posteriores y preocupado porque su hermano Domingo Huenul Huaiquil, no regresara a su casa, un día se encontró con Luis Grunewaldt Millapán, quien le manifestó que su hermano había sido detenido en Lautaro en el restaurant “El Rayo”, ubicado frente al terminal de buses, por los carabineros Domingo Campos y Germán Romero, que lo habían subido al furgón policial que manejaba un policía de apellido Ferrier. Agrega que fue a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, informándosele allí que su hermano no se encontraba detenido. Indica que no hizo más averiguaciones por temor.

A.17. LUIS GABRIEL GRUNEWALTD MILLAPAN

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 1996, rolante a **fs. 288 (Tomo I)**, explicita que conoció a Domingo Huenul Huaiquil, como una persona del sector Santos López de Perquenco. Que en el año 1974, no recuerda fecha exacta, pero en

invierno, se encontraba en el terminal de buses de Lautaro, con el propósito de tomar locomoción para regresar a su casa, cuando repentinamente llegó un furgón de carabineros del cual se bajaron seis de ellos, se dirigieron al restaurante, al parecer de nombre “El Rayo”. Después de unos minutos, la policía sacó desde su interior a varias personas en estado de ebriedad, entre las cuales iba Domingo Huenul Huaiquil, los subieron al furgón y se los llevaron a su parecer, a la comisaría de Lautaro. Desde esa fecha, nunca más lo ha vuelto a ver. Expone que entre los carabineros que participaron en la detención, se encontraba el sargento Domingo Campos y Germán García Romero. Acota que ignora los motivos de su detención y posterior desaparición, pero supone que debe haber sido por su participación en la toma del Fundo Collanco.

A.18. IDA DEL CARMEN MELIQUEN QUILODRAN

En declaración judicial de fecha 14 agosto de 1990, rolante a **fs. 709 (Tomo II)**, ratifica íntegramente la denuncia (que consta de fs. 704 a fs. 708, sobre presunta desgracia de José Andrés Meliquen Aguilera, José Ignacio Beltrán Meliqueo, y de Sergio Navarro Schifferli).

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 716 (Tomo II)**, esgrime que es hermana de José Andrés Meliquen Aguilera, a quien según lo informado por su padre José Santos Meliquen Levinao (fallecido), el día 04 de octubre de 1973, carabineros del Retén Tres Esquinas, lo sacaron de su casa, alrededor de 07:30 horas, en una camioneta de propiedad de Segundo Cuevas, (fallecido), la cual era conducida por el mismo dueño, percatándose además de que los carabineros eran los cabos Enrique Ferrier y Domingo Campos. Todo esto se lo contó a la semana de ocurridos los hechos. Que en cuanto le contó, concurrieron junto a la esposa de su hermano, al Retén Tres Esquinas, como a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, a preguntar por su hermano y siempre la respuesta fue la misma, que no había sido detenido y que no había llegado. Que fue informada por su padre, que la camioneta con los detenidos no llegó al Retén Tres Esquinas, ya que él se quedó esperando que el vehículo regresara al Retén, cosa que nunca ocurrió. Indica respecto de la identificación de los carabineros, le dijo que los había visto a “cara limpia, sin pasamontañas ni encapuchados”, y podía reconocerlos, debido a que reiteradas oportunidades habían concurrido a su domicilio. También se enteró de que los mismos carabineros, el mismo día, se llevaron detenido, juntos a su hermano, a Sergio Navarro Schifferli, a quien sacaron de su casa, y el día 15 de octubre de 1973, en la Plaza de Lautaro, los mismos carabineros se llevaron detenidos a José Ignacio Beltrán Meliqueo. Que sus familiares se encuentran desaparecidos desde esa fecha, ignorando donde puedan estar, si es que están vivos o donde se encuentran enterrados, si están muertos.

A.19. DOMINGO BENEDICTO MELIQUEN MORALES

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 719 (Tomo II)**, aduce que es hijo de José Andrés Meliquen Aguilera, que el día 04 de octubre de 1973, alrededor de las

07:00 horas, salía de su domicilio, en dirección al colegio, cuando fue interceptado por varias personas de uniforme verde, encapuchados y uno de ellos le dijo que se devolviera a la casa y que no saliera de ella; debido al susto le hizo caso y cuando ingresó a su hogar, se percató que estaban sacando a su padre y desde esa fecha no le ha vuelto a ver, ni menos han tenido noticias suyas, pese a que su madre y familiares han hecho lo imposible por ubicarle; han concurrido a las comisarías de carabineros, hospitales, cárceles, Vicaría de la Solidaridad, pero en ninguna parte han tenido respuesta. Explica que con el tiempo, ha escuchado de boca de su madre, que había dos personas identificadas que participaron en la detención de su padre y estos serían los carabineros Enrique Ferrier y Domingo Campos, los cuales en reiteradas oportunidades habían concurrido su hogar, a dejar citaciones para su padre. Agrega que Ferrier y Campos siempre andaban juntos y eran muy temidos por la gente.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 724 (Tomo II)**, narra que es hijo de José Andrés Meliquen Aguilera, quien el día 04 de octubre de 1973 fue sacado de la casa por un grupo de carabineros y desde esa fecha nunca más se supo de él.

A.20. DANIEL MANUEL EDGARDO NAVARRO CAMPOS

En declaración judicial de fecha 16 de enero de 2014, rolante a **fs. 1.153 bis a fs. 1.154 (Tomo III)**, le parece que “el repollo” era familiar de Beltrán Meliqueo, pero no sabe su nombre. Que su padre, Carlos Navarro Schifferli, también fue perseguido por los carabineros. Por este motivo él se escondió en diferentes lugares para no ser encontrado. Que carabineros llegaba a su domicilio en diferentes horas sacándole al patio todas las veces, en muchas de las cuales fue golpeado, amarrado y amenazado de muerte para que diera el paradero de su padre. Que carabineros del retén Dollinco, ubicado en el sector Tres Esquinas, son los que deben saber el paradero de su tío Sergio Navarro Schifferli y de Andrés Meliquén Aguilera. Respecto de las identidades de los carabineros que participaron en la golpiza que le dieron a su tío Sergio Navarro Schifferli y a él, pudo reconocer a Campos, Ponce, Matus, Ferrier y al teniente Huerta. A estas personas las conocía desde antes porque hacían patrullajes por el sector rural. Piensa que a su padre y a su tío los persiguieron, porque en el tiempo de Allende, ellos se inscribieron en comités para recibir ayuda del Estado, pero nunca fueron políticos. Continúa narrando lo que le aconteció.

A.21. CARLOS ANTONIO NAVARRO SCHIFFERLI

En declaración extrajudicial, rolante a **fs. 720 (Tomo II)**, relata que el día 04 de octubre de 1973, él salió de su casa alrededor de las 06:00 horas, donde un vecino, regresando aproximadamente a las 08:00 horas, pudo ver a lo lejos, que cuatro sujetos desconocidos, vestidos con uniforme de carabineros, sacaban de su casa a su hermano Sergio, golpeándoles con las culatas de unos fusiles, llevándoselo en una camioneta

media amarilla que esperaba en el camino, lugar donde estaban los carabineros Enrique Ferrier y Domingo Campos, a quienes logró reconocer su madre, Elisa Schifferli Lussinger (fallecida), ya que ella les siguió hasta el vehículo y después le contó, diciéndole además que también lo buscaban a él, razón por la cual se escondió en los cerros. Que al día siguiente, su madre concurrió a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, donde le informaron que su hermano había estado detenido y que lo habían dejado en libertad, mostrándole un libro, donde aparecía una firma, la que le explicaron, era de él. Expone que, como no regresaba a la casa, su madre comenzó a buscarle por todas partes, sin obtener noticias sobre su paradero. Que, alrededor de una semana más tarde, se encontró con un vecino de nombre Antonio López Quilapan (fallecido), quien le dijo que había visto el día 04 de octubre, una camioneta media amarilla, que iba con varios carabineros, ingresando a un fundo de propiedad de Pedro Rosel, ubicado a unos 19 km., de Lautaro, a mano izquierda, la que tenía varios cadáveres en la parte posterior y que después de un rato había salido desocupada, presumiendo que uno de esos cadáveres era el de su hermano. Continúa relatando sus gestiones en torno a búsqueda de su hermano.

En declaración judicial de fecha 12 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 726 (Tomo II)**, manifiesta que efectivamente es hermano de Sergio Navarro Schifferli, quien el día 04 de octubre de 1973, en horas de la mañana fue sacado por carabineros desde su casa y hasta la fecha no ha regresado, por lo que se presume lo mataron, lo que no le consta, ya que ese día él no estaba en su casa y solo se enteró por dichos.

A.22. JOSÉ RAFAEL MELIQUEO ANCATEN

En declaración judicial de fecha 06 de diciembre de 1990, rolante a **fs. 730 (Tomo II)**, expone que es hijo de Segundo Meliqueo Levinao, quien, en el año 1973, la fecha exacta no la recuerda, pero fue después que los militares se hicieron cargo del gobierno, comento en la casa que él estaba junto a José Ignacio Beltrán, en la plaza de esta ciudad y que este último había sido detenido por carabineros, de ahí nunca más se supo de Beltrán, pero la verdad es que él no fue testigo de esos hechos, solo lo supo por versiones de su padre, quien en la actualidad está fallecido.

A.23. LUIS NICOLÁS BELTRÁN MELIHUÉN

En declaración extrajudicial de fecha 03 de junio de 2016, rolante a **fs. 967 a fs. 968 (Tomo III)**, expone que es hijo de José Beltrán Meliqueo, quien fuera detenido por personal de carabineros de Lautaro el día 15 de octubre de 1973, en la ciudad de Lautaro. Que para el año 1973, tenía la edad de siete años, por lo que no tiene muchos recuerdos sobre la información que había en ese momento respecto a la detención de su padre. Lo único que recuerda es que un día salió de mañana en dirección a la ciudad en busca de insumos agrícolas a la oficina de INDAP, no regresando nunca más a su domicilio. Con el paso del tiempo se rumoreaba mucho que su padre había sido detenido

por un carabinero de apellido Campos, junto a otro funcionario cuyo apellido no recuerda, no enterándose de mayores antecedentes en su momento. Que su madre fue la persona que siempre lo buscó, incluso en más de una oportunidad preguntó en carabineros de Lautaro, pero estos siempre le contestaron que su padre estaba detenido ahí, pero que no lo podía ver, incluso le decían que tenía que volver al día siguiente, encontrándose al regresar con la misma respuesta. Que, pasado veinte años de la desaparición de su padre el año 1993, si bien recuerda, llegaron hasta su domicilio personal de la Policía de Investigaciones de Lautaro, a informarles que en las afueras del cementerio general de la ciudad habían sido encontradas dos osamentas, las cuales habían sido trasladadas al Servicio Médico Legal de Santiago para periciarlas y que ahora estaban en el Juzgado de Lautaro, ya que se había confirmado que una de estas correspondía a su padre. Es así, que fue junto a su madre y su hermano mayor Carlos, hasta dependencias del Juzgado donde les exhibieron las osamentas de su padre, e incluso tenían los restos de sus vestimentas, las cuales fueron reconocidas por ellos. Hicieron los trámites para retirar su cuerpo, el cual posteriormente fue trasladado hasta su domicilio en el sector Los Aromos donde fue velado dos días antes de sepultarlo en el cementerio de la comunidad Manuel Levinao. Que, es efectivo que el día que retiraron los restos de su padre del Juzgado de Lautaro, a la salida de este recinto estaba el carabinero Domingo Campos, quien vestía de civil, ocasión en que su madre le preguntó si él había matado a su padre, respondiéndole de manera irónica y burlesca, que él lo había matado y que lo volvería a hacer si es que fuera necesario, retirándose del lugar, riéndose de ellos, sin importarle que toda la familia estuviera presente. Que el carabinero anteriormente aludido nunca allanó su domicilio antes de la desaparición de su padre, solo sabe que a él se le vincula con la desaparición de otras personas que residían en sectores rurales de Lautaro.

En declaración judicial de fecha 29 de marzo de 2019, rolante a **fs. 1.030 (Tomo III)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 968 a fs. 969 (que consta a fs. 967 a fs. 968). En lo pertinente sostiene que, cuando fueron al juzgado a retirar el cuerpo de su padre, en el año 1993, junto a su hermano Carlos Mariano y su madre, se encontraron con el carabinero Campos, momento en el que su madre, le preguntó sobre el destino de su padre, recibiendo como respuesta, que lo volvería a matar si fuera necesario.

En diligencia de careo entre Carlos Mariano Beltrán Melihuén, Luis Nicolás Beltrán Melihuén y Domingo Antonio Campos Collao, de fecha 29 de marzo de 2017, rolante a **fs. 1.032 a fs. 1033 (Tomo III)**, manifiesta que reconoce a la persona que está sentada a su lado, llamado Domingo Campos Collao, lo reconoce porque era carabinero en la ciudad de Lautaro. El Tribunal le lee, en lo pertinente su declaración de fs. 1.031 señala que ratifica aquellas declaraciones, se mantiene en sus dichos.

A.24. JOSÉ IGNACIO SEGUNDO BELTRÁN MELIHUÉN

En declaración extrajudicial de fecha 12 de septiembre de 2017, rolante a **fs. 1.071 a fs. 1.072 (Tomo III)**, funda que, es hijo de José Beltrán Meliqueo, señala que para el año 1973 tenía sobre 50 años de edad, se dedicaba a la agricultura y no pertenecía a ningún partido político. De la detención de su padre, ocurrida en el mes de septiembre de 1973, se enteró mientras se encontraba en la ciudad de Concepción, donde llevaba 6 años trabajando en la construcción. Recordando que recibió una carta de una de sus hermanas, en la cual se le informaba que su padre se encontraba detenido-desaparecido. Que viajó a Lautaro a interiorizarse de lo sucedido, obteniendo como única información, que su padre había sido detenido en la plaza de Lautaro por un grupo de carabineros, entre los que se encontraban los de apellidos Ponce, Ferrier y Domingo Campos, quienes eran muy conocidos en esta zona, porque anteriormente habían trabajado en el retén Dollinco. Que una de las acciones que realizó para buscar a su papá, fue concurrir a la comisaría de carabineros, policía de investigaciones y el regimiento de Lautaro, donde no se le dio ningún tipo de información respecto del paradero de su padre. Hace presente que nunca obtuvo antecedentes de terceras personas respecto a los hechos que rodearon la detención de su padre, siendo la única información que recibieron, con el paso del tiempo, que sus restos habrían sido encontrados al costado del cementerio de Lautaro, los cuales fueron periciados por el Servicio Médico Legal de Santiago, donde se confirmó su identidad.

En declaración judicial de fecha 19 de diciembre de 2017, rolante a **fs. 1.077 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial, de **fs. 1.071 a fs.1.072**. Comenta que a su padre lo tomaron detenido en la plaza de Lautaro. “Estaba curado. Y de ahí no salió más”. “Que esos eran los que tomaban a la gente para matarlos”. Señala que un carabinero conocido dijo que lo habían tenido, cinco días en la comisaría y después lo sacaron para matarlo. Acota que el carabinero se llamaba Manuel Beni (fallecido). Que no supo que haya habido un testigo de la detención de su padre. Que su “padre tenía 10 balazos en el cuerpo. El cuerpo estaba roto por todas partes”. Su hermano y su madre fueron quienes trabajaron buscando a su padre.

A.25. VERÓNICA YANET BELTRÁN MELIHUÉN

En declaración extrajudicial de fecha 12 de septiembre de 2017, rolante a **fs. 1.073 (Tomo III)**, acota que, es hija de José Beltrán Meliqueo, respecto a la detención y desaparición de su padre, no tiene muchos antecedentes, debido a que para la fecha de su detención tenía tan solo 3 años de edad. Cuenta, que la única información que tiene es la que le dio a conocer su madre, donde hacía referencia a que su padre fue detenido en el mes de octubre de 1973 en la ciudad de Lautaro.

En declaración judicial de fecha 19 de diciembre de 2017, rolante a **fs. 1.078 (Tomo III)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial de fs. 1.073.

A.26. CARLOS MARIANO BELTRÁN MELIHUÉN

En declaración extrajudicial de fecha 14 de octubre de 2014, rolante a **fs. 181 a fs. 182 (Tomo I)**, relata que es hijo de la víctima de los hechos investigados, quien fuera detenido el día 15 de octubre de 1973, en la ciudad de Lautaro, a manos de personal de carabineros de la misma ciudad. Que su padre, no tenía militancia política alguna, ni tampoco era partícipe en las tomas de terrenos del sector, solo se dedicaba a la agricultura en los terrenos de su propiedad. En cuanto a la detención de su padre, no fue testigo de esta, ya que dicha situación sucedió el día 15 de octubre de 1973 este concurrió a la ciudad de Lautaro a retirar unas semillas de INDAP. Según un primo de su padre, José Rafael Meliqueo Ancatén (fallecido). La detención de su padre fue en la plaza de Lautaro, a manos de los funcionarios de carabineros de Domingo Campos, Enrique Ferrier y Mario Ponce, quienes presuntamente se los llevaron a la comisaría de esa ciudad. Expone que él, junto a otras personas se enteró de dicha situación por boca del primo de su padre, a eso de las 18:00 horas del mismo día. Por esa razón, al día siguiente su madre concurrió a Lautaro a consultar por su padre, a la comisaría, pero no la atendieron, ya que la echaron del lugar al efectuar la consulta. Debido a lo anterior, su madre hizo consultas en Temuco, pero también le fue mal, él, por su parte, también efectuó consultas pero no tuvo resultados positivos. Que tiempo después su madre, en una conversación sostenida con don Manuel Bene, quien era carabinero del retén Dollinco y quien conocían porque vivía en ese mismo destacamento, le comentó que no buscara más a su padre, ya que él sabía que estaba muerto, dándole a conocer que había estado seis días detenido en Lautaro, desde donde lo habían sacado del cuartel, llevándoselo, con rumbo desconocido, no enterándose en detalle qué fue lo que sucedió, pero presumió que le habían dado muerte. Que lo anterior fue lo último que supieron, decidiendo su madre, terminar la búsqueda. Hace presente que, 20 años después del golpe de Estado, fue a su domicilio un carabinero de nombre Carlos Parra a informarles que habían encontrado restos óseos y vestimentas de dos personas en las afueras del cementerio Municipal de Lautaro y que probablemente se podría tratar de víctimas de la zona. Detalla que, por lo anterior, al día siguiente fueron a Lautaro, específicamente al Juzgado de dicha ciudad, donde reconocieron que las vestimentas eran de su padre, por lo cual les entregaron sus restos y posteriormente los sepultaron en el cementerio Manuel Levinao de esta comunidad. Que Domingo Campos conocía a su padre, ya que este carabinero tenía terrenos en las cercanías de este domicilio, pero no recuerda que haya tenido problemas con él.

En declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2014, rolante a **fs. 185 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial de fs. 181 a fs. 182. Agrega que, cuando fueron al Juzgado a retirar el cuerpo de su padre, el carabinero Campos estaba presente. Cuando salieron del Tribunal con su madre y su hermano Luis Nicolás

Beltrán Melihuén, encararon a Campos, quien se burló de ellos y le aseguró que él había matado a su padre.

En declaración judicial de fecha 29 de octubre de 1993, rolante a **fs. 744 (Tomo II)**, relata que reconoce los restos que quedan de su padre fallecido, José Ignacio Beltrán Meliqueo.

En diligencia de careo entre Carlos Mariano Beltrán Melihuén, Luis Nicolás Beltrán Melihuén y Domingo Antonio Campos Collao, de fecha 29 de marzo de 2017, rolante a **fs. 1.032 a fs. 1033 (Tomo III)**, reconoce que la persona que está sentada a su lado es Domingo Campos Collao, carabinero de Lautaro. Añade que ratifica su declaración de fs. 185. Que un testigo, primo de su padre, vio cuando el señor de apellido Campos fue a detener a su padre. Cuenta que él andaba junto a los carabineros Ponce y Ferrier.

A.27. CELINDA MARÍA MELIHUÉN MELLADO

En declaración extrajudicial de fecha 06 de febrero de 2013, rolante a **fs. 67 a 68 (Tomo I)**, narra que, a la edad de 18 años se casó con José Ignacio Beltrán Meliqueo, con quien tuvo 10 hijos. Que José Ignacio Beltrán Meliqueo, era un pequeño agricultor, quien el día 15 de octubre de 1973, siendo alrededor de las 08:00 horas, salió vestido con pantalón de tela color café, un chaqueta color plomo, una camisa color blanco, unos zapatos tipo bototos color amarillo, y un sombrero de huaso, de género color negro, con destino a la ciudad de Lautaro, con la finalidad de comprar semillas de trigo para sembrar. Que en horas de la tarde noche, un tío de José, de nombre Amaro, quien vivía en la misma comunidad, actualmente fallecido, llegó a la casa de la deponente y le contó que su esposo había sido detenido por carabineros de Lautaro, cosa que él había visto y que había sido un carabinero de nombre Domingo Campos, otro de apellido Ponce y otro de apellido Berrios, señalándole que al día siguiente iría a ver qué había pasado con él, ya que era muy tarde. Comenta, que al día siguiente, en horas de la mañana se apersonó en la Comisaría de carabineros de Lautaro, donde al consultar por su esposo, le respondieron que lo habían soltado el mismo día que lo habían detenido, por lo que la deponente regresó a su casa y al ver que no había llegado concurrió nuevamente a carabineros de Lautaro, donde se le informa que a José lo habían soltado, por lo que comenzó a buscarlo entre amigos, familiares, hospitales, cárcel de Temuco, sin saber nada de él, pensando que se había ido de la casa. Después de haber pasado unos 20 años fue citada al Juzgado de Lautaro, donde le informan que su esposo, o los restos de su esposo, habían sido encontrados en una fosa común en el cementerio de Lautaro; donde además le comentaron que José Ignacio estuvo seis días detenido en carabineros de Lautaro y que ahí le habían dado muerte.

En declaración judicial de fecha 14 de junio de 2013, rolante a **fs. 85 (Tomo I)**, ratifica la declaración prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile que rola a fs.

67 y 68. Puntualiza que, quien sabe lo que paso con su esposo es el carabinero Campos Collao, que éste fue quien participó en su detención. Afirma que cuando concurrió hasta el retén de carabineros a preguntar por su esposo, no estaba Campos Collao, la atendió otro carabinero, quien a empujones la sacó de la unidad y le dijo que su marido ya había sido liberado. Aduce que los restos de su esposo actualmente descansan en el cementerio de la comunidad Indígena donde ella reside. Continúa, señalando que tiempo después, se encontró con un sargento de carabineros de Dollinco, de apellido "Beni", quien le contó que a su esposo lo habían tenido detenido por 6 días en el retén de Perquenco, pero que estaba muerto, que no lo buscara más.

En declaración extrajudicial de fecha 19 de marzo de 2015, rolante a **fs. 361 a fs. 362 (Tomo II)**, replica que es la cónyuge de José Ignacio Beltrán Meliqueo de cuya relación nacieron 11 hijos de los cuales en la actualidad viven cuatro, cuyos nombres son Carlos, Luis, José y Verónica. Reitera que, su marido, se dedicaba a la agricultura en los terrenos de su propiedad. Que José no era simpatizante ni militante de ningún partido político, tampoco fue partícipe de las tomas de terrenos que algunos lugareños efectuaban en esa época. Que la detención de José, fue a manos de carabineros de la Comisaría de Lautaro, en circunstancias que el día 15 de octubre de 1973, mientras había concurrido hasta la ciudad de Lautaro a retirar unas semillas en INDAP, fue detenido en la plaza frente al Regimiento La Concepción, por los carabineros Domingo Campos, Enrique Ferrier y Mario Ponce, a quienes ubicaba muy bien, principalmente a Domingo Campos, quien residía en las cercanías del domicilio de la deponente, en el campo. Añade que, lo anterior lo supo por boca de José Rafael Meliqueo Ancatén, quien era primo de su marido y fue testigo de su detención. Recuerda que, José le comentó dicha situación en la tarde de ese mismo día, cerca de las 18:00 horas. Al día siguiente viajó en micro hacia Lautaro, y concurrió a la comisaría de carabineros, siendo atendida por un carabinero, quien, tras ser consultado por su marido, se limitó a contestar que aquel ya no estaba ahí y a empujones la obligó a retirarse del lugar. Que dada la situación, viajó a Temuco y consultó en carabineros y cárcel Pública, pero en dichos lugares no tenían registro de su permanencia. Recuerda que estuvo cerca de un año buscándolo, pero nunca tuvo noticias sobre su paradero. Hace presente que, en una oportunidad sostuvo una conversación con Manuel Benni, quien era carabinero y este le advirtió, en dicha oportunidad, que no buscara más a su marido porque se encontraba muerto, comentándole, incluso que él sabía que había permanecido en la Comisaría de Lautaro cerca de 6 días, siendo sacado de esta por unos funcionario cuyas identidades no le dio a conocer. Que, después de unos años, cree que el año 1992, se presentó en su domicilio un carabinero de nombre Carlos Parra, quien le dejó una citación para el Juzgado de Lautaro, concurrió para la fecha de la cita y el Juez que la atendió le indicó que habían encontrado a su marido y con ello, procedió a hacerle entrega de una urna con sus ropas, las cuales reconoció.

Luego de la entrega, procedieron a darle sepultura en el cementerio de la comunidad Manuel Levinao.

En declaración judicial de fecha 09 de noviembre de 1990, rolante a **fs. 725 (Tomo II)**, atestigua que efectivamente está casada legalmente con José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien el día lunes 15 de octubre de 1973 salió de la casa con destino a buscar una semilla de trigo a la oficina de INDAP, y desde esa fecha que no ha regresado a casa. Añade que según comentarios de terceras personas su esposo habría sido detenido por carabineros de Lautaro. Al día siguiente concurrió a dicha ciudad y en la comisaría se le informó que había estado allí, pero luego de ser interrogado habría quedado en libertad. Que, nunca más regresó a la casa. Según comentarios de terceras personas, su esposo fue detenido por los funcionarios de carabineros de esa fecha, Domingo Campos y Enrique Ferrier, lo que no le consta, debido a que ella en esa fecha se encontraba en su casa.

En declaración judicial de fecha 08 de noviembre de 1993, rolante a **fs. 745 (Tomo II)**, expone que el día 29 de octubre de 1993, concurrió al Tribunal junto a su hijo, Mariano Beltrán, con la finalidad de reconocer los restos que quedaban de su esposo José Ignacio Beltrán Meliqueo; agrega que efectivamente correspondían a él, ya que los zapatos y restos de ropas que se le exhibieron, eran las que él usaba el día que salió de la casa en el año 1973, motivo por el cual, su hijo declaró en el Juzgado, retirando los formularios correspondientes para su sepultación. Cuenta, que se encontraba muy afectada.

En declaración judicial de fecha 21 de junio de 2016, rolante a **fs. 945 (Tomo III)**, insiste que su marido desapareció el día 15 de octubre de 1973. Respecto a los responsables de su muerte, tiene conocimiento de que Ferrier, Ponce y Domingo Campos fueron los aprehensores. El cuerpo de su esposo le fue entregado, sin embargo no recuerda el año. Lo sepultaron en el cementerio Manuel Levinao de la comuna de Lautaro, lugar al cual se dirige continuamente.

A.28. JORGE ENRIQUE SCHWEIZER GÓMEZ

En declaración judicial de fecha 28 de abril de 2015, rolante a **fs. 366 a fs. 367 (Tomo II)**, narra que, recuerda que el comandante del regimiento La Concepción, Hernán Ramírez, después del 11 de septiembre de 1973 le pidió un listado de personas que eran delincuentes habituales y cuatrereros. Además, le solicitó colaboración de parte de personal suyo para que los guiaran hacia los domicilios de estas personas, puesto que el ejército no conocía, como ellos, todos los lugares. Por este motivo, le encomendó esta labor al teniente Huerta, quien formó un grupo especial para estos fines. El grupo especial de carabineros al mando del teniente Huerta no era fijo, por cuanto este oficial tomaba a los carabineros que estuviesen disponibles para cumplir las órdenes que se daban desde

el regimiento La Concepción. Sin embargo, los carabineros Ponce, Sanhueza, Campos y Sandoval, siempre estaban disponibles, por lo que participaban en varias ocasiones de estas salidas. En ese sentido, carabineros debía acudir a apoyar los allanamientos que el ejército efectuaba hacia el campo donde los terroristas tenían tomas de terrenos. Indica que los carabineros se movilizaban para estos efectos en el jeep de la comisaría que manejaba el sargento Ferrier. En cuanto a los oficiales que acudían a buscar y dejar detenidos a la comisaría, solo recuerda al capitán Del Río. Sin embargo él nunca interrogó a los detenidos en la comisaría. Afirma que, si bien es cierto que declaró a fs. 161 que el teniente Huerta y su grupo efectuaba detenciones de personas que posteriormente el capitán Del Río llevaba a Temuco, en este momento no podría indicar a qué tipo de detenidos se refirió, puesto que carabineros no efectuaba detenciones de carácter político. Sosteniendo que, las detenciones de carácter político las efectuaba el ejército. Que el capitán Del Río llevaba a estas personas a la Fiscalía Militar de Temuco o al regimiento La Concepción, para tomarles declaración seguramente. Que no existió en la comisaría de Lautaro durante su mando algún grupo que realizara labores de inteligencia o que tratara temas de índole político. El Tribunal le lee el parte policial que rola a fs. 2 de la causa 25.989 del Juzgado de Letras de Lautaro, que se tiene a la vista en esta declaración. El encartado señala que recuerda haber firmado un parte en que se daba cuenta del hallazgo de cadáveres flotando en el río Cautín, cerca de Lautaro, pero nunca supo las identidades de estas personas ni cómo fallecieron. El Tribunal le señala que dos de estas personas fueron identificadas como Manuel Lizama Cariqueo y José Ignacio Beltrán Meliqueo, ambos detenidos previamente por carabineros dependientes de la comisaría de Lautaro. El acusado señala que si fueron detenidas por carabineros de Lautaro, con seguridad fueron llevadas a la comisaría, pero allí no fueron ejecutadas. Que también es seguro que posteriormente estas personas fueron dejadas en libertad o retiradas por personal militar a cargo del capitán Del Río o por algún subalterno de este. Dice que no está seguro de qué sucedió en realidad.

B. DOCUMENTOS

B.1. Ordinario del Servicio de Registro Civil e Identificación, que remite: A **fs. 53 (Tomo I)**, certificado de nacimiento de José Ignacio Beltrán Meliqueo. A **fs. 124 (Tomo I)**, extracto de filiación y antecedentes de José Ignacio Beltrán Meliqueo.

B.2. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que soslaya: A **fs. 56 (Tomo I)** “José Ignacio Beltrán Meliqueo, casado, 6 hijos, obrero agrícola, fue detenido el 15 de octubre de 1973, alrededor de las 15:00 horas, por carabineros, en la plaza de la ciudad de Lautaro. Ese día salió de su casa en dirección a una oficina de INDAP- Instituto de Desarrollo Agropecuario- a buscar unas semillas de trigo. Encontrándose en la plaza de la ciudad de Lautaro, frente al regimiento,

fue aprehendido por los carabineros Domingo Campos Collao y Enrique Ferrier Valeze y conducido a la Comisaría de Lautaro. Testigo de la detención fue José Rafael Meliqueo Ancatén, quien concurrió a avisar de lo sucedido a la esposa del afectado, señora Celinda María Melihuén Mellado. Enterada de los hechos, la cónyuge concurrió al día siguiente a la comisaría de Carabineros de Lautaro, donde se le informó que sí había permanecido allí, pero luego de ser interrogado había quedado en libertad. Sin embargo, el afectado nunca más regresó a su casa ni se supo de su paradero. Es necesario destacar que el día 4 de octubre de 1973, su primo José Andrés Meliquén Aguilera y un amigo, Sergio Navarro Schifferli fueron detenidos en sus respectivos domicilios de la ciudad de Lautaro por los mismos carabineros que detuvieron al afectado. José A. Meliquén Aguilera y Sergio Navarro Schifferli, junto a José Ignacio Beltrán Meliqueo continúan desaparecidos”. A **fs. 56 a fs. 59 (Tomo I)**, gestiones judiciales realizadas, entre ellas extracto de declaración ante el Tribunal de Celinda María Melihuén Mellado, de fecha 9 de noviembre de 1990, cónyuge de José Ignacio Beltrán Meliqueo, respecto a la detención de este sostiene: “por comentarios de vecinos, había llegado a su conocimiento que los aprehensores de su marido fueron los carabineros Domingo Campos Collao y Enrique Ferrier Valeze, y que el afectado habría sido muerto, habiendo sido presumiblemente enterrado en una fosa ubicada en el predio del señor Pedro Roussel”.

B.3. A fs. 149 a fs. 152 (Tomo I), informe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile, que comunica a fs. 149 relación del personal de carabineros de Chile que figura de dotación de la Primera Comisaría Lautaro, entre los meses de marzo a diciembre de 1973, en el numeral 1 mayor Jorge Enrique Schweizer Gómez y en el numeral 23 cabo Domingo Antonio Campos Collao.

B.4. A fs. 83 a fs. 128 (Tomo cuaderno reservado), hoja de vida de Domingo Antonio Campos Collao. Que a **fs. 127** párrafo 6 de fecha 07 de mayo de 1977, condecoración: “El 27.04.77 se le concedió condecoración de 3ra. Clase por servicios distinguidos prestado el 11.09.73”.

C. Para ratificar e ilustrar lo que se viene razonando podemos agregar los dichos del propio acusado en las siguientes declaraciones fs.69 a fs. 70 (Tomo I), “aduce que recuerda claramente cuando un día, llegó el comandante del regimiento La Concepción de Lautaro, siendo acompañado por el sargento de ejército Sergio Salazar y le pidieron al señor comisario de Lautaro que hiciera entrega de los nombres de todas las personas que se dedicaban al abigeato en Lautaro y sus alrededores, nómina en la cual se consignaba a José Ignacio Beltrán Meliqueo”. De la misma forma en declaración de fs. 83 a fs. 84 (Tomo I) “Recuerda haber visto a la viuda de José Ignacio Beltrán Meliqueo, consultando por él en la comisaría de Lautaro”.

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 1.617 a fs. 1.659 (Tomo V)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero que ha existido el delito de **Secuestro Calificado** en la persona de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Domingo Antonio Campos Collao**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

D. EN CUANTO A LA DEFENSA DEL ACUSADO DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO:

11°) Que a **fs. 2.130 a fs. 2.137 (Tomo VI)**, el abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Domingo Antonio Campos Collao, en lo principal de su escrito contesta la acusación fiscal, acusación particular y adhesiones a la acusación.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Excepción de fondo: Prescripción de la acción penal

B. Solicitud de absolución. No se encuentra acreditado que el señor Domingo Antonio Campos Collao, haya tenido participación en el hecho delictivo por el cual se le acusa.

C. Atenuantes. Invoca la prescripción gradual y Artículo 11 N°6 y N°8 y artículo 103 ambos del Código Penal, las que serán analizadas en los considerandos posteriores.

A. Excepciones de fondo: Prescripción de la acción penal: la defensa alega la prescripción de la acción penal en base a que de la propia querella que dio inicio a la causa, de los antecedentes aportados, informes, declaraciones, acusaciones fiscal y particular, así como adhesión a la acusación

fiscal, sostiene que se desprende que el supuesto delito de secuestro calificado que se le imputa a su representado Domingo Antonio Campos Collao, se habría cometido el día 15 de octubre de 1973, día en el cual José Ignacio Beltrán Meliqueo habría sido trasladado a la Comisaría de Carabineros de Lautaro, desconociendo su paradero hasta el día de hoy. Que se desprende que entre el supuesto delito y el inicio de la acción penal han transcurrido casi 40 años, superando con creces el plazo requerido por la Ley para la prescripción de la acción penal. Se apoya en los artículos 93 N°6, 94 del Código Penal, sosteniendo que, así la prescripción de la acción en los autos es manifiesta y se darían los requisitos establecidos por el código punitivo para que proceda. Que es una obligación que está sea declarada de oficio por los tribunales, tal como lo ordena el artículo 103 del código del ramo. Arguye que existe una corriente doctrinaria en la Corte Suprema de Justicia que sostiene que la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar prescribirían al igual que los delitos comunes, ya que es una institución fundada en la necesidad de consolidar y poner fin a situaciones irregulares que se producen con el transcurso del tiempo, entre la ocurrencia de un hecho punible y el inicio de la persecución penal, produciendo el fin de la potestad represiva del Estado. Discute si el delito de autos podría ser considerado delito de lesa humanidad, al cual le serían aplicable el Convenio de Ginebra de 1949, específicamente el II Protocolo Adicional al Convenio de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional, el cual de ser aplicable en este caso volvería inutilizable el artículo 94 del Código Penal, argumenta en ese sentido y que excepcionalmente dicho convenio se aplicarán a conflicto armado sin carácter internacional, conforme al artículo N°3 común para todos los Convenios de Ginebra, refiriendo para ello al jurista Jean Pictet, en cuanto al no haber definido el concepto conflicto armado no internacional, aduciendo a una lista de condiciones las que encuadrarían dentro de un conflicto armado no internacional, las que señala, y que de la lectura de tales condiciones desprende que éstas no se cumplieron en forma alguna durante el tiempo que se mantuvo régimen militar o dictadura producida en septiembre de 1973, por lo que no podría entenderse de ninguna forma que existió un conflicto armado no internacional en dicho periodo. Afirma que es innegable que en el presente caso, si procede la prescripción de la acción penal, por lo que debería declararse de oficio por el Tribunal, liberando de esta forma a su representado de todos los cargos que se le imputan.

B. Solicitud de absolución. No se encuentra acreditado que el señor Domingo Antonio Campos Collao haya tenido participación en el hecho delictivo por el cual se le acusa: la defensa sustenta que el único antecedente probatorio tanto de la forma que se habría perpetrado el ilícito como la participación de los autores, entre ellos su representado, provienen de las declaraciones de Segundo Meliqueo Levinao (fallecido) José Meliqueo Ancaten (fallecido), familiares de la supuesta víctima y su cónyuge. Advierte que los testimonios hacen referencia que José Beltrán había sido detenido en la plaza de armas de Lautaro, y que posteriormente este habría sido liberado, y sin que en dicha detención le haya cabido responsabilidad ni como autor, cómplice ni encubridor al Sr. Domingo Campos. Analiza la declaración de Celinda María Melihuén, de fs. 67 a fs. 68. Que nada se dice de su representado, ni se indica específicamente cual conducta habría desplegado en relación al ilícito. Soflame lo consignado por el artículo 141 del Código Penal. Que la acusación no indica cual es la conducta desplegada por su representado y la cual se le imputa, por consiguiente, cual es la hipótesis de autoría del artículo 15 del Código Penal en que habría incurrido. Apunta la defensa que, de esta manera, es manifiestamente insuficiente que la resolución que acusa a Domingo Antonio Campos Collao, no contenga una descripción lo suficientemente precisa y clara de las conductas que se le imputan para que pueda preparar adecuadamente su defensa. Que la exigencia reclamada e incumplida en la acusación, no sólo emana de las normas Procedimentales, sí no que también encuentra su apoyo en el artículo 7.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación al Derecho a la Libertad Personal. Que la únicas funciones que su representado desempeñaba el 11 de septiembre de 1973 y siguientes, fue que era teniente de carabineros de dicha comisaria de Lautaro, pero nunca se dedicó a organizar, ni coordinar a algún grupo de funcionarios policiales que colaboraran con personal del regimiento La Concepción de Lautaro para detener e interrogar a personas. Que tal aseveración contenida en las acusaciones y adhesiones a la acusación, no resultan ser probada en el proceso. De esta forma no existiría participación criminal que se le pueda imputar a su representado, por no existir ningún medio de prueba que se haya introducido en tal sentido. Soflame que, ningún antecedente del proceso permite dar por establecido que el señor Campos haya organizado algún grupo u asociación ilícita. Que solo estaría acreditado que él era teniente de dicha unidad policial, pero no se ha demostrado que tuvo participación en la detención y/o secuestro de la víctima. Cita el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal.

F. ANÁLISIS DE LA DEFENSA

12°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA:

Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

Obligación de investigar:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

A. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

B. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato

del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

D. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo

aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

F. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...)el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo **225**, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo **41** asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento

de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo **42** anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo **184** expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo **115** explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo **277** expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo **159** acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación

efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. 233 (...) Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; 299 (...) Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar

todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afínica que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129 (...)** una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que

en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130** (...) Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114** (...) Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo **387**. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme.

Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las

autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha

dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade (...) que la investigación de la violación de determinado

derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos

derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus

beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

G. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en **Eduardo Ferrer Mac-Gregor-** (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

G.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así

se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

G.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

G.3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

G.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

G.5. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

G.6. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

G.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables

intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

G.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

G.9. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

G.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

G.11. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

G.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

G.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

G.14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

H. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso en la sentencia. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia y que la defensa nada expresa. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos y documentos, sino que se refiere a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que esta defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

Jurisprudencia Internacional Sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) Pronunciada por los Tribunales Alemanes.

A. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe

considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) y **Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

B. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas

a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

C. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios,

las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos—tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y—siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos— en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

D. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo —alemanes, ucranianos y judíos— tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades

fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

E. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia

y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

F. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

G. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de **Claus Roxin** (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso

de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

H. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de

fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

I. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

J. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar

y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

K. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

L. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

M. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se

señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

N. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho.** Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

Ñ. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

Ñ.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. **Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.**

Ñ.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora

bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

Ñ.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

Ñ.4. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

O. En este caso, el **secuestro calificado** desde el inicio (como indica el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de **fs. 1.617 a fs. 1.659 (Tomo V)**, de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, fue al margen de todo derecho. Las múltiples pruebas, directa e indirecta generales y específicas que se han detallado y ponderado precedentemente, rebata cualquier argumento de la defensa, pues son alegaciones que no derriban el auto acusatorio. La realidad de las cosas demuestra que el acusado **Domingo Antonio Campos Collao** actuó como autor en estos hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 1.617 y siguientes (Tomo V). Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para que el acusado tenga el grado de participación que se ha especificado, sin perjuicio de otras consideraciones que puedan realizarse más adelante.

Estado De Derecho:

A. Estado Autoritario: Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (**Oscar Vilhena Vieira** (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (**Dante Jaime Haro Reyes**: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (**Pablo Marshall Barberán** (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

B. Origen: El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (**Luis Villar Borda** (2007): Estado de Derecho y Estado

Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (**Haro**, p. 118).

C. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo**: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (**Marshall**, pp. 187-188).

D. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro**, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (**Haro**, p. 126).

E. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del

Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra: a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

F. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que

al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad**. Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo**. Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias- separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

13°) Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso frente a una actuación de los agentes del Estado estos deben actuar respetando los derechos de las personas con proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad. Teniendo en especial consideración que los agentes del Estado andaban armados con armas de fuego. El **secuestro calificado** (como indica el mérito del proceso) de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, fue al margen de todo derecho. En consecuencia, es posible hacer el reproche penal al acusado indicado, sin perjuicio de otras reflexiones que pueden hacerse más adelante.

Convenio de Ginebra

A. Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago "**Caso Luis Almonacid Dúmenez**" de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que "**los Convenios de Ginebra**" consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de

1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de *Ius Cogens* o Principios Generales de Derecho Internacional".

G. ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA

14º) Que haciéndonos cargo de la defensa de **fs. 2.130 a fs. 2.137 (Tomo VI)**, del abogado **Patricio Contreras Boero** por el acusado Domingo Antonio Campos Collao, el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a la declaraciones indagatorias del acusado Campos Collao y todos los fundamentos

pertinente que atingen a esta defensa en el análisis que se hizo precedentemente, precisando que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: Que la defensa en sus alegaciones no presento excepciones de previo y especial pronunciamiento.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular. El tribunal puntualiza lo siguiente:

C. Excepción de fondo: En cuanto a la excepción de fondo referida la prescripción de la acción penal. Desde ese punto de vista para rechazar esa alegación el Tribunal razonará lo que a continuación se indica: **a)** Este tribunal se ha pronunciado precedentemente sobre esta materia en las causas indicadas en los considerandos anteriores de esta sentencia. Todos fallos condenatorios y ejecutoriados que han rechazado este tipo de excepción de fondo alegada. **b)** En este mismo sentido ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Almonacid Arellano y otros versus Chile”, de fecha 26 de septiembre de 2006, que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “Barrios Altos versus Perú” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.3, 82.4, 82.6, 82.7, 108, 112 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad internacional del Estado, agregando que el decreto ley 2191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En el párrafo 112, aludiendo al caso Barrios Altos versus Perú, la Corte citada indicó: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el

establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables, reconocidos por el derecho internacional de los Derechos Humanos.”

C.1. Que además de los razonamientos expuestos precedentemente, el tribunal tendrá presente lo que en forma reiterada la Excma. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como el investigado en esta causa y por el cual se ha dictado acusación – que corresponde a homicidio simple– es un delito de tal magnitud que debe ser imprescriptible. A modo de ilustración, el máximo Tribunal así se ha pronunciado en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 34.392-2016, 40.168-2017, 4080-2018, 4568-2018, entre otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles 27.525, 27.526, 45.345, 113.990, 113.989, 18.780, 29.877, 45.344, 45.371, 29.869, 27.527 y rol 114.001, todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados. Asimismo, el ilícito materia del auto acusatorio es de aquellos que la doctrina reconoce como de lesa humanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile, tiene plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que es imprescriptible e inamnistiable. En consecuencia para la excepción de prescripción de la acción penal, este Tribunal tiene en consideración toda la jurisprudencia reciente citada y en especial, el fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, que en definitiva permite, **rechazar dicha excepción** y así se dirá en lo resolutivo.

D. Solicitud de absolución. Que sobre lo pedido por la defensa, no es posible dar lugar a ello, toda vez que el Tribunal estará a todo lo razonado y ponderado en los medios probatorios aquilatados y relacionados en forma precedente, puntualizando lo siguiente:

D.1. Que a diferencia de lo que expone la defensa, en una lectura integral y relacionada del auto acusatorio, y lo mismo de los hechos establecidos en esta sentencia, se desprende de una manera coherente y lógica como sucedieron los hechos. Junto a lo cual, como se ha hecho también en este fallo las pruebas que van acreditando dichos hechos.

D.2. La viuda, Celinda María Melihuén Mellado como además lo ha reiterado desde el inicio de la desaparición de su cónyuge, comienza su periplo de la búsqueda de su marido no por un capricho, sino por un hecho preciso y cierto como se ha ponderado en la causa y esto es por los relatos de Segundo Meliqueo Levinao y de José Rafael Meliqueo Ancatén, que dan cuenta que José Ignacio Beltrán Meliqueo, se encontraba en la plaza de armas de Lautaro y allí fue detenido, no por cualquier personas sino, por carabineros de Lautaro, entre ellos el acusado Domingo Antonio Campos Collao.

D.3. Que el relato de Celinda María Melihuén Mellado no es artificial, ni inventado, ella es vista en esa época por el propio acusado Domingo Antonio Campos Collao, más aun concurre a la comisaria y se le indica (al llevarle alimentos) que es la última que va a comer a su marido.

D.4. Para reafirmar este relato de los hechos, como se ha ponderado en esta sentencia, Elizabeth Agurto Romero, a través de los dichos de su marido el carabinero José Manuel Benni, es quien también manifiesta a la viuda que José Beltrán Meliqueo estuvo detenido 6 días y luego fue sacado por funcionarios de carabineros.

D.5. Ratificando lo anterior, lo que además se desprende del mérito del proceso, que el acusado conocía perfectamente a José Ignacio Beltrán Meliqueo. Es el propio acusado que cuando los familiares fueron a retirar el cuerpo de José Ignacio Beltrán Meliqueo (que después resulto ser que correspondía a otra persona) manifestó a los hijos de este, que él había matado a su padre y reitero que lo volvería a matar si fuera necesario.

En consecuencia todos los alegatos para pedir la absolución de Domingo Antonio Campos Collao, no se ajusta a la realidad, al mérito del proceso, a la prueba que hay en contra del acusado, ni a los estándares normativos e interpretativos en materia de violaciones a los Derechos Humanos, en este caso de lesa humanidad.

En consecuencia **no es posible dar lugar a la absolución** pedida por la defensa, por lo antes razonado.

H. ACUSACIÓN PARTICULAR

15°) A fs. 1.748 a fs. 1.757 (Tomo V), la abogada Carolina Contreras Rivera, en representación por la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del ramo, formula acusación

particular en contra de Domingo Antonio Campos Collao y Jorge Enrique Schweizer Gómez, solicitando se le condene como autores del delito de secuestro calificado, en contra de José Ignacio Beltrán Meliqueo, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 141 inciso final del Código Penal de la época, condenándolos e imponiendo las penas que señala, más las accesorias legales, con costas. Reproduce los hechos y comparte lo razonado en cuanto a la calificación jurídica del ilícito referidos en la acusación fiscal. Considera que concurre la circunstancia de la **agravante 8ª del artículo 12** del Código Penal, respecto de la participación que les cabe en la comisión del ilícito a los acusados. Toda vez que plantea que se desprende que quienes llevaron adelante la comisión de estos hechos ostentaba la calidad de funcionario público, en su calidad de carabineros de Chile, para fundar la concurrencia de la agravante, requiere tener por reproducidos todos los medios de prueba considerados en el basamento primero del auto acusatorio de fs. 1.617 y siguientes. Solicita no se considere la aplicación de la atenuante contemplada en el artículo 11 N°6 del mismo cuerpo legal, por no configurarse, en su opinión, dicha circunstancia lo que fundamenta con jurisprudencia. Reseña el detalle de las causas en las que han sido condenados los acusados Domingo Antonio Campos Collao y Jorge Enrique Schweizer Gómez, estimando que estas condenas y especialmente las condenas por hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de la actual causa, dan cuenta de indicios fehacientes que cuestiona la citada irreproachable conducta. Para fundar su pretensión solicita se tengan por reproducidos todos los medios de prueba considerados en el basamento trigésimo segundo del auto acusatorio de fs. 1.617 y siguientes. Invoca se le imponga a los acusados una pena de veinte años de reclusión mayor en su grado máximo, por su participación en calidad de autores del delito de secuestro calificado perpetrado en contra Beltrán Meliqueo.

16°) Que, haciéndonos cargo de la acusación particular de **fs. 1.748 a fs. 1.757 (Tomo V)**, la abogada Carolina Contreras Rivera, respecto de Domingo Antonio Campos Collao y Jorge Enrique Schweizer Gómez, mantiene la misma calificación de los hechos y participación y solo discute las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que no se considere la atenuante del artículo 11 N°6 y se aplique la del artículo 12 N°8, del Código Penal. Las que serán analizadas con posterioridad.

I. ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN

17°) A fs. 1.729 a fs. 1.739 (Tomo V) el abogado **David Alberto Morales Troncoso**, en representación de Luis Nicolás Beltrán Melihuén y otros, en lo principal de su escrito adhiere a la acusación fiscal, dicta en contra de los ex funcionarios de Carabineros de Chile Jorge Enrique Schweizer Gómez y Domingo Antonio Campos Collao, como autores del delito de secuestro calificado en su carácter de lesa humanidad en la persona de José Ignacio Beltrán Meliqueo, perpetrado a contar del 15 de octubre de 1973, en la comuna de Lautaro.

18°) A fs. 1.745 (Tomo V), el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de la Agrupación de Familiares Amigo Derechos Humanos, se adhiere a la acusación fiscal, mediante la cual se considera autores del delito de secuestro calificado perpetrado en contra de José Ignacio Beltrán Meliqueo a Jorge Enrique Schweizer Gómez y Domingo Antonio Campos Collao.

19°) Que haciéndonos cargo de las adhesiones a la acusación fiscal, coincidiendo en los hechos y el derecho con el Tribunal, sobre este materia en consecuencia nada tiene que reflexionar este Ministro.

J. REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

20°) Para mayor ilustración y atendido además que se ha alegado la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, que se analizará más adelante, es necesario reflexionar sobre el delito de lesa humanidad.

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de

Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excma. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **Homicidio simple**, es un delito de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo *Almonacid Arellano y otros vs Chile* dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26

de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

C. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”** afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de

ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

D. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones

extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

E. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

E.1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.

E.2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

E.3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

E.4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

E.5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

E.6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

E.7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

F. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las

funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

G. Cabe puntualizar que en el caso de **“Hilario Barrios Varas” (causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema)**, en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

J. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

21°) Atenuante de Responsabilidad Penal: el abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Domingo Antonio Campos Collao de **fs. 2.130 a fs. 2.137 (Tomo VI)**, alega como atenuantes de responsabilidad penal, la prevista en el **artículo 11 N°6 y N°8** del Código Penal y la del **artículo 103** del mismo cuerpo legal.

A. Que en relación a la minorante del **artículo 11 N°6** del Código Penal. El Tribunal **dará lugar** a esta minorante, en **calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**. Al acusado le favorece esta circunstancia minorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes de **fs. 1.411 a fs. 1.415 (Tomo IV)**, y a **fs. 1.591 a fs. 1.596 (Tomo IV)**. Todo a la época de los hechos, esto es, a contar del 15 de octubre de 1973 no tenía antecedentes penales pretéritos. Se califica de simple porque razonar de otra manera en

relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

B. Que en relación a la minorante del **artículo 11 N°8** del Código Penal, esta atenuante no fue desarrollada por la defensa solo enunciada. En conformidad al mérito del proceso no existe elemento alguno para tenerla por configurada, en consecuencia **se rechaza esta minorante** pedida.

22°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso**

“Nicanor Moyano Valdés”) ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excm. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones

internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la **Illma. Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero**, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la Illma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal

Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza** la petición realizada por el abogado Patricio Contreras Boero, en representación Domingo Antonio Campos Collao de fs. **2.130 a fs. 2.137 (Tomo VI)**.

23°) Agravantes de Responsabilidad Penal.

La abogada **Carolina Contreras Rivera**, en su escrito de **fs. 1.748 y siguiente (Tomo V)**, invocó como circunstancia agravante la prevista en el **artículo 12 N°8** del Código Penal.

24°) Que en relación a la agravante del artículo **12 N°8** del Código Penal, tal como este Tribunal lo ha dicho en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotzqui, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas este Tribunal acogerá la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo para el acusado **Domingo Antonio Campos Collao**. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad, también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habrían tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionario público no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes

públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría haber aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de calidad de ser funcionario público. Teniendo además en consideración que se estaba bajo un régimen militar, el que con mayor razón el acusado aprovecha la calidad de funcionario público para cometer el delito. El delito de secuestro calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. Si no hubiera existido el régimen militar, si la persona no fuera carabineros de Chile, no habría sido posible que esa patrulla hubiera detenido. **Por ello es que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal.**

25°) Determinación de la Pena. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, todo lo anterior debe combinarse con la posibilidad cierta que los encartados acceda a cumplir parcialmente alguna pena en libertad según los beneficios de la **Ley 18.216** (salvo que exista una prohibición legal o no esté de acuerdo con los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos en la materia).

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente), jugando un rol fundamental que en la determinación de la pena exista la posibilidad que los acusados cumplan una parte de la pena en libertad. Pues debe

preferirse aquello a que cumpla una parte de la pena privados de libertad (salvo que exista prohibición legal o esté en contra de los estándares normativos e interpretativos, sobre derechos humanos en la materia).

26°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: **Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo**, perpetrado en la comuna de Lautaro, a contar del 15 de octubre de 1973. Delito previsto y sancionado en el **artículo 141 del Código Penal**, vigente a la época de los hechos, que tiene una pena de presidio mayor en cualesquiera de sus grados.

27°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 1.617 a fs. 1.659 (Tomo V)**, de 14 de diciembre de 2021, el encartado **Domingo Antonio Campos Collao**, está acusado en calidad de autor por el delito de **Secuestro Calificado** en la persona de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, delito perpetrado en la comuna de Lautaro, a contar del 15 de octubre de 1973. Ahora bien, es necesario razonar lo siguiente:

En cuanto a la pena a imponer para el acusado **Domingo Antonio Campos Collao**, a este le beneficia una atenuante, esto es, la contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal en calidad de simple y le perjudica la agravante del artículo 12 N°8 del texto citado. Haciendo la compensación racional de las circunstancias modificatorias en conformidad al artículo 68 del texto legal, el Tribunal puede recorrer al aplicar la pena toda su extensión. En este caso por el **delito de secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo**, se aplicará la pena de **DOCE AÑOS de PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO** más las accesorias legales.

28°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus Modificaciones Posteriores. Respecto al acusado **DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado**. En este caso se tiene en consideración, el informe pericial psiquiátrico N°538-2021 del Servicio Médico Legal, Departamento de Salud Mental Santiago, de fecha 23 de diciembre de 2021 que rola a **fs. 1.666 a fs. 1.674 (Tomo V)**, el cual concluye que el examinado no presenta manifestaciones psicopatológicas de relevancia médico legal en los

hechos que se investigan en esta causa judicial. En segundo lugar el informe del Centro de Reinserción Social Santiago Sur II, N°127/22 de fecha 25 de enero de 2022, que rola a **fs. 1.716 a fs. 1.720 (Tomo V)**, el que concluye que el Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social, no recomienda el ingreso del señor Campos Collao a las penas de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva.

29°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente el acusado tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

A. Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La

Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado

en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

E.4. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte

reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...].En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

E.6. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil

de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe

evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **Secuestro calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (**Nogueira, Humberto** (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y

fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

30°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 al acusado** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. **(Núñez, Constanza (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36).** Lo anterior ha sido además ratificado por la **II tma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarle al acusado ningún beneficio y deberá cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

V. EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

31°) Que a **fs. 1.729 a fs. 1.739 (Tomo V)**, en el primer otrosí de su presentación, el abogado **David Alberto Morales Troncoso**, en representación de Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y de Verónica Yanet Beltrán Melihuén, deduce demanda de indemnización de

perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado y este último a su vez representado por el abogado Procurador Fiscal de la Araucanía Álvaro Sáez Willer, por la suma de \$250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos) para cada uno de sus representados, o lo que el Tribunal determine de acuerdo al mérito del proceso, por concepto de daño moral por el secuestro de su padre José Ignacio Beltrán Meliqueo, con los reajustes e intereses y las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. Hechos: el demandante soslaya lo ocurrido con la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo, quien el día 15 de octubre de 1973 salió de su domicilio ubicado en la comunidad Manuel Levinao de la comuna de Lautaro, hacia INDAP, a buscar semillas. En horas de la tarde mientras se encontraba en la plaza de armas de la ciudad, fue detenido por los funcionarios de carabineros Domingo Antonio Campos Collao y Enrique Ferrier Valeze y trasladado hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, siendo testigo de ese hecho Segundo Meliqueo Levinao (fallecido) tío de la víctima, quien avisó e informó a la familia a través de su hijo Rafael Meliqueo Ancaten (fallecido). Con esa información su cónyuge Celinda María Melihuén Mellado, concurrió al día siguiente a la citada unidad policial, donde se le informó que José Ignacio Beltrán Meliqueo, efectivamente estuvo detenido, pero luego habría sido dejado en libertad, al tercer día y ante la insistencia funcionarios de la comisaría le recibieron algunos alimentos, indicándole “esta es la última que va comer su marido”. Continuando reseñando lo acontecido y antecedentes descrito en la acusación fiscal.

B. El derecho: suscribe el querellante que los funcionarios de Carabineros de Chile, Jorge Enrique Schweizer Gómez y Domingo Antonio Campos Collao, en función de su cargo, cometieron el delito de secuestro calificado. En cuanto a las fuentes de responsabilidad: reproduce el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en cuanto consagra la responsabilidad del Estado, se apoya en jurisprudencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema. Que la responsabilidad del Estado proviene esencialmente de disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, citando el artículo 5 inciso segundo de la Constitución. Que en el caso de los funcionarios de Carabineros de Chile, sin lugar a duda están ligados al Estado por un vínculo de Derecho Público, como dependiente, refiere a al inciso segundo del artículo 1° Ley 18.575, artículo 38 de la Constitución Política y artículo 4° de la Ley de Base. En cuanto a la fuente de la obligación civil

particular para delitos que importen una violación a los Derechos Humanos, arguye a los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre esta materia, artículos 2329 del Código Civil, artículo 63.1 del Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y jurisprudencia al respecto.

C. Competencia de este Tribunal para conocer de la presente demanda de indemnización de perjuicios deducida. Afinca al artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. Y que resulta evidente que, por mucho que no pueda atribuirse al Estado de Chile la calidad de procesado, no le cabe duda que toda consecuencia patrimonial deriva del delito cometido por sus agentes, continua sus presentación en ese sentido y que lo anterior ha quedado zanjado por los tribunales superiores de justicia en relación a que sí se puede impetrar la acción ante el juez en lo penal que sustancia el proceso, cita jurisprudencia al respecto.

D. La imprescriptibilidad de la acción civil deducida en autos: se funda en que, tratándose de delitos de lesa humanidad, las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna no son aplicables, puesto que irían en contra de la voluntad expresada en la normativa internacional sobre Derechos Humanos, los que señala, de igual forma reseña jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Excelentísima Corte Suprema.

E. Compatibilidad de la indemnización reclamada con otros beneficios otorgados. Escruta que la indemnización de perjuicios pretendida no es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado de Chile, que el objeto de toda acción civil es la obtención de una compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los agentes del Estado de Chile, convocando jurisprudencia al respecto.

F. Daño provocado y el monto de la indemnización: que sus representados Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén, que la pérdida de su padre no solo significó una pérdida (desaparición) de un familiar cercano sino que de una figura que representaba un apoyo emocional y económico, pues era quien proveía lo necesario a la familia. Que a consecuencia de los agentes del Estado, quienes lo hicieron desaparecer, se desintegró el grupo familiar, toda vez que nunca más volvieron a ver a su padre, produciendo un daño irreparable por toda la vida, ya que por años no han tenido conocimiento que sucedió con su padre. Aduce que

Celinda María Melihuén Mellado y Carlos Mariano Beltrán Melihuén, no alcanzaron a obtener justicia ni reparación por el secuestro de su cónyuge y padre José Ignacio Beltrán Meliqueo, relatando lo acontecido con este. Proclama que el daño moral provocado a sus representados Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén, todos hijos de la víctima, debido al actuar reprochable de los acusados de autos, que si bien es subjetivo, lo cuantifica en una suma de \$250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos) para cada uno de sus representados, o lo que el Tribunal estime conforme al mérito de autos.

32°) Que de **fs. 2.082 a fs. 2.108 (Tomo VI)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, por el **Consejo de Defensa del Estado, Álvaro Saez Willer**, contesta la demanda civil entablada por el abogado David Morales Troncoso, representación de Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén, invocando la calidad de hijos de la víctima. Solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar sustancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su cómputo.

A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes, y por haber sido ya reparados en la forma que se expresara: el demandado civil opone la excepción de improcedencia de la indemnización reclamada, por haber sido preteridos legalmente los demandantes. Refiere a la ley 19.123 la que hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero- preferentemente en cuotas mensuales. Lo que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnización ha significado, a diciembre de 2019, las que detallan y cuya suma total es de \$992.084.910.400.-. Que para que ello fuera viable se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo más cercano, esto es padres, hijos y cónyuge, pretiriendo el resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos. Trae a colación el artículo 43 de la ley 16.744. Adiciona que la pretensión económica demandada es improcedente, porque existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los

hermanos de causantes víctimas de violación a los derechos humanos, como beneficiarios de las leyes de reparación. Sin perjuicio alega que los actores han obtenido reparación satisfactiva, que su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras prestaciones, que vienen a satisfacer el daño moral sufrido. Cita las reparaciones simbólicas realizadas. Que los actores son titulares por ley del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), por lo que, el cúmulo de reparaciones ha producido satisfacción de los mismos daños y cuya reparación se persigue en el presente juicio, por lo que no pueden ser exigidos nuevamente. Refiere a jurisprudencia y doctrina atinente. Finalmente sostiene que en mérito de lo expuesto opone a las acciones deducidas en auto por los actores, las excepciones de preterición en lo económico, y de reparación satisfactiva al respecto al haber sido ya reparados mediante las reparaciones simbólicas y de beneficio del salud, a través del programa PRAIS.

B. Excepción de prescripción extintiva:

B.1. Normas de prescripción aplicables: opone la excepción de prescripción de las acción de indemnización de perjuicios deducida por el mencionado actor, con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que, por encontrarse prescrita la demanda, se rechace en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en la demanda, el secuestro y desaparición de José Ignacio Beltrán Meliqueo, se produjo el 15 de octubre de 1973. Es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **17 de marzo de 2022**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de

notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

B.2. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Cita jurisprudencia. Que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

B.3. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que, los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permite concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

B. 4. Jurisprudencia sobre la materia: Cita jurisprudencia y reflexiona en ese ámbito. 1). Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, 2). Los Tratados

Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. Citando fallos al respecto. 3). Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. 4). Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. 5º) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la personas desaparecida. Adiciona fallo de la Excma. Corte Suprema.

B.5. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial. En efecto basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos e disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tacita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

B.6. Normas contenidas en el Derecho Internacional: funda que, en relación con las alegaciones expuestas por los actores en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Reseña a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Convenio de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 60/147 de 21 de marzo de 2006, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase íntegramente la demanda, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: vislumbra que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de las acciones indemnizatorias solicitadas y los montos pretendidos.

C.1. Fijación de la indemnización por daño moral: Alega que los demandantes ejercer acción indemnizatoria por daños moral y solicitan por este concepto la suma de \$750.000.000.- a razón de \$250.000.000.- para cada uno de ellos. Que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando

la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

C.2. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: en subsidio de las excepciones precedentes opuestas, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, y que benefician a los demandantes puesto que todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada: hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger la acción deducida en autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

33°) Que haciéndonos cargo de la contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A.** Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes, y por haber sido ya reparados.
- B.** Excepción de prescripción extintiva.
- C.** En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes, y por haber sido ya reparados. *(respecto de la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado David Alberto Morales Troncoso, en representación de Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén).* Se estará a lo ya razonado en las siguientes causas: **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014; **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014; **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015; **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016; **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016; **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016, **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015; **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitruftuén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016; **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016; **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016; **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016; **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017; **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017; **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017; **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017; **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016; **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017; **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017, **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018; **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020; **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020; **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018; **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de

2018; **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotski, sentencia de 23 de octubre de 2018; y **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

B. Sobre lo anterior, **esta excepción debe ser rechazada.** En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excm. Corte Suprema**, en especial:

B.1. El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, *la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile*. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la

citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

C. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También será rechazada. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excm. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol **1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excm. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excm. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excm. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas

son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el

fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo**. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

D.1. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls. Una Teoría de la Justicia**. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

D.2. Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

D.3. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*,

(Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena”* (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer una análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las

reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

D.4. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia **procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

D.5. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

D.5.a. Causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en

la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

D.5.b. El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la **“falta de servicio”**, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

D.6. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre la indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños

ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia aparece justo y razonable que se otorgue un monto de: **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos)**, para cada uno de los hijos de la víctima, esto es: Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén, por lo razonado anteriormente y así se dirá en lo resolutivo del fallo. Lo que equivale a una suma total de \$450.000.000.- (cuatrocientos cincuenta millones de pesos).

E. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

34°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito de secuestro calificado de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. De fs. 1.723 (Tomo V), Certificado de nacimiento de Luis Nicolás Beltrán Melihuén, padres José Ignacio Beltrán Meliqueo y madre Celinda María Melihuén Mellado.

B. De fs. 1.724 (Tomo V), Certificado de nacimiento de José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén, padres José Ignacio Beltrán Meliqueo y madre Celinda María Melihuén Mellado.

C. De fs. 1.725 (Tomo V), Certificado de nacimiento de Verónica Yanet Beltrán Melihuén, padres José Ignacio Beltrán Meliqueo y madre Celinda María Melihuén Mellado.

D. De fs. 1.726 (Tomo V) Certificado de defunción de Celinda María Melihuén Mellado, fecha defunción 8 de octubre 2021.

E. De fs. 1.727 (Tomo V), Certificado de defunción de Carlos Beltrán Melihuén, fecha defunción 24 de marzo de 2019.

F. De fs. 1.728 (Tomo V), Certificado de matrimonio de José Ignacio Beltrán Meliqueo y Celinda María Melihuén Mellado.

G. De fs. 1.957 a fs. 2.073 (Tomo VI), ordinario N°179 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de fecha 08 de marzo de 2022, en el que se adjunta Capítulo 2, Normas Técnica N°88, para la Atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.

H. De fs. 1.803 a fs. 1.954 (Tomo V), informe del Arzobispado de Santiago Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en que se acompaña: Pre-informe Trabajo Diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos; Informe de Trabajo de Diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos; Salud Mental: síntesis del trabajo con niños de familiares de detenidos desaparecidos; algunos factores de daño a la salud mental; Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos; Algunos problemas de salud mental detectados por equipos psicológicos psiquiátrico; Daño psicológico prolongado de los familiares de detenidos desaparecidos; y Salud Mental y Violaciones a los derechos humanos.

I. De fs. 2.120 a fs. 2.122 (Tomo VI), informe del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), Araucanía Sur, en cual acompaña link de descargas de antecedentes teóricos sobre la secuela en el plano de la salud mental han sufrido los y las familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Chile, cuya génesis está en el régimen militar.

J. De fs. 2.163 a fs. 2.168 (Tomo VI), informe psicológico de fecha octubre de 2022, respecto de José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén, evaluación realizada por la psicóloga Nicole Eliana Osses Jara, el cual concluye que representa síntomas graves, como afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales y dificultades moderadas en la actividad social laboral como consecuencia de la experiencia traumática, ideación suicida, rituales obsesivos o cualquier alteración a la dinámica biopsicosocial del individuo, lo que genera desajustes psicológicos severos, daño moral y psicológico.

K. De fs. 2.169 a fs. 2.174 (Tomo VI), informe psicológico de fecha octubre de 2022, respecto de Luis Nicolás Beltrán Melihuén, evaluación realizada por la psicóloga Nicole Eliana Osses Jara, el cual concluye que representa síntomas graves, como afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales y dificultades moderadas en la actividad social laboral como consecuencia de la experiencia traumática, ideación suicida, rituales obsesivos o

cualquier alteración a la dinámica biopsicosocial del individuo, lo que genera desajustes psicológicos severos, daño moral y psicológico.

L. De fs. 2.175 a fs. 2.181 (Tomo V) informe psicológico de fecha octubre de 2022, respecto de Verónica Yanet Beltrán Melihuén, evaluación realizada por la psicóloga Nicole Eliana Osses Jara, el cual concluye que representa síntomas graves, como afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales y dificultades moderadas en la actividad social laboral como consecuencia de la experiencia traumática, ideación suicida, rituales obsesivos o cualquier alteración a la dinámica biopsicosocial del individuo, lo que genera desajustes psicológicos severos, daño moral y psicológico.

M. Testimonios sin tachas y legalmente examinados de Nicole Eliana Osses Jara de **fs. 2.198 a fs. 2.199 (Tomo VI)**, de Lino Esteban Ancaten Meliqueo de **fs. 2.201 a fs. 2.202 (Tomo VI)**, y de Blanca Siria Levinao Meliqueo de **fs. 2.203 (Tomo VI)**, quienes son contestes y en síntesis declaran. La primera que los conoce desde octubre del 2022 desde el ámbito profesional a raíz de una evaluación psicología y los otros dos testigos los conocen desde que eran niños por vivir en la misma comunidad. Que les consta el sufrimiento y el daño psicológico a raíz de la ausencia de su padre.

35°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por el delito de **Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedente la indemnización que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por el demandante; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por el actor y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por el delito de **Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, cometido por los Agentes del Estado**, la suma que ante se ha detallado, esto es la suma de **\$150.000.000.-** (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los hijos de

la víctima José Ignacio Beltrán Meliqueo a saber: Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén. Lo que da una **suma total de: \$450.000.000.- (cuatrocientos cincuenta millones de pesos).**

En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado por el Instituto de Previsión Social, en el ordinario N°4792-6902 de fecha 04 de abril de 2022, que consta a fs. 2.116 (Tomo VI), en cuanto informa los beneficios de reparación leyes N°19.123 y N°19.980, recibidos por la cónyuge e hijos de la víctima Ley Rettig don José Ignacio Beltrán Meliqueo.

36°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

VI. ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N°6 y N°8, 12 N°8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69, 103 y 141 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Ley 20.357**, **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y los **Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I.- QUE NO HA LUGAR a la excepción de fondo, esto es la **prescripción de la acción penal** interpuesta por el abogado Patricio Contreras Boero, en representación del acusado Domingo Antonio Campos Collao a fs. **2.130 y siguientes (Tomo VI).**

II. QUE SE CONDENA a DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO, R.U.N. 2.582.797-K, ya individualizado, en calidad de **AUTOR** a la pena de **12 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, MÁS LAS ACCESORIAS LEGALES** correspondientes a la inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por el delito de secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo. Perpetrado a contar del 15 de octubre de 1973, en la comuna de Lautaro. Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad.

III.- Que respecto al acusado **DOMINGO ANTONIO CAMPOS COLLAO**, según se expresó, **no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216**, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de **abono** los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A). PRISIÓN PREVENTIVA: a fs. 1.426 a fs. 1.470 (Tomo IV) se somete a proceso y se **suspende la prisión preventiva**, por encontrarse cumpliendo recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco cumpliendo condena en otras causas.

IV.- La pena impuesta al condenado comenzará a regir desde que **se presente o sea habido en la presente causa**.

V.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas a al acusado, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

VI.- QUE NO HA LUGAR a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Saez Willer, en representación del Fisco de Chile de fs.2.082 a fs. 2.108 (Tomo VI), esto es:

A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes, y por haber sido ya reparados.

B. Excepción de prescripción extintiva.

Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

VII.- Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el abogado **David Alberto Morales Troncoso**, en representación de Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén, de **fs. 1.729 a fs. 1.39 (Tomo V)**, en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de secuestro calificado en su carácter de lesa humanidad en la persona de **José Ignacio Beltrán Meliqueo**, la suma:

De **\$150.000.000.-** (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los hijos la víctima, a saber: Luis Nicolás Beltrán Melihuén, José Ignacio Segundo Beltrán Melihuén y Verónica Yanet Beltrán Melihuén,

Lo que da una **suma total de \$450.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos)**.

VIII.- La suma anterior deberán ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente bajo apercibimiento de arresto al sentenciado, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese**.

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad. Asimismo elévese en **consulta el sobreseimiento** de fs. 1.799 (Tomo V) de fecha 07 de marzo de 2022.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 45.355.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Itma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a veintinueve de abril de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (YST).